



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ
GALLO FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS**



TESIS

**“Los beneficios otorgados al colaborador eficaz y la teoría de responsabilidad
solidaria en la reparación civil en el proceso penal”**

PRESENTADA POR

Bach. Ramírez Altamirano Delia Aydeé

PARA OPTAR EL TITULO DE ABOGADA

ASESOR

Dr. Balcázar Zelada José María

LAMBAYEQUE, 2019

**Tesis denominada “Los beneficios otorgados al colaborador eficaz y la teoría de responsabilidad solidaria en la reparación civil en el proceso penal”,
presentada para optar el título de abogada, por:**

Bach. Ramírez Altamirano Delia Aydeè
AUTORA

Dr. Balcázar Zelada José María
ASESOR

APROBADO POR:

Mag. Ponte Duranto Ricardo
PRESIDENTE

Dr. Lamadrid Ubillus Alejandro
SECRETARIO

Mag. Cevallos De Barrenechea Carlos
VOCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA



ACTA N° 232

Sustentación para optar el título de Abogado de doña Delia Aydeé Ramirez Altamirano.
Up en la ciudad de Lambayeque, en la Sala de sustentación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 6:00 p.m. del día jueves 12 de diciembre del 2019, se reunió el Jurado con la siguiente composición:

PRBaldemar : Dr. WILLY CARDOSO DUBARRIO
BECARARIO : Dr. ALBERTO LAFRANCESCO
Vocal : Eng. Carlos Cevallos de Barrenechea

Con el objeto de calificar la sustentación de la candidata Delia Aydeé Ramirez Altamirano, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tests.

b) Entregó el Presidente en vista a la sustentante para que exponga la Tesis titulada: "FOSFATOS DE COCAína en la corrosión de metales en el río Tarma".

Releído por la bachiller: Delia Aydeé Ramirez Altamirano, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizada con Resolución N° 224-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 05 de diciembre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de Abogado, exigido en el Reglamento del Examen de Grado de la Universidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Entendiéndose el siguiente resultado: con la nota 10.00 el calificativo **deficiente**, y apta para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

Siendo las 10:00 p.m., de este día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del Jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, para los fines que estime pertinente.

Lambayeque, jueves 12 de diciembre del 2019

Mag. RICARDO PONTE DURANTO
Presidente del Jurado

Dr. ALEJANDRO LAMADRID UBILLUS
Secretario del Jurado

Mag. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado

DICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre, por demostrarme siempre su amor, confianza y apoyo incondicional y a mi padre, que está siempre motivándome con sus valiosos consejos.

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios, por ser mi principal fortaleza, por haberme dado la vida y por permitirme llegar a este momento tan importante en mi formación profesional y a mis padres quienes son mi motor y mi mayor inspiración porque a través de su apoyo, cariño y buenos valores ayudaron a trazar mi camino.

INDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
INDICE	v
INDICE DE TABLAS	x
INDICE DE GRÁFICOS	xi
RESUMEN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTRODUCCIÓN	15
CAPITULO I	19
ASPECTOS METODOLOGICOS	19
1.1. Realidad Problemática.....	19
1.1.1. Planteamiento del Problema.	19
1.1.2. Formulación del Problema	19
1.2. Justificación e Importancia del Estudio	19
1.2.1. Justificación del Estudio.....	19
1.2.2. Importancia del Estudio	20

1.3.	Objetivos	20
1.3.1.	Objetivo General.....	20
1.3.2.	Objetivo Específicos	21
1.4.	Hipótesis.....	21
1.5.	Variables.....	21
1.5.1.	Variable Independiente	21
1.5.2.	Variable Dependiente.....	22
1.6.	Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección	22
1.6.1.	Métodos.....	22
1.6.1.1.	Método Exegético Jurídico.....	22
1.6.1.2.	Método Sistemático Jurídico	22
1.6.1.3.	Método Hipotético Deductivo	23
1.6.1.4.	Método Inductivo.....	23
1.6.2.	Técnicas.....	23
1.6.2.1.	Análisis Documental.....	23
1.6.2.2.	Observación.....	24
1.6.2.3.	Encuesta	24
CAPITULO II.....		25
LA FIGURA DE LA COLABORACIÓN EFICAZ EN LA DOCTRINA.....		25

2.1. El Derecho Premial como justificación jurídica de la colaboración

eficaz	27
2.2. El origen de la figura de la colaboración eficaz.....	38
2.3. Beneficios que otorga la colaboración eficaz	44
2.4. Principios que rigen la colaboración eficaz	46
CAPITULO III	51
LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO BASE DEL RESARCIMIENTO	51
3.1. La responsabilidad penal	51
3.2. La Responsabilidad Civil	56
3.3. El carácter represivo de la responsabilidad civil.....	61
3.4. La cuantificación de la reparación civil.....	64
3.5. El incumplimiento de la reparación y los principios rectores de la estructura penal.....	67
CAPITULO IV	69
LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL.....	69
4.1. La responsabilidad en el resarcimiento del daño	69
4.2. Vías de solución de la responsabilidad solidaria, en función a la pluralidad de condenados por reparación civil.	76
4.3. Reparación civil y la sentencia de conformidad.	79

4.4. Condena civil sin condena penal en el nuevo proceso penal.....	82
CAPÍTULO V	86
ANÁLISIS Y RESULTADOS	86
Análisis de la necesidad de modificar la regla de colaboración eficaz a fin de evitar injustos respecto de la determinación del pago de la reparación civil	86
5.1. Análisis de los resultados:	86
5.1.1. Resultados del análisis estadístico.....	86
5.1.2. Resultados del análisis jurisprudencial.	93
5.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.	95
5.1.4. Resultados de entrevista.....	104
CAPÍTULO VI	108
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	108
6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	108
6.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES	132
6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS.....	136
CONCLUSIONES	139
RECOMENDACIONES	141
Bibliografía.....	143
ANEXOS.....	154
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ..	154

2.	Cuestionario de encuesta aplicada al Fiscal de la fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.....	157
3.	Solicitud enviada a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 160	
4.	Solicitud enviada al Ministerio Público.	161
5.	Resultados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque	162
6.	Resultados del Ministerio Público	171

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cuadro que compara cuantitativamente los expedientes ingresados por materia a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre los años 2015-2018	87
Tabla 2: Cuadro que compara cuantitativamente los procesos ingresados a las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la ciudad de Chiclayo entre los años 2015-2018.....	91
Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	95
Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	97
Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	98
Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	99
Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	101
Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	102

INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2015	87
Ilustración 2: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2016.....	88
Ilustración 3: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque durante el año 2017.....	89
Ilustración 4: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2018.....	89
Ilustración 5: Grafico sobre la evolución de la incidencia de los Delitos Contra la Administración Pública.....	90
Ilustración 6: Grafico que representa la comparación cuantitativa de los procesos ingresados a las fiscalías especializadas en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.	92
Ilustración 7: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 01 de la encuesta aplicada a los aoperadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	96

Ilustración 8: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 02 de la encuesta aplicada a los aperadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	97
Ilustración 9: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 03 de la encuesta aplicada a los aperadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	99
Ilustración 10: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	100
Ilustración 11: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 05 de la encuesta aplicada a los aperadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	102
Ilustración 12: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 06 de la encuesta aplicada a los aperadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque	103

RESUMEN

Es materia de discusión en el ámbito de la responsabilidad civil, la determinación del monto y los obligados a cubrirlo cuando tratamos el proceso de colaboración eficaz. Tal circunstancia evidencia una repercusión en la sociedad, mostrando una imagen incongruente del sistema judicial en el proceso de identificar a los responsables y velar porque el daño se repare. según el numeral 2 del artículo 479 inciso c del CPC, se observa la existencia de una reparación económica en proporción al delito, pero no respecto a los obligados, por lo que no existe un parámetro legal que identifique en qué proporción el colaborador debe cumplir con reparar el daño. si bien la ley n° 30737 representa un importante primer paso al tratar de encontrar una forma de establecer el monto por reparación civil, aún carece de una delimitación en cuanto al monto específico que debe asumir quien se sometió a la colaboración, lo cual se proyecta como propuesta a fin de realizar una correcta distribución y cuantificación respecto de la reparación económica.

Palabras Claves: Beneficios, Colaborador Eficaz, Responsabilidad Solidaria, Reparación Civil, Proceso Penal.

ABSTRACT

It is a matter of discussion in the field of civil responsibility, the determination of the amount and those required to cover it when we deal with the effective collaboration process. Such circumstance shows an impact on society, showing an incongruous image of the judicial system in the process of identifying those responsible and ensuring that the damage is repaired. according to numeral 2 of article 479 subparagraph c of the CPC, the existence of an economic reparation is observed in proportion to the crime, but not with respect to those obliged, so there is no legal parameter that identifies in what proportion the employee must comply with repair the damage. Although Law No. 30737 represents an important first step in trying to find a way to establish the amount for civil reparation, it still lacks a delimitation as to the specific amount that must be assumed by those who submitted to the collaboration, which is projected as a proposal in order to make a correct distribution and quantification regarding the economic reparation.

Keywords: Benefits, Effective Collaborator, Solidarity Responsibility, Civil Reparation, Criminal Procedure.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la presente investigación ha tenido como principal motivación el desequilibrio generado por la incorrecta distribución del pago de la reparación civil en el proceso por colaboración eficaz, originando una justicia incompleta y además la desconfianza en el ordenamiento jurídico penal por parte de la sociedad, justificándose el desarrollo de esta investigación en razón de que la regla sobre la reparación civil resulta incompleta o inexacta respecto a quienes y de qué manera corresponde realizar la cuantificación y el pago de la reparación civil, por otro lado el aspecto que justifica esta proyección académica es que deberá discutirse las diferentes posturas que explican y detractan la forma en que se maneja la reparación civil cuando se trata de atender la circunstancia procesal de un colaborador eficaz, A razón de lo cual resulta de suma importancia puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrán identificar los puntos débiles de la ley para con ello lograr establecer una propuesta de cambio que asegure el tratamiento adecuado en tanto corresponda a equilibrar solidariamente el pago de la reparación civil que mana del delito perseguido, a fin de evitar inseguridad en lo que corresponde a la participación del colaborador eficaz.

Esta realidad problemática es la que sirvió para enmarcar la formulación del problema que se construyó de la siguiente manera: ¿Qué efecto genera los beneficios otorgados al colaborador eficaz sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil del proceso penal?

Tal cuestionamiento fue respondido de manera a priori mediante lo que se reconoce como la hipótesis inicial que se construyó bajo la siguiente afirmación: Si. los beneficios otorgados al colaborador eficaz, no especifican el nivel de responsabilidad y la cuantía del pago de la reparación; entonces, esto surtirá un efecto negativo sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el proceso penal, por lo que debe incorporarse la puntualización en la regla

Es imprescindible explicar el hecho de que ambos aspectos metodológicos están compuestos por dos elementos que son las variables, las mismas que bajo una relación causal están configurando el esquema de la investigación, así los objetivos son delimitados por ellas y marcaron la estructura de la investigación en capítulos detallados a continuación.

En el Capítulo I, comprende el desarrollo de toda la estructura metodológica que incorporó la investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, partiendo desde la formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis y los métodos que se utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental.

Luego en el Capítulo II, titulado” La figura de la colaboración eficaz en la doctrina” se dedica a explicar el origen y fundamento jurídico de la colaboración eficaz, así como los beneficios otorgados y los principios que deben ser tomados en consideración para su adecuada aplicación

Seguidamente el Capítulo III, tiene como objetivo examinar la teoría de la responsabilidad penal como base del resarcimiento, teniendo en cuenta que, los daños indemnizables y los hechos que configuran delitos ostentan distintos criterios de imputación, resultando prudente determinar si la responsabilidad civil presenta el carácter represivo de la responsabilidad penal, partiendo de ello se analizó si la cuantificación de la reparación civil se ajusta a las directrices que señalan los principios rectores de la estructura penal.

Continuando El Capítulo IV, en el cual se estudia la solidaridad en el pago de la reparación civil en el proceso penal, se trata de definir como se impondrá la reparación civil a los responsables del evento delictivo cuando son varios los sujetos causantes de evento resarcible, por lo que se presentan vías de solución de la responsabilidad solidaria, en función a la pluralidad de condenados por reparación civil, lo que sucede al darse la sentencia de conformidad y por último se hace una referencia a la Condena civil sin condena penal en el nuevo proceso penal.

El Capítulo V, se ha encargado de recopilar la información anterior para agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de los aspectos puntuales de la realidad como lo son, el análisis estadístico respecto a los delitos que son de mayor incidencia en los juzgados penales y en los cuales se presencia la constante aplicación de la figura estudiada así como la recopilación de la opinión de los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque con el fin de identificar el nivel de conocimiento sobre el tema, así como la posibilidad de reforzar el planteamiento de la modificación de la estructura para una efectiva

aplicación de los beneficios que se obtienen cuando un sujeto se somete a la figura de la colaboración eficaz.

Finalmente en el Capítulo VI, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se construyeron las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se presentan al criterio evaluador del jurado de la tesis.

La Autora.

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema.

Esta proyección académica surge como una inquietud generada por la realidad evidenciada respecto a los Beneficios Otorgados Al Colaborador Eficaz Y La Teoría De Responsabilidad Solidaria En La Reparación Civil En El Proceso Penal

1.1.2. Formulación del Problema

¿Qué efecto genera los beneficios otorgados al colaborador eficaz sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil del proceso penal?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1. Justificación del Estudio

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la justificación social dado que se observa el desequilibrio generado por la incorrecta distribución de la obligación del pago de la reparación civil en el proceso de colaboración eficaz, produciendo la apreciación de una justicia incompleta, lo cual conlleva a la falta de confianza en el ordenamiento jurídico penal por parte de la sociedad.

De otro lado se justifica legislativamente el desarrollo de esta investigación en

razón de que la regla de la solidaridad en la reparación civil resulta imprecisa respecto a quienes y de qué manera corresponde realizar la cuantificación y pago de la reparación civil cuando se un sujeto se somete a la colaboración eficaz.

Finalmente, un aspecto doctrinario es el que justifica esta proyección académica puesto que deberá discutirse las diferentes posturas que justifican y detractan la forma en que se maneja la reparación civil cuando se trata de atender la circunstancia procesal de un colaborador eficaz.

1.2.2. Importancia del Estudio

La investigación proyectada resulta de suyo importante puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrán identificar los puntos débiles de la ley para con ello lograr establecer una propuesta de cambio que asegure el tratamiento adecuado en tanto corresponda a equilibrar solidariamente el pago de la reparación civil que mana del delito perseguido, a fin de evitar desequilibrio en lo que corresponde a la participación del colaborador eficaz.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar si los beneficios otorgados al colaborador eficaz generan un efecto sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil del proceso penal.

1.3.2. Objetivo Específicos

- Desarrollar doctrinariamente la figura jurídica de colaboración eficaz y los beneficios que surgen de su aplicación.
- Describir la teoría de la responsabilidad penal como base del resarcimiento.
- Estudiar la solidaridad en el pago de la reparación civil en el proceso penal
- Analizar la necesidad de modificar la regla de colaboración eficaz a fin de evitar injustos respecto de la determinación del pago de la reparación civil.

1.4. Hipótesis

Si. los beneficios otorgados al colaborador eficaz, no especifican el nivel de responsabilidad y la cuantía del pago de la reparación; entonces, esto surtirá un efecto negativo sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el proceso penal, por lo que debe incorporarse la puntualización en la regla

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

Los beneficios otorgados al colaborador eficaz

1.5.2. Variable Dependiente

La teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el proceso penal.

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.6.1. Métodos

En la presente investigación se usaron los siguientes métodos, los cuales permitieron desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico

Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas en cuanto a los beneficios otorgados al colaborador eficaz respecto de La teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el proceso penal y su aplicación en las sentencias penales; detalle que se confrontó con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultado, en base a lo cual se pudo contrastar la hipótesis planteada.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico

Este método ha sido empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado del ordenamiento jurídico procesal del derecho penal respecto al ámbito de la

colaboración eficaz y la reparación civil, lo cual nos permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo

Al emplear el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación se realizó un correcto estudio del tema abordado, desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

1.6.1.4. Método Inductivo

La aplicación de este método permitió analizar el material de estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo del tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que permitió establecer los parámetros con los que se definió la propuesta, permitiendo plantear al final las propuestas en función a los resultados.

1.6.2.1. Análisis Documental

Se manejaron fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, etc. Con las cuales se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se publicaron en materia de Derecho Procesal Penal, específicamente respecto

a los beneficios otorgados al colaborador eficaz y la teoría de responsabilidad solidaria en la reparación civil en el proceso penal como aporte en la investigación que identifica la carencia de una delimitación en cuanto al monto específico que debe asumir quien se sometió a la colaboración eficaz.

1.6.2.2. Observación

Se utilizó la guía de observación, con la cual se observó la realidad socio jurídica que engloba los beneficios otorgados al colaborador eficaz y la teoría de responsabilidad solidaria en la reparación civil en el proceso penal, con la finalidad de realizar una correcta distribución y cuantificación respecto de la reparación económica

1.6.2.3. Encuesta

Se empleó la guía de encuesta; la cual fue aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes vertieron sus opiniones respecto de la problemática sobre el pago de la reparación civil en el proceso penal surgida de la colaboración eficaz.

CAPITULO II

LA FIGURA DE LA COLABORACIÓN EFICAZ EN LA DOCTRINA

En esta parte de la investigación se toma como referencia lo expuesto por juristas de la época en que se evidencia un reflejo de esta figura, enmarcándolo dentro del ámbito del Derecho Penal Premial, la cual ha generado un interés muy particular y una discusión jurídico-penal, de ello se recogió lo esencial para lograr comprender los cambios por los que ha pasado la colaboración eficaz hasta convertirse en una herramienta jurídica esencial con valor procesal.

Resultando importante acotar que la figura de la colaboración eficaz representa hoy en día una herramienta de notable transcendencia tanto al nivel nacional como internacional, tal como lo afirma Gil Gimeno, Carles (2017) en La Revista Otrosí, con el título *Justicia Penal Negociada. El Valor De La Delación:*

La figura del “delincuente-delator” o “colaborador- arrepentido” y lo que se conoce como justicia penal negociada, ha ido adquiriendo mayor relevancia a nivel internacional. Existen recomendaciones para su introducción en los respectivos ordenamientos nacionales, principalmente en los continentales europeos y en los latinoamericanos donde el ejercicio de la acción penal es obligatoria y, por tanto, es necesaria la existencia de norma expresa que contemple las atenuaciones y exenciones de la responsabilidad penal (pág. 60).

Esta circunstancia evidencia que la introducción de ciertos beneficios en la norma como la atenuaciones o remisión de la pena es necesaria puesto que a través de la negociación existente en el proceso penal se atenúan los criterios de imputación con el fin de obtener buena información con respecto a casos que son de gran complejidad, al ser utilizado desde esta perspectiva la colaboración eficaz se constituye en un arma poderosísima para acabar con la Justicia tardía, ineficiente y

corrupta, más aun si a la vez su existencia pretende dar cara a la necesidad de los estados de combatir delitos como el terrorismo, la delincuencia organizada, y sobre todo el difícil fenómeno de corrupción, siendo de suma importancia en la luchar contra la impunidad, puesto que con su aplicación se logra obtener información de calidad sobre la comisión de un delito y una adecuada posible represión del mismo, tratando de poner un alto a la delincuencia que hoy viene castigando al país.

Por otro lado, el hecho de contemplar en la norma la atenuación o remisión de la pena producto de la ayuda o colaboración que brinda el imputado a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, conlleva a decir que de una u otra manera se está flexibilizando la aplicación de la pena concreta que establece la norma, así lo refiere el profesor Gil Gimeno, Carles (2017) al señalar lo siguiente:

La sanción penal es ya no el resultado del delito cometido sino consecuencia de un comportamiento posterior a esos hechos delictivos. Los investigados deben renunciar a sus derechos y garantías procesales a cambio de una condena que no depende de la gravedad del delito sino del resultado de la negociación que se lleve a cabo (pág. 61).

Se evidencia que en cierta forma la justicia negociada puede generar la transgresión de los límites normativos hasta llegar a colisionar con las garantías procesales, con lo cual se estaría vulnerando los derechos de los imputados, al no ser aplicado en estricta observancia de los principios rectores.

Si bien actualmente la colaboración eficaz es muy conocida y comúnmente empleada en casos emblemáticos, se ha recabado información apropiada y necesaria para obtener mejores resultados, por ello se empezará por conocer el origen de dicha herramienta jurídica y su desarrollo normativo; llegando a entender a fondo la verdadera intensidad por la que surge dicha figura, para con ello realizar

algunas apreciaciones esenciales a efectos de emitir una opinión global sobre el instituto, acerca de cómo es aplicado, si su aplicación ha sido recogida de manera idónea por nuestra legislación y si la postura respecto al problema planteado tiene algún sustento que conduzca hacia una posible modificación.

21. El Derecho Premial como justificación jurídica de la colaboración eficaz

El desarrollo de este punto se orienta a la búsqueda de las razones jurídicas que han generado la creación y estudio de esta figura, ello con el fin de identificar sus alcances y los límites para su aplicación y relacionar estos resultados luego con los que se obtengan del análisis de la responsabilidad solidaria respecto a la indemnización que se genera del proceso penal.

En ese sentido se ha ubicado como primera referencia respecto a la razón de ser de la figura jurídica de colaboración eficaz, lo acotado por García Mercadal,

Fernando y García Loygorri (1985) en la revista *Emblemata*, bajo el título

Derecho Premial Y Sociedad Democrática: Propuestas Para Un Debate, donde manifiesta lo siguiente:

el Derecho Premial español que siguió siendo un conjunto atomizado de leyes antiguas sobre la nobleza al que se fueron añadiendo desordenadamente las normas reguladoras de las distinciones que los sucesivos Gobiernos fueron creando, la mayor parte de las veces sin claras cláusulas derogatorias, originándose de este modo una enorme baturrillo de diplomas, esmaltes y veneras (pág. 204).

Según lo referido por el autor en España el Derecho Premial de la época era considerado como un conjunto de normas antiguas sobre la nobleza, es decir se trataba de un Derecho Nobiliario, de distinciones a los nobleza, siendo el Derecho

Premial, el encargado de regular las recompensas honoríficas manifestadas a través de condecoraciones, títulos y órdenes públicas, que eran conferidas por las distintas administraciones del Reino, pero con el pasar del tiempo esta forma de ver al Derecho Premial fue adquiriendo nuevas categorías, así lo refiere García Mercadal, Fernando y García Loygorri (1985), cuando manifiesta lo siguiente :

En suma, el panorama del Derecho Premial partió al iniciarse la Restauración canovista era, como venimos describiendo, una amalgama de normas dispersas, muchas de ellas de aroma arcaizante, entre las que podríamos distinguir tres grandes categorías: la legislación referente a los títulos nobiliarios, la relativa a las órdenes y condecoraciones, civiles o militares, y por último toda la relacionada con el protocolo oficial, los tratamientos y las precedencias, asunto muy próximo al ceremonial diplomático y a la etiqueta palatina (pág. 206).

Al darse una variedad de leyes, el Derecho Premial fue adquiriendo una diversa articulación conceptual y sistemática, estando constituido no solo por los títulos nobiliarios, sino que además se trataba de hacer referencia a órdenes y condecoraciones tanto civiles como militares, esta forma de ver el Derecho Premial fue producto de las modificaciones hechas por la realeza.

Tal circunstancia hace notar que en todo este movimiento reformador lo que se pone de manifiesto es un Derecho Premial que esencialmente muestra la conservación de una distinción honorífica, los cuales eran auténticos motivos premiales como los de recompensar virtudes cívicas, los altos merecimientos o aquellos méritos relevantes otorgados a los ciudadanos acreedores.

Con el paso del tiempo, el Derecho Premial adoptó importantes cambios, pero siempre manteniendo consigo el signo característico de la recompensa, estos cambios, atrajeron a los juristas hablar acerca de esta nueva forma de ver el Derecho Premial, como tal tenemos lo recogido por García Mercadal, Fernando y García

Loygorri (1985), donde toma lo manifestado por el Marqués de Beccaria, en su libro

Dei delitti e delle pene:

Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto observo al presente en las leyes de todas las naciones un silencio universal. Si los premios propuestos por las Academias a los descubridores de las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por qué los premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y fructífera en las manos del sabio distribuidor (pág. 203).

Según el contexto de la época, los autores se referían a connotaciones distintas en relación a la manera de premiar las virtudes y el buen comportamiento, lo innegable es que hay ciertas diferencias entre las concepciones de esa época y la actual, pero es de ahí de donde es expresión la figura de colaboración eficaz, siendo así que jurídicamente se implanta a través de la necesidad social de hacer frente a la delincuencia, desde la época que hace referencia el autor hasta los tiempos que hoy en día somos partícipes.

Como se puede apreciar el Derecho Premial fue expandiéndose y evolucionando, siendo que ahora la figura se justifica en la necesidad de combatir la delincuencia, descubriendo aquellos autores, cómplices, etc. que cometieron un hecho punible y que de una u otra manera no han sido juzgados, rompiendo así con el silencio criminal a cambio de una recompensa para evitar la comisión de futuros ilícitos que sigan dañando la sociedad. Como referencia de lo mencionado cabe citar lo manifestado por Sánchez García de Paz, Isabel (2005), quien la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, bajo el título *El Coimputado Que Colabora Con La Justicia Penal*, hace mención a lo que hoy representa el Derecho Premial:

Las medidas de levantamiento o atenuación de la pena para los coimputados que colaboran con la justicia penal en el descubrimiento del delito –también denominados “arrepentidos”- se

insertan dentro de lo que se ha venido a denominar el "Derecho Penal premial". Este agrupa normas de atenuación o remisión total de la pena orientadas a premiar y así fomentar conductas de desistimiento y arrepentimiento eficaz de la conducta criminal o bien de abandono futuro de las actividades delictivas y colaboración con las autoridades de persecución penal en el descubrimiento de los delitos ya cometidos o, en su caso, el desmantelamiento de la organización criminal a que pertenezca el inculpado. (pág. 2)

En tal medida la intensión por la que se plantea la introducción de esta figura en el ordenamiento jurídico, se puede decir que en primer lugar es para ofrecer al delincuente la posibilidad de obtener ciertos beneficios producto de su colaboración siempre que abandone las actividades delictivas a las que se dedica y en segundo lugar para brindar a las autoridades la ayuda necesaria para la obtención de información valiosa que sirva para armar una imputación, con la cual se dé la persecución penal, el descubrimiento de los delitos o la desarticulación de una organización criminal, pudiendo dar con aquellas personas que no han sido intervenidos o juzgados y que tienen una responsabilidad penal que afrontar, todo ello en aras de una justicia eficaz y eficiente.

Por otro lado, desde el punto de vista del derecho convencional también es posible encontrar argumentos para justificar la existencia y aplicación de la colaboración eficaz, tal cual lo refiere el investigador De la Jara Basombrío Ernesto, en la revista IDEELE:

(...) la Convención de Palermo (año 2000), de la que es Perú parte, así como lo son la casi totalidad de los países de la región. En algunas disposiciones de esta Convención se promueve expresamente que los Estados adopten medidas a favor de la colaboración eficaz, e, incluso prevé la posibilidad de que se firmen acuerdos internacionales al respecto, pero son tan solo invocaciones. Asimismo, en febrero del año 2017, se firmó la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la corrupción, la misma que fue suscrita entre los Fiscales de la Nación, en sus respectivos países, tienen que investigar los casos sobre Odebrecht y Lava Jato. Si bien no hay

ningún instrumento internacional que establezca obligaciones de un Estado frente a otro en cuanto a colaboración eficaz, se está ante una oportunidad para avanzar en la creación de convenios de cooperación en la materia (Instituto de Defensa IDEELE, 2017).

La criminalidad contemporánea genera frecuentes problemas en la actividad funcional y operativa de las autoridades judiciales encargadas de su persecución y sanción penal, como consecuencia de esa necesidad, se buscó formas alternativas de solución de conflictos y a medida que pasó el tiempo la colaboración eficaz fue adoptada por diversos países como una institución indispensable para combatir la criminalidad, por lo que cada Estado la utiliza y aplica de acuerdo a su normativa vigente, pero como es de verse hoy en día existe un fenómeno delictivo caso Odebrecht, el cual es un reflejo de los más altos niveles de corrupción que se vive en el Perú y que a la vez compromete a varios países, generando un problema social y económico entre estos.

Frente a esta situación es la colaboración eficaz una de las herramientas que viene siendo utilizada para sancionar delitos graves con pluralidad de agentes, en esta circunstancia el uso de esta figura no es clara y existe la posibilidad de que se esté transgrediendo los límites normativos de cada nación, puesto que la normativa internacional vigente como es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) cuenta con una sola exigencia en este aspecto, esta señala, en su art. 26°, que cada estado parte deberá establecer dispositivos para que las personas involucradas en actos delictivos presten información útil y relevante para combatir el crimen, así como se les exige a los estados prever ciertos beneficios para los colaboradores, puesto que dicho instrumento nace con el propósito de promover la cooperación, prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, visto de esa

manera, ésta no establece los criterios específicos que directamente envuelven a la colaboración eficaz como una herramienta que ostenta su propio proceso y aplicación, tal como lo advierte el investigador se evidencia la necesidad de implementar posibles convenios internacionales, en los cuales se plasmen acuerdos que permitan establecer obligaciones y límites entre los Estados que requieran acudir a dicha figura de forma internacional, orientados al objetivo común de crear condiciones propicias y vinculantes para la acción coordinada de los Estados en favor de la eficacia de la justicia penal interna de cada país. Por tanto, un aspecto importante del derecho penal internacional, se relaciona con la ayuda judicial mutua que se brindan los Estados para enfrentar, justamente, aquellas limitaciones espaciales que afectan los objetivos de la actividad procesal.

Por otro lado, como se ha ido describiendo en líneas anteriores, se puede decir que en la búsqueda doctrinaria del fundamento jurídico de la colaboración eficaz se aprecia como procedente al Derecho Premial, esto es, como base de su naturaleza jurídica, en ese sentido se tiene lo señalado por Lara Chagoyán, Roberto (2001), en su artículo *Sobre La Función Promocional Del Derecho* en el que señala lo siguiente : “la función promocional del derecho consiste en la motivación de ciertos comportamientos mediante el establecimiento de sanciones positivas (premios) y otros tipos de medidas (como ventajas económicas, las facilitaciones, los incentivos, etc.)” (pág. 553). Del cual se evidencia el carácter premial del derecho, que lo ostenta la figura de la colaboración eficaz.

El Derecho Premial pretende estimular el arrepentimiento ofreciendo algún beneficio a la persona involucrada en un ilícito a través del uso de recompensas, gratificaciones y distinciones, es así que se emplea la colaboración eficaz para

obtener ventajas, a cambio de brindar información que colabore con la justicia para de alguna manera sancionar objetivamente a los delincuentes que cometieron un delito.

Anteriormente se trataba al Derecho Premial como un todo, respecto de las ventajas que puede obtener la persona que colabora con la justicia, pero esta forma de ver el derecho fue dando cambios obteniendo resultados en su aplicación así surge la colaboración eficaz, el más aplicado hoy en día y el más asociado al Derecho Premial, puesto que con el termino premial se entiende como una forma de premiar la incriminación de aquel que fue parte de la organización proporcionando información para dar a conocer al autor o participe de un ilícito penal, puesto que como se sabe ahora “La delación premiada tiene su equivalente acá, y se le denomina actualmente colaboración eficaz (antes se llamaba arrepentimiento)” (De La Jara, 2017), pues bien la colaboración eficaz se conocía anteriormente como “delación premiada”, luego fue adoptando otras formas de ver el uso de la figura llegando a ser conocida como la “figura de arrepentido” como ya habíamos mencionado en líneas anteriores, esta figura va más allá, más que la sola forma de delatar al culpable, ya que producto de esta declaración se obtienen ciertos beneficios que no precisamente son premios sino más bien diríamos ventajas respecto de la sanción que le tocaría afrontar, entonces la colaboración eficaz es una figura jurídica que ayuda a los órganos de justicia con información verídica a cambio de ciertos beneficios en su pena, pero a la vez es cuestionable el hecho de otorgar estos beneficios ya que en los supuestos donde se le concede la remisión o más aun la eximición de la pena sucede que, como lo señala Castaño Vallejo, Raúl (2013) en la Revista Nuevo Foro Penal, al hacer un Análisis de las sentencias 36.502

de 2011 y 38.285 de 2012 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C-645 de 2012 de la Corte Constitucional, titulada *El sistema penal acusatorio en Colombia y el modelo de derecho penal premial*..:

“Se rompe de esa manera el nexo retributivo que liga la sanción a la conducta y que en virtud al principio de proporcionalidad delega en el juez la calidad y la cantidad de pena de acuerdo a la naturaleza y la gravedad del comportamiento” (pág. 170).

Esto implica un nivel de arbitrariedad al evidenciar una desproporcionalidad en cuanto a la sanción, todo esto, aunque necesario, resulta insuficiente para garantizar el control social y la función restrictiva del derecho penal, quebrantando el principio de legalidad y de proporcionalidad de la pena en cuanto al delito.

Entonces se evidencia que quien decide acogerse a la colaboración eficaz terminará con una pena muy diferente a aquel que opte por un proceso común, aunque hayan tenido el mismo grado de responsabilidad.

No obstante, resulta importante recalcar que la existencia de herramientas que promueven la aplicación de un sistema de beneficios coherentes con la información proporcionada cumplen un rol muy importante en la lucha constante contra el crimen, asumiéndose al sistema premial como un mal necesario, tal como lo manifiesta, Castaño Vallejo, Raúl (2013):

Es recurrente la justificación político-criminal de la existencia de la justicia penal premial en su necesidad para la subsistencia de los sistemas procesales, pues no resulta posible en la práctica que sistema alguno en el mundo tenga la capacidad económica para llevar hasta el juicio todos los procesos, haciéndose necesario el uso generalizado de un mecanismo como el de las negociaciones de las penas que abrevia el trámite procesal de manera significativa (pág. 169)

El sistema de negociación libera al sistema judicial penal y superar la crisis atribuida al ejercicio de un sistema procesal altamente formal, de tal manera que la

implementación del sistema del Derecho Penal Premial busca la celeridad de los procesos para conseguir una justicia pronta y eficaz, donde se persigue la efectividad y proporcionalidad de la justicia penal.

Desde esta perspectiva se recoge lo señalado por Castillo Alva, José Luis & Asencio Mellado, José María (2018), en su libro: *La Colaboración Eficaz en el Derecho Peruano*, sostiene que:

El Derecho penal premial no sólo tiene un innegable acento político criminal y de estrategia eficaz y útil en el combate contra las distintas formas de delincuencia, sino que se incardina dentro de una corriente de la filosofía jurídica moderna que insiste en recordar las sanciones impuestas por el ordenamiento jurídico pueden ser tanto de naturaleza negativa, en la medida que privan derechos y bienes, como puede haber también sanciones positivas que se caracterizan por establecer beneficios en virtud de la ejecución de determinadas conductas estimadas valiosas o útiles por el ordenamiento jurídico. Se sostiene que los beneficios por la colaboración eficaz no sólo encuentran su sustento y explicación en las variables político criminales de un Estado de derecho y en criterios preventivos, sino que también se apoya en los lineamientos de la teoría del derecho contemporánea (pág. 331).

De lo manifestado por el autor, se puede decir que, el Derecho penal Premial tiene un rasgo político criminal, que se identifica en razón de constituirse en base a estrategias que no sólo obedecen a la lógica jurídica sino se cimientan en un rasgo filosófico moderno, que bien podría asumir un toque maquiavélico, postura jurídica moderna que busca resolver conflictos delictivos desde una perspectiva finalista.

Lo cual es evidentemente importante, puesto que permite combatir las organizaciones delictivas, generando; por un lado, una la dificultad para la formación de las estructuras criminales, y de otro, impidiendo que las organizaciones existentes lleven a cabo sus ambiciones delincuenciales, todo ello en una lucha constante contra la delincuencia.

Desde esta perspectiva resulta fundamental que se haya insertado en el ordenamiento jurídico la colaboración eficaz, puesto que hace frente a las conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, garantizando la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos. previniendo el delito y restableciendo el control social,

Según Hurtado Pozo (1987), José en el *Manual De Derecho Penal*, dice:

la ciencia criminal moderna se compone de tres dominios esenciales: la criminología, que estudia en todos sus aspectos al fenómeno delito; el derecho penal, que consiste en la aplicación y explicación de las normas positivas con las que la sociedad reacciona ante dicho fenómeno; y, por último, la política criminal, arte y ciencia al mismo tiempo, cuyo objeto práctico es, en definitiva, el permitir una mejor elaboración de las reglas positivas, y de orientar al legislador que las redacta, al juez que las aplica, y a la Administración penitenciaria que hace efectiva la decisión judicial (pág. 24).

De lo manifestado por el autor se puede decir que la política criminal supone el esfuerzo de las instituciones que luchan contra la delincuencia, por esto, se ha considerado que la colaboración eficaz es útil como método de eficacia ante la acción criminal, por lo que la presencia del Derecho Premial como base o argumento de la figura de colaboración eficaz supone entonces la consagración de beneficios recíprocos que permiten la justificación de su otorgamiento, así se puede reconocer incluso en la presencia de esta institución en la percepción extranjera como es el caso de Italia, tal cual lo reseña Mannozi Grazia (2008) en su obra: *Combatir a la corrupción. Un recorrido entre criminología y derecho penal*, manifestando lo siguiente:

La historia de la legislación premial italiana sugiere, por otro lado, que los "sistemas criminales" —piénsese al terrosismo interno y a la criminalidad organizada, a la que se puede parangonar, por algunas características criminológicas, también la corrupción sistémica— se combaten no sólo con la pena sino también con un "premio", ligado no solamente a porcentajes sobre la sanción pecuniaria que se

conmina, sino a beneficios en el caso de conductas antagónicas de la parte ofendida o a opciones de disociación y/o de colaboración procesal (pág. 954).

Pues bien, se ha visto que una forma de combatir la criminalidad es mediante la amenaza de la pena, pero al evidenciar su falta de efectividad se opta por introducir el premio, entendiéndose este como instrumento de la política criminal estatal en luchar contra la impunidad, el cual contribuye a la exigencia de una eficaz actividad de contraste a la corrupción, encaminando a los sujetos para que pasen de una conducta de apartamiento a una conducta de contribución con el Estado, siendo necesario tomar medidas en torno a su aplicación para de ese modo poder brindar información de los diferentes hechos delictivos que están siendo investigados o que aún no han sido origen de ninguna investigación, atendiendo esto según lo refiere Rusconi, Maximiliano (2018) en su obra titulada *Arrepentidos Y Justicia Penal: ¿Nuevas Formas De Combatir La Criminalidad Organizada O La Inquisición Del Nuevo Milenio?*, al manifestar lo siguiente: “la idea de negociar con uno de los autores del hecho y pagar en moneda de impunidad la información que pudiera tener sobre otros responsables” (pág. 11).

Por otro lado, y pese a que la colaboración eficaz pueda tener buenos resultados en base a la configuración del Derecho Premial, es prudente indicar que existen críticas que no se ocupan precisamente de elogiar esta intervención en la estructura de la investigación penal, así se puede ubicar de los señalado por Rusconi Maximiliano (2018), donde expresa lo siguiente:

Las críticas pueden multiplicarse. Se trata de un instrumento que lejos de contribuir a una justicia penal más digna se transformará en la quintaesencia de la crisis del Estado de derecho. Con reflejos políticamente correctos, se deja al proceso penal en casos trascendentes en la esfera pública desde el cual se invita a los manipuleos más crueles. Ni Torquemada se atrevió a tanto.

Tomamos lo peor de la Inquisición y lo combinamos en un blend trágico con lo peor de los modelos anglosajones. No podemos olvidar adicionalmente que el camino que proponga el imputado colaborador puede dejar a un porcentaje de las víctimas sin representación procesal (pág. 16).

Se evidencia que no hay una absoluta aceptación puesto que como lo manifiesta el referente, la figura pretende poner un instrumento que lejos de contribuir con la justicia penal la deriva directamente a una crisis funcional que busca implantar un sistema que persigue potenciar la ineficiencia en la investigación de los delitos, lo cual conlleva al fracaso del sistema penal, dejando a cierta parte de la colectividad sin la reparación del daño causado. Tal como lo manifiesta Rusconi, Maximiliano (2018) “la ansiada reparación del daño social o personal o, en última instancia, sobre la misma sanción punitiva de los responsables, es cuando, increíblemente, el sistema penal muestra la peor de las imágenes de la ineficiencia “ (pág. 12). Siendo imperdonable y menos viable un proceso que exima o atenúe la pena privativa que deberán merecer. ya que de otra forma puede generar condenas injustas o convertirse en fuente de impunidad y de corrupción. Pese a que el Estado ideal de justicia es aquel en el cual la administración no concede beneficios a los delincuentes, pero frente a la ola de delitos especiales se hace necesaria la intervención de la figura de la colaboración eficaz.

22 El origen de la figura de la colaboración eficaz.

Según la doctrina la colaboración eficaz se encuentra dentro de lo que se conoce como derecho premial el cual surge a raíz de los delitos de lesa majestad en el derecho Romano, como referencia tenemos lo señalado por Doctor Freddy Rojas López (2012), en la revista Derecho Y Sociedad número 39, titulado, *Alcances y Cuestiones Generales del Procedimiento Especial de Colaboración Eficaz en el Nuevo Código Procesal Penal*, en la cual manifiesta lo siguiente:

Se considera que fue el inglés Jeremías Benthan quien dio inicio a la institución de la Colaboración Eficaz a través de su obra «La Teoría de las Recompensas» (1811); no obstante, su origen se remonta –en principio– al antiguo Derecho Romano, en específico, a los delitos de lesa majestad (establecidos en la Lex Cornelia de sicariis et veneficiis) y –posteriormente– al Derecho Canónico y Común Medieval. En esta última época, después de sopesar los beneficios e inconvenientes de esta figura, los filósofos juristas ilustrados se pronunciaron en contra de premiar la delación con beneficios penales, práctica que ya era común en el Antiguo Régimen de cara a los procedimientos seguidos ante el Tribunal de la Santa Inquisición (pág. 52).

Del cual se desprende que la figura jurídica de la colaboración eficaz es expresión del Derecho Penal Premial al advertir una justicia negociada con la presencia de premios (recompensa) otorgada a quien confiese, ocupando un lugar de suma eficacia en la esfera de la justicia penal, siendo prueba que el Derecho Premial está presente, en cuanto ayuda a precisar las particularidades de la figura que se está abordando, la cual se manifestaba como una práctica común basada en recompensar la acusación con beneficios, a pesar que la posición de los juristas era en contra de su aplicación, se encontraban posturas a favor de su uso, por ello la existencia de la figura es notable, pero no aceptada en conjunto.

Por otro lado, el profesor de Universidad de Castilla La Mancha, Ortiz Pradillo, Juan Carlos (2016), en su ponencia titulada *Presente Y Futuro De La Delación En El Proceso Penal*, habla acerca de cómo en España ha ido promoviéndose el mecanismo de la colaboración a través de la llamada “delación”, al respecto refiere que “La delación nunca ha sido bien vista y la imagen del delator, que siempre ha sido asociada con las características más ruines y mezquinas del ser humano, no ha sido bien recibida por la Justicia. De hecho, la expresión «soplón» tiene una marcada connotación peyorativa” (pág. 05).

La “delación” como se conocía en España, no era vista de buena manera, ya que el delator que hacía la acusación era considerado un traidor, lo cual para la sociedad era una forma desleal de hacer justicia, por lo que no fue regulada como un modo ordinario de facilitar o recibir información útil para las causas judiciales, sino como una herramienta usada sólo en casos extremos o de circunstancias especiales.

Como se ha mencionado en líneas anteriores. la figura jurídica hoy conocida como colaboración eficaz fue introducida en el Derecho Penal como títulos de la nobleza, luego como una delación premiada y a la actualidad es vista como la figura del arrepentido en España, tal como lo señala el Doctor Freddy Rojas López (2012) en la revista Derecho Y Sociedad número 39, titulado, *Alcances y Cuestiones Generales del Procedimiento Especial de Colaboración Eficaz en el Nuevo Código Procesal Penal*:

El «terrorista arrepentido», como se le conoce, toma en cuenta el elemento del arrepentimiento, siendo éste el eje central de la legislación española, ya que —en una política de convivencia pacífica— se emplea este aspecto de la figura para poder encontrar verdaderos arrepentidos, en un intento de evitar posibles atentados y ataques al gobierno español (pág. 56).

Esta forma de ver la figura es producto de los ataques promovidos por el terrorismo hacia el gobierno español que amenazaba con provocar una crisis política y económica, es por ello que la forma de ver la delación fue adoptando una mejor perspectiva ya que fue usada para combatir el terrorismo, así surgió la figura del arrepentido, al igual que en España, surgió también en Alemania producto de mismo fenómeno terrorista, en una lucha antiterrorista en contra del narcotráfico y terrorismo, así lo manifiesta Rojas López, Freddy (2012)

En el derecho alemán se conoció como el Testigo de la Corona (Kronzeuge) o Reglas del Testigo «principal» o «de la corona» (kronzeugenregelungen), y es quien introduce el premio al delator

del autor y cómplice en la comisión de un delito, esto con la Ley antiterrorista de 1989, teniendo un parecido a las figuras anglosajonas de King's evidence (Reino Unido) y State's witness (Estados Unidos de América) (pág. 56).

Con el fin de incentivar el arrepentimiento del imputado se introdujo el “premio al delator” quien revelaba al autor o cómplice del ilícito cometido, con ello de una u otra forma se impulsaba a una verdadera colaboración con la justicia. reflejando la idea de un completo cambio de conducta, por parte del sujeto afectado, manifestándose esta figura en el ámbito del crimen organizado y terrorismo, por el hecho de que las investigaciones tradicionales no resultaban eficaces.

Otra manifestación similar fue protagonista el estado italiano:

Fue en la Italia de los 70's donde se acuñó un término que ahora es utilizado a nivel internacional: *Pentiti*, plural de *Pentito*, persona que forma parte de una organización criminal o terrorista y que luego de ser arrestada, se “arrepiente” y decide colaborar con el sistema judicial en las investigaciones que involucran a su organización. Esto con el fin de obtener beneficios a cambio de la información suministrada. La categoría judicial de los “*pentiti*” se creó en los 70's con el fin de combatir el terrorismo. Estos *collaboratori di giustizia* buscan rebajas a su pena, la libertad y en algunos casos protección, cambio de identidad -y donde exista- pueden ingresar a un programa de protección de testigos. De esta forma jueces como Giovanni Falcone, lucharon contra la mafia siciliana “*Cosa Nostra*” de Italia (CICIG-Comision Internacional contra la Impunidad de Guatemala, 2009).

En los años setenta en Italia al igual que en los países ya mencionados, se manifestó el Derecho Penal Premial, empezándose a utilizar el término “*Pentiti*” que significa “el arrepentido” la cual surge a raíz de los hechos terroristas que la aquejaban, El nombre técnico de esta figura jurídica en el idioma italiano es la de “*collaboratori di giustizia*” que significa “Colaborador con la Justicia”

De ese modo en el Perú se toma como precedente una de las normas promulgadas por este estado para introducirla en el ordenamiento jurídico penal, cuando en la

época de los 90 el terrorismo azotaba el país dejando consigo múltiples muertes y profunda desolación, con el objetivo de lograr encontrar a los culpables de los hechos delictivos, así lo indica el Doctor Freddy Rojas López (2012)

La experiencia italiana resulta ser la más interesante al respecto, debido a que tuvo que enfrentar a grupos terroristas y a las mafias del sur del país. Uno de estos antecedentes de la «Pentiti» o «Collaboratori della giustizia» (es así como se le conoce al arrepentimiento y a la colaboración en Italia) fue la Ley Cossiga N° 625 del 15 de diciembre de 1979. Luego, vendría propiamente la Ley de Arrepentidos N° 304 del 29 de mayo de 1982, que constituyó uno de los principales precedentes para la aplicación de esta figura en el ordenamiento jurídico penal peruano, principalmente en el delito de terrorismo (pág. 57).

son las nuevas formas de criminalidad las que lleva a replantear e introducir nuevos mecanismos como la colaboración eficaz, la cual permite apreciar cuan efectivo ha resultado el Derecho Penal Premial para combatir la criminalidad (terrorismo y narcotráfico) de la época, sometiéndose varios de los que participaron en los delitos a colaboradores, así lo refiere Quispe Farfán, Fany Soledad (2018) en su obra titulada *La Colaboración Eficaz En El Perú* “es que muchas veces solo podemos conocer las circunstancias del delito a través de sus mismos actores, por lo que es necesario otorgar indulgencias o beneficios a cambio de lograr el castigo para los otros” (pág. 3).

Es de esta manera se justifica la colaboración eficaz como una herramienta para dar con quienes están envueltos en la comisión de un ilícito penal, llevando a desarticular una organización delictiva, para lograr la prevención del delito, a través de los beneficios que otorga la figura.

Es así que en el Perú, en una intensa lucha contra el terrorismo en marzo del año 1987 se regula la Ley N° 24651 que introduce en el Libro Segundo del Código Penal la Sección Octava "A" denominada "De los Delitos del Terrorismo", para con

ello impedir el desarrollo de los grupos que venían sembrando el terror en varios departamentos del país, posteriormente el 30 de diciembre de 1991 mediante Ley N° 25384 (tuvo un artículo único), otorgaba beneficios a personas vinculadas con ciertos delitos a cambio de información eficaz de estos y de sus autores.

Luego el 24 de junio de 1992 fue regulado el Decreto Ley N° 25582 (tuvo 4 artículos), fue dado en el marco del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Alberto Fujimori, también concedía beneficios a quien proporcione información veraz, oportuna, y significativa sobre hechos punibles en agravio del Estado

Más tarde se amplió su aplicación mediante Ley N° 27378 del 20 de diciembre del año 2000, esta ley fue dada en el marco de los procesos seguidos contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos e introdujo por primera vez en el país un verdadero régimen de colaboración eficaz, estableciendo beneficios en el ámbito de la criminalidad organizada. inmediatamente después en el 2004 se insertó en el Nuevo Código Procesal Penal en la sección VI del libro quinto, como el Procedimiento Especial De Colaboración Eficaz, desarrollado un estudio normativo más extenso y riguroso.

Luego el 19 de agosto del 2013 se promulgo la Ley 30077 “Ley contra el Crimen Organizado” derogando la anterior, más adelante en el 2016 se publicó el Decreto Legislativo N° 1301 que modifica el código procesal penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, para con esto hacer frente a los vacíos que presentaba la norma, permitiendo optimizar la aplicación del mencionado proceso. Actualmente, la Sección VI del Libro Quinto del Código Procesal Penal,

específicamente de los artículos 472 al 481, contempla el proceso por colaboración eficaz.

23. Beneficios que otorga la colaboración eficaz.

A partir de la información que se presenta, advertimos que el proceso especial de colaboración eficaz brinda determinados beneficios penales o penitenciarios a quienes proporcionen información de manera oportuna y eficaz, con el fin de llegar a detener a los principales autores o conocer a otras personas involucradas, para ello se requiere la celebración del Acuerdo de Beneficios y Colaboración en el cual se definen los márgenes de negociación del Fiscal con el colaborador y su defensor, luego es el juez el que decide, si se justifica la suscripción del acuerdo.

De esta manera los beneficios que sean otorgados deben estar de acuerdo con una justa valoración, así lo manifiesta el profesor Enzo Musco (1998), en su obra *Los colaboradores de la justicia entre el pentitismo y la calumnia: problemas y perspectivas* cuando advierte lo siguiente:

(...) presupone una compleja valoración por parte de la autoridad judicial, consistente por un lado en verificar si el colaborador con la justicia había dado una contribución significativa a la reconstrucción de los hechos y a la individualización de los culpables, pero debe además valorar si la colaboración "ha tenido referencia a la amplitud, a la novedad y veracidad de las declaraciones hechas, valoradas, incluso teniendo en cuenta el estado de los conocimientos sobre las características del grupo criminal al que se refieren sean consideradas o hayan sido consideradas indispensables para el desarrollo de las investigaciones sobre hechos también diversos por los cuales se procede y para las actividades de investigación relativas a la criminalidad de tipo mafioso" (pág. 46).

Según lo dicho, se tiene que, para brindar beneficios premiales a aquellas personas que se acojan a dicha figura se necesitará por parte del juez una correcta y justa valoración de la información brindada, si ha tenido la novedad y veracidad de las declaraciones hechas y si estas han sido consideradas indispensables para el

desarrollo de las investigaciones sobre hechos. Así también lo menciona Talavera Elguera, Pablo (2009), en su obra *LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal*, “(...) las declaraciones obtenidas en los procedimientos por colaboración eficaz, para que el juez dicte sentencia condenatoria resulta indispensable que las informaciones que proporcionen los colaboradores estén corroboradas con elementos de prueba adicionales que acrediten fehacientemente las imputaciones formuladas” (pág. 135). Por lo que además resulta importante acotar que es imprescindible que el principio de proporcionalidad sea aplicado de forma adecuada para evitar que se termine imponiendo medidas arbitrarias.

El Código Procesal Penal regula esta figura en la sección VI del Libro Quinto en los artículos 472 al 481. desarrollando un conjunto de actos procesales, requisitos, diligencias de corroboración, beneficios-obligaciones del colaborador, así como, la audiencia especial para la aprobación judicial. De lo cual en esta investigación se rescata y toma como punto en cuestión lo concerniente a los beneficios – obligaciones del colaborador.

Con respecto a los beneficios aplicables, según la ley 27378 se tienen los siguientes:

- (i) Exención de pena
- (ii) Disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal
- (iii) Suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, conversión de la pena privativa de libertad de hasta 4 años o liberación condicional, siempre que se cumplan los requisitos estipulados en la ley de la materia,
- (iv) Remisión de la pena a quien la está cumpliendo la pena impuesta.

Los beneficios antes mencionados, se brindarán teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración con la existencia del delito y la responsabilidad por los hechos. Así la norma establece que el beneficio de disminución de la pena puede acumularse con la condicionalidad de la misma, siempre que se cumplan con los requisitos que exige la ley Penal.

Por otro lado, la ley señala que, tratándose de la exención y la remisión de la pena, se exige que la colaboración sea activa y que la información permita: Evitar un delito que afecte de manera grave a la sociedad, Identificar y propiciar la detención de líderes de la organización criminal, Descubrir la fuente del financiamiento de la organización criminal o de sus bienes de mayor relevancia para los fines de la organización

24. Principios que rigen la colaboración eficaz.

Los beneficios antes mencionados deben ser brindados en estricta observancia de una serie de principios, que deben ser considerados en todo momento para que la colaboración eficaz vaya de acorde con los fines del Estado.

Cabe mencionar que se entiende por principios aquellas fuentes a las cuales se debe acudir para que los jueces puedan decretar las resoluciones finales, siempre y cuando existan lagunas en la norma legal o bien no se pueda aplicar la analogía, existiendo así una diversidad de principios comunes que se encuentran previstos en determinadas normas jurídicas.

A. Principio de Eficacia

Como primer principio en consideración para valorar la información o los elementos probatorios que brinda el colaborador se tomara la Eficacia, en ese

sentido, se hace mención a Sánchez Velarde, Pablo (2011) quien, en la Revista Jurídica Del Consejo De Defensa Jurídica Del Estado, bajo el título *La colaboración eficaz en el nuevo Código Procesal Penal*, hace referencia:

Entre los principios más importantes de este proceso citamos el de eficacia, de tal manera que la información proporcionada debe ser importante y útil para la investigación penal que se realiza, o debe permitir evitar acciones futuras, conocer las circunstancias en que se planificó o ejecutó el delito, o permitir conocer a sus autores o partícipes o los instrumentos o medios utilizados. Si la información no produce tales efectos, carece de eficacia (pág. 24).

De lo citado, podemos decir que el procedimiento de colaboración ha de resultar eficaz en términos de calidad y utilidad de la información brindada por el colaborador, cuando cumpla con los objetivos planteados por los cuales surge dicha figura, es decir debiendo ser brindada con la finalidad de esclarecer una actividad delictiva, de dar con los demás integrantes de la organización criminal y sobre todo lograr erradicar o al menos evitar futuras operaciones criminales, con ello se estará asegurando que quien participa obtenga el beneficio comprometido. Esto hace suponer la idea, que el principio de eficacia conlleva a que el valor de la colaboración como prueba apta y suficiente sirva para fundamentar una sentencia condenatoria o dictar medidas de coerción.

B. Principio de Oportunidad

Según Sánchez Velarde, Pablo (2004) en el Anuario de Derecho Penal, bajo el título: *Criminalidad Organizada Y Procedimiento Penal: La Colaboración Eficaz*, se refiere al principio de Oportunidad de la siguiente manera:

La oportunidad de la colaboración es también determinante en la concesión de los beneficios. La colaboración debe ser prestada en forma oportuna para alcanzar los fines de la ley, es decir, debe permitir: conocer y capturar a los jefes o dirigentes de la organización delictiva; conocer dónde se encuentran los efectos del

delito, las pruebas documentarias, contratos o el dinero producto de la corrupción (pág. 248).

Es evidente la necesidad de que los medios de prueba sean presentados de manera oportuna, puesto que de esa manera la información que brinda el colaborador resulta siendo sumamente importante, toda vez que si ella se aporta a des tiempo o es conocida a través de otros medios de investigación, distintos a los que el colaborador presente, originaria que no se produzca el beneficio acordado.

C. Principio de Proporcionalidad.

Este principio es considerado como el más importante e imprescindible de tener en cuenta para lograr un proceso libre de impunidad, al respecto San Martín Castro, César (2015) en su libro *Derecho Procesal Penal Lecciones* refiere “El grado de colaboración con la justicia debe ser medida con rigor, con el objeto de tasar el beneficio penal que simétricamente corresponde otorgar” (pág. 873). Así se evidencia que los beneficios que se otorgan al colaborador son brindados según el legislador, de acuerdo a grado de aporte que se presente a la justicia, pues solo así se podrá garantizar que el beneficio no sea excesivo y termine alterando el propósito principal de la figura jurídica.

Sánchez Velarde (2004), se manifiesta sobre este principio de la siguiente manera:

El beneficio que se solicita y que se otorga debe medirse en atención a la colaboración eficaz y oportuna del peticionante. Como señala Sintura Varela, «[...] debe medirse con precisión el grado de colaboración con la justicia, para tasar adecuadamente el beneficio penal que simétricamente corresponde otorgar». El colaborador puede solicitar la exención de la pena como beneficio; sin embargo, el grado de su colaboración quizás solo permita la reducción de la misma (pág. 249).

Tal como lo advierte el autor, se deberá de tener en cuenta la precisión de los hechos, pruebas y demás aportes que haga el colaborador a fin de hacer una correcta

medida del grado de aporte con la justicia, para con ello poder plantear un beneficio adecuado y proporcional a la información que ofrezca, liberándolo de la condena que normalmente estaría destinado afrontar por haber vulnerado las leyes.

D. Principio de Comprobación

Al respecto Sánchez Velarde, Pablo (2004), se refiere a este principio de la siguiente manera:

Toda la información obtenida del colaborador debe ser objeto de verificación por la autoridad fiscal. De tal manera que no resulta suficiente que se incorpore lo dicho a la investigación penal, sino que, además, se requiere comprobar sus afirmaciones, quizás con elementos probatorios objetivos o con los datos necesarios de personas, lugares o documentos que lo permitan; tal vez estas aseveraciones permitan reforzar lo que meridianamente se conoce dentro de la investigación penal. Todos estos supuestos deben ser debidamente valorados por la autoridad fiscal primero y luego por el juez. El procedimiento de verificación corre a cargo de la autoridad fiscal y para ello se puede requerir del apoyo de la autoridad policial (pág. 249).

Es mediante este principio que se hace un correcto uso de la facultad investigadora del ente fiscal, a quien le corresponde los actos propios de comprobación de la información, obteniendo elementos probatorios objetivos o datos necesarios de personas, lugares o documentos que le permitan reforzar lo que inicialmente se conoce dentro de la investigación penal, a través de las pruebas aportadas por el colaborador, la información aportada se someterá a acciones propias de investigación y corroboración a cargo del fiscal y de la Policía especializada.

E. Principio de Revocabilidad

Sánchez Velarde, Pablo (2004), se pronuncia sobre este principio:

Los beneficios por colaboración surten sus efectos con la aprobación del Juez Penal; sin embargo, están sujetos a determinadas

condiciones, por lo que pueden ser revocados si el beneficiario incumple con las reglas impuestas por el juez en la sentencia (pág. 250).

Los beneficios otorgados al colaborador pueden ser revocados, si el beneficiado desobedece con la realización de un nuevo delito intencional o incumple determinadas reglas impuestas por el legislador, procederá el juez a revocar el beneficio suscrito en el acuerdo de colaboración. Las reglas de conducta impuestas por el legislador son de vital cumplimiento ya que su inobservancia conlleva a que la pena iniciaría sea reformada.

CAPITULO III

LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO BASE DEL RESARCIMIENTO

Luego de haber reconocido la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz como mecanismo de lucha contra la criminalidad y teniendo en cuenta que la investigación en curso observa un problema sobre el resarcimiento que emana de la responsabilidad penal, conviene hacer un breve análisis de la configuración del esquema jurídico que las relaciona.

3.1. La responsabilidad penal

Entre los hechos causantes de los daños indemnizables y los hechos que configuran delitos, resulta importante diferenciar los criterios de imputación tanto de la responsabilidad civil como de la responsabilidad penal. En ese sentido se ha considerado apropiado como inicio la descripción de la teoría de la responsabilidad penal para lo cual se toma como referencia lo indicado por Roxin, Claus (1997), en el libro *"Derecho Penal - Parte General"*:

La responsabilidad designa, tras la antijuricidad, una valoración ulterior y que por regla general da lugar a la punibilidad, en el marco de la estructura del delito. Mientras que con el predicado de la antijuricidad se enjuicia el hecho desde la perspectiva de que el mismo infringe el orden del deber ser jurídico penal y que está prohibido como socialmente dañino, la responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto (pág. 791).

La responsabilidad es la capacidad que tiene todo sujeto de responder ante las consecuencias que generan sus acciones, por ello la comisión de un hecho atípico

expresamente prevista en la norma como delito acarrea que dicha conducta sea sancionada por el ordenamiento jurídico, haciendo responsable a la persona únicamente por sus propios actos, ello frente a la necesidad de hacer justicia a la sociedad, sin embargo, la responsabilidad penal lleva consigo el carácter subjetivo, así lo considera Emilio Gaviria Londoño, Vicente (2005), en la revista Derecho Penal y Criminología, con título *Responsabilidad Civil Y Responsabilidad Penal* al decir: “la responsabilidad *penal* es siempre subjetiva y se refiere, según CREUS, a la posibilidad de atribuir una pena o una medida de seguridad a un determinado autor de un hecho ilícito” (pág. 29). Dependerá del legislador presumir o dar por probada la culpa, evento que consecuentemente permitiría destruir la presunción y por ende atribuir la responsabilidad.

Por otro lado, Villavicencio Terreros, Felipe (2009) en el libro titulado "*Derecho Penal - Parte General*" manifiesta lo siguiente:

La realización del injusto penal (conducta típica y antijurídica) no basta para declarar al sujeto culpable. Es necesario que el autor posea ciertas condiciones mínimas- psíquicas y físicas- que le permitan comprender la antijuricidad de su acción y de poder adecuar su conducta a dicha comprensión. Al estudio de estas condiciones corresponde el concepto de imputabilidad. Así, imputabilidad o capacidad de culpabilidad es la suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal. En este sentido, no padezca de anomalía psíquica o una grave alteración de la conciencia o de la percepción, posee ese mínimo de capacidad de autodeterminación que orden jurídico exige para afirmar su responsabilidad (pág. 594)

La existencia de ciertas condiciones para poder calificar al sujeto como culpable y con ello responder jurídicamente por sus acciones ante la sociedad, ha hecho que primero se analice la capacidad del sujeto infractor, con lo cual se estaría determinando si existe o no responsabilidad, en tal sentido se requiere que el sujeto entienda que su conducta lesiona los intereses de la sociedad, por lo que sus actos

deben ser realizados con plena intensidad, lucidez y libertad, para que puede existir una correcta sanción penal.

Como bien lo refiere García Caveró, Percy (2012), en el libro con titulado *"Derecho Penal- Parte General"*:

La imputabilidad penal se sustenta en la capacidad de una persona de poder responder jurídicamente por sus acciones y, por lo tanto, recibir imputaciones penales. Dado que esta situación es predicable de todos los ciudadanos, la imputabilidad es la expresión del principio de igualdad. En nuestro sistema penal la capacidad de recibir imputaciones penales empieza a partir de los 18 años. Pero, por otra parte, no basta con ser mayor de edad para ser imputable, sino que es necesario que la persona esté en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que le permitan percibir adecuadamente la realidad, comprender el orden social y determinarse conforme a esta comprensión. Una persona es penalmente imputable únicamente bajo estas condiciones (pág. 634).

Como bien se decía que hay responsabilidad ante los resultados que generan los actos que se realizan, cuando el agente carece de la capacidad de conocer y querer, es inimputable es decir, no entiende que su accionar afecta los intereses de otros, por lo que es una circunstancia que exime a alguien de su responsabilidad y culpabilidad en sus actos, porque no es suficiente que éste sea mayor de edad sino que adicionalmente se encontrase en pleno uso de sus facultades, lo cual indica que se está viendo más allá de lo que se logra percibir, siendo indispensable que ambas circunstancias se encuentren presentes al momento de declarar la culpabilidad de la persona como una forma de brindar seguridad jurídica e igualdad.

Para Suarez Hernández, Sheyla (2015) en el informe titulado *"Imputabilidad y Responsabilidad Penal de los Adolescentes"- Una aproximación a su tratamiento en Colombia y en el derecho comparado*, la culpabilidad es base para admitir responsabilidad al señalar lo siguiente:

Actualmente, en la consolidación de los Estados Sociales de derecho, Estados fundamentalmente garantistas y apegados en la estructuración de sus ordenamientos jurídicos a los derechos fundamentales y especialmente a la dignidad humana, se tiene el principio de culpabilidad como base de la responsabilidad, lejos del antiguo planteamiento de la responsabilidad objetiva. En el marco de la responsabilidad penal, el concepto de imputabilidad constituye un tema central para la comprensión de la teoría del delito: “Se trata nada menos que de averiguar y caracterizar quienes tienen (o no tienen) capacidad para ser culpables” (pág. 08)

La responsabilidad penal por ser personalísima, implica que solo pueda hacerse efectiva en cabeza del penalmente responsable, para ello se tiene que hacer una correcta comprensión de la teoría del delito, siendo que, ante la presencia de un ilícito penal se tiene que verificar quienes son jurídicamente responsables como respuesta a que todo hecho ilícito trae como consecuencia una responsabilidad, así lo considera Gaviria Londoño, Vicente Emilio (2005), al expresar lo siguiente: “siendo que la responsabilidad penal es personalísima, siempre se responderá por el hecho propio, jamás por el ajeno” (pág. 30), pero ante la minoría de edad que tiene una clara y evidente relación con la inimputabilidad, es que, se desprende que existen causas que eximen de responsabilidad a los autores de delitos, siendo estas las que llegan a impedir una sanción, pues si este no resultase culpable no existiría responsabilidad alguna que afrontar.

La característica que se puede apreciar del concepto dejado por Gaviria es clara respecto a quien debe responder penalmente por la responsabilidad, sin duda alguna, es preciso acotar que esta responsabilidad sólo podrá ser atribuida en razón de un fallo que así lo indique y que es generado por un juzgado competente.

Esta peculiaridad respecto de la responsabilidad penal se condice con el principio de presunción de inocencia el mismo que es definido por Álvarez Echagüe, Juan

Manuel (2014) en la Revista Sociedad y Derecho, con el título *El Estado de Inocencia y la Garantía de la no Autoincriminación en Materia Tributaria*

La presunción de inocencia comporta que toda persona acusada de delito o falta se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. La declaración requiere que, con las garantías del proceso debido, el juicio de culpabilidad sea producto de la convicción del juzgador, en una valoración en conciencia del resultado de las pruebas. La actividad probatoria llevada a cabo debe respetar los derechos fundamentales, entre los que cabe incluir el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpables (pág. 283).

Tal como se ha podido apreciar la responsabilidad sólo podrá ser atribuida mediante sentencia condenatoria, en la cual se ponga de manifiesto la total convicción de la participación delictiva que acarreo a declarar la culpabilidad del imputado, además de haber realizado una correcta y legal valoración de los medios de prueba, respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales, en tal sentido, para el caso en concreto Lopez Granda, William Fledy (2018) en la Revista Jurídica del Instituto Peruano de Estudios Forenses, titulada *Proceso De Colaboración Eficaz* dice que: “la presunción de inocencia se enerva solo cuando la delación ha sido corroborada con otros datos o elementos probatorios que corroboren mínimamente su contenido” (pág. 81).

Antes de ello toda acción que comprometa a este reconocimiento tendría la condición de ilegal, ya que la autoincriminación impide el hacer recaer en el acusado la obligación de declarar o aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación, por ello existe el derecho a la no autoincriminación conforme lo indica Pérez López, Jorge. A. (2009) en la Revista Derecho y Cambio Social, de título *El derecho a la no autoincriminación y sus expresiones en el derecho procesal penal*

La no autoincriminación constituye un Derecho humano, que permite que el imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El inculcado, protegido por la cláusula de no autoincriminación, conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento positivo de prueba de su silencio (Pérez López, 2009).

En ese sentido surge el cuestionamiento de la figura del colaborador eficaz puesto que se estarían tergiversando la naturaleza de los principios antes descritos, circunstancia que también tendría un efecto jurídico negativo respecto a la forma en que se ha de atribuir la responsabilidad civil y en consecuencia de ello la indemnización que le tocaría cumplir al sujeto que se inculpa con la intención de acceder a la colaboración eficaz y obtener los beneficios de esta figura; este aspecto deberá discutirse en base a las concepciones y formas de ejecutar la responsabilidad civil que mana de la responsabilidad penal, lo cual a continuación se detalla.

3.2. La Responsabilidad Civil

Cada rama del derecho desarrolla sus propias categorías conforme a sus propias finalidades y funciones, así tenemos que la responsabilidad civil genera dos regímenes que regulan el resarcimiento del daño según Vidal Ramírez, Fernando (2001) en la Revista de la Facultad de Derecho PUCP, con título *La Responsabilidad Civil*, al manifestar lo siguiente:

la responsabilidad civil tiene dos regímenes diferenciados, el que regula el resarcimiento del daño causado por la inejecución de las obligaciones contractuales que vinculan al autor y la víctima y el que regula la indemnización por el evento dañoso que se constituye en la causa generatriz de la relación jurídica que emerge entre el autor y la víctima (pág. 396).

En ese sentido compete hacer el análisis respecto a la función resarcitoria de la responsabilidad civil proveniente del evento dañoso dígame, el delito, como una

categoría propia de las sanciones penales, (conocida también como responsabilidad extracontractual) por ello habiendo descrito y comprendido la responsabilidad penal resulta de igual importancia analizar y conocer la responsabilidad civil proveniente del delito, la cual ha generado diversas posiciones y un grave problema en la administración de justicia, viéndose reflejando al momento de la imposición del monto de la reparación civil, atribuida a los imputados, quedando indeterminada la asunción de esta cuando se absuelve de la acusación fiscal a algunos de los acusados, en los supuestos del otorgamiento de beneficios premiales, en los procesos por colaboración eficaz,

Como primera referencia tenemos a José Alfredo Lovón Sánchez (2015) quien en su libro titulado *La Responsabilidad Civil de los Jueces*, sostiene lo siguiente:

(...) Hay responsabilidad jurídica porque la esfera de la actividad en la que se crea es una de esta naturaleza, la que surge necesariamente como consecuencia de una acción u omisión que cause un daño y por tanto la consecuente obligación de reparar. (pág. 35).

Esta cita permite entender el fundamento que conlleva a la atribución de la responsabilidad, lo cual se circunscribe precisamente al sentido jurídico que adquiere la acción, esto es que produce efectos jurídicos, negativos, los mismos que al amparo del derecho como justicia se busca compensar; entonces, si la acción delictiva, como un acto, produce consecuencias jurídicas negativas cuya sanción penal recae sobre el agente, constituye una forma de control social, el mismo que requiere de otro aspecto complementario el cual es la reparación del daño producido a la víctima, requiriéndose en primer nivel el reconocimiento de la responsabilidad civil y en consecuencia de ello la reparación del daño.

Para entender específicamente la responsabilidad civil, se tiene la siguiente definición descrita por Gaviria Londoño, Vicente Emilio (2005) en la revista Derecho Penal y Criminología con título *Responsabilidad civil y responsabilidad penal*

La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño, y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima: su objeto principal es la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que había sido roto por el autor del daño, entre su patrimonio y el de la víctima (pág. 28).

Conforme a lo dicho se puede sostener que, para ejercer una correcta justicia quien debe responder por el daño producido, es aquel o aquellos que lo ocasionaron, producto de su comportamiento dañoso, quedando obligados a resarcir el perjuicio, menoscabo o lesión que le causaron a la víctima, no sin antes el ente juzgador haga una correcta cuantificación y constatación del daño indemnizable, en ese sentido, el hecho de atribuir responsabilidad penal y accesoriamente la responsabilidad civil al autor de un delito, no genera una exacta indemnización del perjuicio causado, puesto que la responsabilidad penal por así decirlo se encuentra establecida en la norma, pero la responsabilidad civil es establecida en proporción o medida al daño que genere el actuar delictivo, quedando a decisión del órgano jurisdiccional la cuantificación de esta, la cual quedara establecida en la reparación civil que tendrá que asumir el agente declarado culpable.

Pese a que se ha establecido una relación entre ambas figuras jurídicas, vemos como no son equitativas, por lo que resulta importante diferenciar la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, así Lovón Sánchez, José Alfredo, (2015) manifiesta lo siguiente:

(...) para intentar definir la responsabilidad civil, es necesario tener en cuenta los efectos de la responsabilidad como tal, el efecto reparador y el efecto sancionador.

Como bien lo afirman los hermanos *Mazeaud*, que cuando el perjuicio alcanza a la sociedad, su autor puede ser castigado con una pena, existe entonces responsabilidad penal. Cuando el perjuicio afecta a una persona privada, su autor puede ser obligado a repararlo. Existe entonces responsabilidad civil.

Así pues, la responsabilidad civil se traduce en una reparación, no en una sanción. (pág. 36)

Pues es clara la diferencia que existe entre ambas, por un lado, la responsabilidad penal se encarga de sancionar la conducta atípica del sujeto mediante la pena impuesta de forma personalísima, la responsabilidad civil es atribuida a quien o quienes generaron el menoscabo del bien jurídico protegido y serán estos quienes se encargarán de reparar el daño que ocasiono su conducta, es decir existen hechos causantes de daños indemnizables y hechos configurativos de delitos, que en ocasiones pueden resultar siendo los mismos. Así también lo diferencia Campos Díaz Barriga, Mercedes (2000), en el libro titulado *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente: el caso del agua en México*, al expresar lo siguiente:

(...) el derecho penal tiende a castigar al culpable, imponiéndole una pena que puede ser corporal (que afecte a la vida, a la libertad o la integridad del individuo) o pecuniaria; el derecho civil tiende a asegurar la reparación del perjuicio que se causó, imponiéndole al autor una condena únicamente de carácter pecuniario (pág. 22).

Diferenciamos sin lugar a duda que la responsabilidad civil sirve para reparar los daños que causo la conducta antijurídica ante la comisión de un delito, por lo cual el autor solo asumirá una responsabilidad de carácter económico, con ello se puede decir que, sin daño producido no habrá obligación de reparar, aunque haya existido el delito o la falta que lo fundamenten, así lo expresa Guillermo Bringas, Luis Gustavo (2009) en la Revista Electrónica de del Instituto Latinoamericano de

Estudios en Ciencias Penales y Criminología titulado *Aspectos fundamentales del resarcimiento económico del daño causado por el delito*, “sin daño, pues, no habrá obligación de resarcir, aunque haya existido delito (...). En suma, el delito o la falta no fundamentan la obligación de resarcir, sino el daño causado” (pág. 1).

Según Lovón Sánchez, José Alfredo (2015), antes mencionado, manifiesta que La responsabilidad civil o jurídica civil: “Es la que no afecta el interés social y tiene como fin, no imponer un castigo o una pena, sino simplemente reparar el daño causado a personas naturales o jurídicas” (pág. 36). Es así que la responsabilidad civil solamente busca reparar el perjuicio que ocasionó la conducta, siendo que no requiere que ésta sea represiva como en el caso de la responsabilidad penal, pero si restablecer el equilibrio del bien jurídico protegido de la víctima antes de sufrir el perjuicio, pues solo el aspecto objetivo del daño causado genera que se configure la reparación civil, así, Taboada Córdova, Lizardo (2009) en Jurisprudencia de Derecho Civil Perú dice:

un aspecto fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan responsabilidad civil sin lugar a dudas es el aspecto objetivo del daño causado, pues solamente cuando se ha causado un daño se configura jurídicamente un supuesto de responsabilidad civil, produciéndose como efecto jurídico el nacimiento de la obligación legal de indemnizar (Taboada Córdova, 2009).

Siendo que, de no existir este daño, entonces no habrá ningún sustento para el surgimiento de la obligación de indemnizar, porque el objeto de la responsabilidad civil no es el de sancionar las conductas antijurídicas sino el de indemnizar los daños, perjuicios o menoscabo causados por el sujeto infractor, a palabras de Campos Díaz Barriga, Mercedes la “responsabilidad civil, significa. en el lenguaje jurídico

actual, el conjunto de reglas que obligan al autor de un daño que ha sido causado a otro sujeto. a reparar dicho perjuicio mediante el ofrecimiento de una compensación a la víctima” (pág. 23). El resarcimiento solo corresponderá cuando el hecho expuesto en el proceso penal lo haya ocasionado, independientemente de la condena impuesta al responsable penal, pues, para que se proceda a imponer el pago de reparación civil, será necesario acreditar la producción de un daño.

3.3. El carácter represivo de la responsabilidad civil.

Siendo hasta ahora descrita la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil como una finalidad de control social, es prudente determinar si el carácter represivo que corresponde al derecho Penal se ve reflejada en esta figura, por lo mismo que debe comprenderse cuál es el alcance de la represión penal, para lo cual se cita lo indicado por Hurtado Pozo, José (1987)

El recurrir al criterio de bien jurídico como elemento objetivo para la determinación de las acciones prohibidas, implica, consecuentemente, admitir la concepción de que sólo deben ser reprimidas penalmente las acciones que constituyen un atentado contra tales bienes vitales para la vida comunitaria. En este sentido, sólo las acciones socialmente dañinas son merecedoras de represión penal. Es decir, las que atentan contra un bien jurídico (pág. 12).

Con esta cita evidenciamos que se admite la represión penal para impedir que se quebranten los bienes jurídicos de otros sujetos o se incurran en prácticas ilícitas, si las acciones atentan contra estos bienes, entonces se constituye una trasgresión a la norma legal, pero cuando la represión excede los límites legales lejos de solucionar conflictos y propiciar la convivencia social se estaría llegando a una violencia estatal sin límites, así como lo manifiesta Cruz Castro, Fernando (2011) en la Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica,

titulado *La Violencia del Derecho Penal. Represión Punitiva, Discriminación y la Postergación del Estado Social* “Lo ideal sería que la respuesta represiva se diera solo frente a la ofensa grave a bienes jurídicos esenciales, con la pretensión que la represión, el poder punitivo propicie la convivencia social” (pág. 691). Entonces queda claro que la represión penal protege bienes jurídicos, es impuesto a manera de criterios preventivos intentando penetrar en el núcleo del conflicto delictivo.

Si se asume que la reparación civil tiene naturaleza penal, la existencia y dimensión de la misma se determinara en función a la culpa y capacidad económica del agente con lo cual se podría estar desnaturalizando la esencia del resarcimiento, generando como consecuencia una deslegitimación e ineficacia de la intervención penal respecto al resarcimiento del daño ocasionado por el delito. A lo mencionado tenemos lo expuesto por Del Río Labarthe, Gonzalo (2010) en el artículo titulado *La acción civil en el Nuevo Proceso Penal*, contenida en la Revista De Derecho PUCP

La respuesta judicial a la acción civil nunca lo es de carácter penal, sino civil. Consiste en una restitución, en una reparación o en una indemnización. La responsabilidad civil nace porque el hecho produce el daño o porque implica un menoscabo patrimonial de la víctima (pág. 222).

Este daño a la víctima o menoscabo patrimonial causado, se verá restaurado con la imposición de una sanción pecuniaria o preparatoria, pero suceden casos en que la pena desde la perspectiva del derecho civil y con criterios propios de la configuración privatista, además de su natural función resarcitoria se le otorga funciones preventivas y punitivas, introduciéndose en el ámbito civil criterios propios del derecho penal, al respecto tenemos lo mencionado por Rodríguez

Delgado, Julio (1998) en la revista *Ius et Veritas*, con el título *La Reparación Como Sanción Jurídico-Penal*:

la reparación -como pena, es decir, como sanción jurídico penal es vista no como un mal, sino como un bien o un derecho para la víctima. Con el monto que se compromete pagar o con los actos destinados a la reparación, se cumple con la función de prevención que tiene el derecho penal, tanto en su aspecto preventivo general positivo como en el negativo (pág. 31).

Según lo manifestado al aplicar sanciones de carácter pecuniario en lugar de una pena privativa de libertad, se lograría obtener mejores resultados, entonces la reparación, al igual que las sanciones de pena privativa ofrece al autor del hecho ilícito mejores oportunidades de resarcir a la víctima; ya que, con la pena privativa de libertad, la víctima no es satisfecha en sus pretensiones resarcitorias. En ello se evidencia que la función resarcitoria de la responsabilidad civil proveniente del delito se considera como una categoría propia de las sanciones penales.

Otro aspecto importante relacionado con el carácter represivo de la responsabilidad civil, se puede apreciar en el momento en que es determina acarrea la decisión del monto indemnizatorio que se habrá de exigir al imputado; esto es, interesa saber si el hecho de que sea el Juez penal quien establezca estas cuantías, ¿constituye una forma de represión como carácter adquirido por la figura de la responsabilidad civil?

Según Sandoval Garrido, Diego Alejandro (2013)

Vale decir que el reconocimiento de los hechos alegados debe corresponder con la magnitud de los agravios causados, y que la cuantificación a cargo del juez debe representar el valor de todos y cada uno de los perjuicios, eso sí, procurando el restablecimiento y no el enriquecimiento de la víctima (pág. 240).

De lo manifestado se entiende que la imposición del monto indemnizatorio está a cargo del juez de la causa, quien mediante sentencia tendrá que pronunciarse tanto

en el aspecto penal como en el aspecto civil con el establecimiento del monto reparador; esta facultad otorgada al juzgador para resolver sobre un aspecto que corresponde al ámbito civil, invita a razonar sobre la idea de que la reparación civil adquiere una característica represiva que corresponde al derecho penal, surgiendo la posibilidad de que bajo este ámbito no tuviera que operar la solidaridad en la distribución de la obligatoriedad de su cumplimiento entre los sujetos penalmente responsables; supuesto esto, corresponde la verificación de su validez mediante la revisión del carácter solidario de las obligaciones en el ámbito penal.

Sumado a ello interesa dejar en claro que la determinación cuantitativa es de suma importancia respecto de la reparación civil, pues se requiere que sea debidamente razonable y proporcional en magnitud al daño causado a la víctima, para que no se produzca el enriquecimiento de esta, o que a la vez el monto impuesto llegue a convertirse en una cantidad impagable, llegando a perjudicar a imputado y a la víctima.

3.4. La cuantificación de la reparación civil.

Tal cual se señaló con anterioridad la cuantificación de la reparación civil adquiere un papel de suma importancia en el ámbito penal cuando se trata de compensar el daño causado por los actos ilícitos, pues al momento de fijarse el monto de la reparación civil, éste se traduce en una suma de dinero única que abarca todos los daños efectivamente causados siendo necesaria que en la fundamentación de la sentencia se indique los criterios utilizados para esta determinación; empero, suelen presentarse ciertas dificultades al momento de emitir este valor, lo cual sucede cuando el órgano jurisdiccional encargado, no realiza una correcta cuantificación del daño causado, menos aún se pronuncia cómo es que llega a establecer tal

cantidad, así lo expresa Guillermo Bringas, Luis Gustavo (2009) en la Revista Electrónica de del Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias Penales y Criminología, con título *Aspectos Fundamentales del Resarcimiento Económico del Daño Causado por el Delito*:

De la reparación civil sólo se menciona el monto a pagar, los obligados a hacerla y los beneficiados con la misma, pero nadie sabe cómo se determinó la cantidad a pagar, y qué clases de daños han sido comprendidos en la misma, menos todavía se hace referencia a los presupuestos de la responsabilidad civil (pág. 22).

Con lo manifestado se evidencia que el órgano jurisdiccional encargado de imponer la reparación civil, no muestra un cabal entendimiento del problema, llevando a tomar decisiones desproporcionales y contrarias a los intereses de las víctimas, demostrando las falencias en el criterio decisivo, con lo cual ocasiona un grave problema al momento de motivar las sentencias en lo referente a la cuantía indemnizable, omitiendo el pronunciamiento respecto a cómo se llegó a obtener determinado monto, causando así una grave afectación al derecho de defensa del procesado, tal como lo afirma Guillermo Bringas, Luis Gustavo (2009)

la carencia de motivación de las sentencias, en el extremo de la reparación civil, afecta también el derecho de defensa que asiste a todo procesado, pues si no se conoce los presupuestos sobre los que ha razonado el Juzgador -lo que conlleva, por ejemplo, al desconocimiento de los conceptos incorporados en el monto que le están obligando a pagar-, menos se puede realizar cuestionamiento alguno, situación que coloca en situación de indefensión al procesado (pág. 23).

En tal sentido, la determinación del monto indemnizatorio, al ser impuesto por el órgano jurisdiccional a razón subjetiva, conlleva a pensar que no se está cumpliendo con una correcta y justa cuantificación de la reparación civil que le corresponderá cubrir al sujeto infractor, así también lo expresa, Del Río Labarthe, Gonzalo (2010) “la práctica judicial revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto

de daño en sede penal son en realidad ínfimos y no guardan relación con el hecho que constituye el objeto procesal” (pág. 232). Esta es una clara evidencia que los órganos jurídicos no se encuentran capacitados en tal escenario, así lo manifiesta el expresidente del Poder Judicial San Martín Castro, Cesar, al decir:

En un mundo de altísima especialización, ¿qué diablos sabe un abogado de temas económicos y fórmulas de control? Nos genera un problema serio a quienes formamos parte del sistema de justicia, pero tiene que asumirse bajo pautas de razonabilidad y proporcionalidad para establecer si en efecto la determinación de la reparación civil se ajusta a esos criterios (Semanario Expresión, 2019).

Ello constituye un grave problema de nuestra administración de justicia respecto a la reparación del daño ocasionado por actos ilícitos, ya que como se viene diciendo los montos dinerarios impuestos no se subsumen bajo las pautas de razonabilidad y proporcionalidad, demostrando obstáculos y defectos que dificultan una adecuada determinación de responsabilidades civiles derivadas del delito, por lo que, los montos establecidos como reparación civil pueden llegar a ser nimios y no corresponder a la real magnitud del daño causado y probado en el proceso.

A ello se suma la falta de determinación del monto específico que asumiría aquel que se somete a la colaboración eficaz, ya que, como se sabe la figura se utiliza en casos con pluralidad de agentes, en ese sentido la reparación civil deberá ser asumida de forma solidaria por todos aquellos que resulten responsables del hecho delictivo, acarreando la necesidad de que cada uno cumpla con resarcir el daño ocasionado en proporción al perjuicio causado, pero sucede que no se da de esta manera, la reparación civil es atribuida en general y resulta siendo asumida globalmente por quien se sometió a la colaboración eficaz, resultando ser

perjudicial para éste en cuanto a al beneficio obtenido y en cuanto a su colaboración con la justicia.

3.5. El incumplimiento de la reparación y los principios rectores de la estructura penal

Siendo que, bajo la figura analizada, la reparación civil se encuentra comprendida como una de las obligaciones a la cual queda sometido el colaborador, al establecerse que el beneficiado está obligado a reparar los daños ocasionados por el delito, el incumplimiento de esta obligación acarrea la revocatoria del beneficio, así lo precisa Lopez Granda, William Fledy (2018), “Si el Fiscal verifica que el colaborador eficaz incumple sus obligaciones, recabará los elementos de convicción que lo sustentan, a efectos de solicitar la revocatoria de los beneficios” (pág. 86); entonces, el beneficio al cual accede el colaborador eficaz, está supeditado al cumplimiento del pago de la reparación civil, tornándose esto en una obligación cuyo incumplimiento lo perjudicará.

Es así que, tal cual se ha indicado anteriormente la cuantificación de los montos reparadores adquiere un carácter importante dado a que su incorrecta determinación puede convertir a esta imposición económica en un monto impagable al no ser debidamente cuantificada y distribuida entre los imputados; todo ello estaría generando en el sujeto una inseguridad jurídica al momento de someterse a esta figura.

En ese sentido no se podría obtener los beneficios de remisión o exención de pena de la pena sin previo pago de la reparación, pudiendo ser revocada la pena condicional si no se cumple con el previo pago de la reparación civil; afectación que permite identificar su origen en la incorrecta cuantificación de los montos

reparadores que no se ajustan a las directrices que señalan los principios de razonabilidad, primero, puesto que son determinadas sin una motivación jurídica que las justifique y segundo el principio de proporcionalidad dado que se identifica una falta de coincidencia con el nivel de gravedad respecto del daño producido.

Bajo este razonamiento queda clara la idea del resquebrajamiento de la estructura del proceso penal marcada por los principios rectores de razonabilidad y proporcionalidad afectados por la incorrecta cuantificación del monto reparador acarreando el incumplimiento por parte del colaborador eficaz y en consecuencia la revocación del beneficio que le corresponde como colaborador eficaz.

CAPITULO IV

LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

Conforme se ha revisado de los presupuestos para la existencia de una responsabilidad civil, generadora de una reparación civil, en un proceso penal y una vez verificada dicha responsabilidad, queda por definir cuanto de reparación civil se le impondrá a los responsables del evento delictivo, donde se aplicará algunos criterios dependiendo de la clase de delitos que se ventilen, finalmente una vez definida vía sentencia penal el monto exacto de reparación civil queda aún un tema crucial ¿a quién o a quienes y en qué proporción se les exigiría el cobro de dicha reparación civil?. Esto no tendría ningún problema si el autor del delito fuera una sola persona, a la cual tendría que exigirse el cobro integro de la reparación civil, el problema se manifiesta cuando existe una pluralidad de agentes en un mismo hecho delictivo de los cuales uno se somete al proceso por colaboración eficaz.

4.1. La responsabilidad en el resarcimiento del daño

Atendiendo lo antes descrito cabe establecer en primera instancia que, cuando son varios los sujetos causantes de evento resarcible, existen diferentes grados de intervención para cada una de las personas involucrados, es decir, existen "coautores", "inductores" y/o "cómplices" en un mismo evento delictivo. en donde estos dos últimos siempre responden en un grado menor que los coautores, en otras

palabras, son estos los obligados a responder con el pago de la reparación civil, así lo expresa Guillermo Bringas, Luis Gustavo (2009):

(...)los daños a ser resarcidos, y la exigencia que los mismos se determinen recién luego de afirmado la presencia de un delito (sea que los *daños* sean *típicos* o se deriven del mismo), rige fundamentalmente para los causantes directos del daño (autores y partícipes), pero también para otros obligados solidariamente, como el tercero civil, cuya responsabilidad no se fundamenta en la realización de un delito, que a su vez cause daño, sino que su responsabilidad civil se deriva de la *garantía de reparación* que lo vincula con el autor del hecho (pág. 4).

El cumplimiento de la obligación de resarcir el daño es exigible a los causantes del perjuicio, en ese sentido al existir diferentes títulos de imputación, se dirá entonces que no es lo mismo responder penalmente como autor que como partícipe de un determinado evento dañoso generador de responsabilidad civil.

En ese sentido se tendría que analizar la siguiente interrogante: La exigencia del cobro de la reparación civil en la sentencia condenatoria tendría que seguir las reglas específicas de la responsabilidad civil perfiladas en el Código Civil, o por el contrario tendría que seguirse las reglas de la responsabilidad penal ceñidas en el Código Penal.

Ante ello Gálvez Villegas, Tomás Aladino (2014) en el Anuario de Derecho Penal de título *El Ministerio Público Y La Reparación Civil Proveniente Del Delito*, manifiesta lo siguiente:

Esta reparación puede lograrse por vías extrajudiciales o mediante la correspondiente acción civil ante el órgano jurisdiccional, en la vía civil o en la penal; pero en ambos casos se aplicará los elementos y principios propios de la responsabilidad civil (pág. 184).

Entonces, para exigir el cumplimiento de la Reparación Civil generada en un Proceso Penal se tendrá que seguir las reglas, elementos y principios específicos de la responsabilidad civil, así también lo expresa Morales Hervias, Rómulo (2006) en

Diálogo con la Jurisprudencia 96, con el título *Persona Jurídica Como Tercero Civilmente Responsable, Una Infeliz O Feliz Vinculación Entre El Derecho Civil Y El Derecho Penal*, al decir que “la responsabilidad penal tiene sus propios fundamentos, pero cuando se establece una reparación civil en un proceso penal debe analizarse el caso desde la perspectiva del Derecho Civil” (pág. 224), entonces se dirá que el cumplimiento de la reparación civil al ser establecida en un proceso penal tendrá que regirse según las normas del código civil, siendo definida tal posición en la sentencia que ha de emitir el juez penal, claro está, si es condenatoria.

Partiendo de lo descrito se tendrá entonces que al existir varios sujetos intervinientes en un mismo hecho delictivo y que han sido sentenciados a una pena y una determinada reparación civil, ésta para ser ejecutada por los sujetos condenados tiene que ceñirse a las reglas del código civil, lo cual pone de manifiesto la regla de la solidaridad entre los obligados, al cual el artículo 95 del Código Penal lo regula en los Siguierte términos: *"la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados"*. cabe acotar que este artículo al regular la solidaridad entre los responsables del hecho punible, lo hace con la sola intención de dar protección a la víctima en cuanto a su efectivo cumplimiento respecto de la reparación civil, así lo manifiesta Villegas Paiva, Elky (2013) en su obra titulada *El Agraviado Y La Reparación Civil*, al expresar lo siguiente:

El fundamento de la solidaridad radica en que de esta manera se protege “el interés de la víctima”, facilitándole la posibilidad de dirigir la acción contra quien mejor le parezca o juzgue más fácil. Asimismo, ante un supuesto de insolvencia o muerte de alguno de los responsables del hecho, el agraviado puede hacer efectivo el cobro de la reparación civil en los otros responsables solventes (pág. 186).

En cuanto al Proceso Penal, la Reparación Civil al manifestarse solidaria presenta una inexactitud, puesto que, no existe la individualización en cuanto a la contribución al daño generado por cada uno de los involucrados en el hecho delictivo, porque si en todos los casos fueran perfectamente identificables las respectivas contribuciones de los responsables, no resultaría necesario exigir a cada uno de los deudores o acreedores el total de ella, ya que como se sabe en el proceso penal la reparación civil impuesta es resultado del daño ocasionado.

Aquí se pone de manifiesto la dificultad que existe al momento de ejecutar la reparación civil en un proceso por colaboración eficaz, ya que como se sabe en dicho proceso son varios los sujetos involucrados que deben responder en cuanto a una determinada reparación civil, la cual no es fraccionada, sino que se rige por la regla de la solidaridad, la cual como vemos no tiene la cualidad de definir o determinar un monto específico a cada uno de los responsables, en ese sentido, el colaborador asumiría en su totalidad la reparación, la cual le genera la desconfianza de someterse a la figura ya que su responsabilidad no tendría un límite en cuanto a la reparación civil.

Otro punto en cuestión es respecto a la clase o modalidad de ejecución de la pena que se emita: si es una pena suspendida o si es efectiva, aquí encontramos un dilema en cuanto a la pena suspendida, la cual está regulada en el art 57 Código Penal como “La Suspensión de la Ejecución de la Pena”, adicionalmente encontramos el artículo 58 del Código Penal, que establece, que el Juez al otorgar condena condicional (suspensión de la Ejecución de la pena) impondrá diferentes reglas de conducta entre las que se encuentra (inciso 4) *la reparación de los daños ocasionados por el delito* y añadiendo a ello el artículo 59, que establece, que frente

al incumplimiento de las normas de conducta impuestas, el juez, podrá, según sea el caso y conforme a sus atribuciones, inciso c) *revocar la Suspensión de la pena*, por lo que la procedencia o no de la revocatoria de la suspensión de la pena por incumplimiento de la regla de conducta de reparar del daño ocasionado por el delito, es un tema polémico y discutido en nuestra jurisprudencia y doctrina, lo que ha producido que surjan dos posiciones contrapuestas.

Así tenemos en una primera interpretación: Que no procede la revocatoria de la suspensión de la pena, por incumplimiento de la obligación resarcitoria, ante esta primera interpretación tenemos a Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl, quien en el Blog de Javier Arias El Ser Humano Y La Saciedad A Través Del Derecho, con el título *La Naturaleza Jurídica «Civil» De La Reparación Civil En La Vía Criminal Y Su Insostenible Carácter Accesorio En El Proceso Penal*, recaba el siguiente fundamento de la corte suprema:

La Corte Suprema, -por su parte-, en el RN N° 4885-2005-AREQUIPA, afirmó que: "Debe tenerse en cuenta que las consecuencias del delito no se agotan con la imposición de una pena o medida de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer una sanción reparadora, cuyo fundamento está en función a que el hecho delictivo, no solo constituye un ilícito penal sino también un ilícito de carácter civil, para lo cual debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 2° inciso 24 apartado "c" de la norma -No hay prisión por deudas-; por lo que no resulta pertinente su imposición como regla de conducta, en atención a su propia naturaleza jurídica, no pudiéndose supeditar la condicionalidad de la pena a la exigencia de su pago, como erróneamente se ha dispuesto...- respecto a reparar el daño causado-; razón por la cual, es necesario dejar sin efecto dicho extremo" (pág. 12)

Lo esgrimido se interpreta de la misma norma, por la cual concluye que no es posible revocar la suspensión de la pena por incumplimiento del pago de la reparación civil, aun cuando el artículo 59 así lo establezca, pues ello implicaría cometer una evidente transgresión del artículo 2, numeral 24, inciso C de la

Constitución Política del Estado que establece: “*No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios*”.

Con ello se observa que tal posición, presenta argumentos sólidos respecto a la imposibilidad de la revocatoria de la suspensión de la pena, dándose prevalencia a la aplicación de una norma de mayor jerarquía como es la Constitución Política del Estado, empero, este argumento no es susceptible de aceptación, pues autores como Mori León, Jhuly (2014), quien en la Revista Peruana de Ciencias Penales, con el título “*El derecho de resarcimiento del daño sufrido por las víctimas de delitos y el Código Procesal Penal Peruano*” considera que no existe violación a la norma legal por el incumplimiento del pago de la reparación civil como regla de conducta, al manifestar lo siguiente:

el imponerlo como regla de conducta no conlleva una “prisión por deudas”, ya que ello no genera efecto directo alguno sobre la libertad del condenado en tanto aquel no infrinja de modo reiterado las reglas de conductas fijadas en la sentencia. La revocación del régimen de suspensión no lleva al condenado a cumplir una pena privativa por deuda de la reparación civil, ya que la pena que se le impuso en la sentencia obedece a que él cometió culpablemente un delito y no por alguna deuda contraída (pág. 96).

Esto demuestra que se está haciendo una equivocada interpretación de la norma legal y que tal obligación no viola en absoluto el principio de prohibición de prisión por deudas, con ese sentido se encuentra la segunda posición, Procedencia de la Revocatoria de la Suspensión de la Pena, por Incumplimiento de la Obligación Resarcitoria, posición que ha sido tomada por el Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 02826-2011-PHC/TC, al manifestar en el sexto fundamento lo siguiente:

(...) que el incumplimiento de la reparación civil no puede generar consecuencias que restrinjan la libertad personal en el proceso penal, que el Tribunal Constitucional ha expresado en la sentencia recaída

en el Expediente N.º 1428-2002-HC/TC (fundamento 2) que la exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, como regla de conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación de la suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de naturaleza civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del Derecho Penal, constituye una condición para la ejecución de la pena; consecuentemente, *no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados* (Caso Alberto Espinoza Vásquez contra Manuel Roberto Hernández Quiroz y Rosa Quiroz Zelada, 2011).

Tal fundamento señala que no es correcto afirmar que el pago de la reparación civil como regla de conducta sea de naturaleza civil, ya que al encontrarse en el campo del derecho penal ésta constituye una condición cuyo incumplimiento determina la inejecución de una sanción penal, en esas circunstancias su imposición como regla de conducta resultaría legítima.

En efecto, al supuesto de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena por el incumplimiento del pago de la reparación civil, se tiene a Franco Apaza, Pedro David (2008) quien se pronuncia de la siguiente manera:

La imposición (efectivización) de la pena privativa de libertad no se funda en el incumplimiento de una obligación de naturaleza civil (independiente), pues la suspensión de la ejecución de la pena no hace nacer la obligación (que es preexistente); más bien es una obligación cuyo cumplimiento determinaba la inejecución de una sanción penal. El incumplimiento de la regla de conducta no acredita la responsabilidad del agente, sino es una consecuencia expresada en la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena antes impuesta (Franco Apaza, 2008).

Entonces, queda claro que si es posible revocar la pena por incumplimiento del pago de la reparación civil impuesta como regla de conducta en un proceso penal, lo cual resulta ser importante en el contexto referido a los procesos por colaboración eficaz

analizado en los capítulos anteriores, en cuanto que, el beneficio obtenido se condiciona al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, una de las cuales es justamente la de reparar el daño ocasionado, aquí se dirá entonces que la reparación civil impuesta tendría que ser atribuida de manera proporcional y específica a aquel que se sometió a la colaboración eficaz, la cual sería directamente asumida por este, para que así el pago de la reparación civil no sea un obstáculo por las cuales se tenga que revocar el beneficio obtenido, acarreando con ello a que dicha figura resulte siendo ineficaz.

4.2. Vías de solución de la responsabilidad solidaria, en función a la pluralidad de condenados por reparación civil.

El tema de la solidaridad en el cobro de la responsabilidad civil en función a la pluralidad de condenados respecto a la reparación civil dentro de un proceso penal, tendría dos vías de solución, y cada una de estas soluciones tiene sus particularidades de acuerdo a cada caso en concreto, veamos cada una de ellas.

Según James Reátegui Sánchez (2016) en el *Tratado De Derecho Penal Parte General* manifiesta:

(...) que el juez penal usando su poder de discrecionalidad razonada pueda imponer en su sentencia, que la reparación civil, con respecto al cobro íntegro de esta, sea exigido a cualquiera de los condenados, sin importar el título de imputación de dichos condenados, y ya internamente el condenado que pagó al autor civil el íntegro de la reparación pueda exigir repetir con respecto a los demás condenados, y aquí si hay tercero civil, este también entraría conjuntamente con los demás condenados del delito (pág. 2473).

Al resultar el agente del delito, los partícipes y eventualmente el tercero civil, ser deudores del agraviado por un monto equivalente al total del daño causado, esta

posición brinda la posibilidad de que sea el juez penal quien, con base en el derecho de repetición, señale en su sentencia que el condenado que pago el total de la reparación civil ejerza el derecho de repetir contra los otros condenados, en ese sentido a palabras de Villegas Paiva elky (2013) se tiene que:

(...) el derecho de repetición que tiene quien ha pagado la integridad de la deuda (véase artículo 1983 del Código Civil). Es decir, que el agraviado haga efectivo el cobro en solo uno de los responsables, no implica que este se vea perjudicado frente a los demás participantes del hecho, pues en virtud del citado artículo puede iniciar acción de repetición frente a estos (pág. 186).

Lo cual, si se plantea dentro del propio proceso penal resulta siendo improcedente, ya que claramente el ejercer la acción de repetición constituye una nueva relación jurídica procesal de carácter obligacional entre los condenados, resultando ser absolutamente ajeno al proceso penal, pues así también lo expresa Taboada Pilco, Giammpol (2018), en los Comentarios al II Pleno Jurisdiccional Nacional Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios:

(...) la repetición de uno de los condenados sobre el resto, debe ser ejercitado posteriormente en un proceso autónomo civil, pues el objeto del proceso penal concluyo con la ejecución de la pena contra los condenados (pretensión penal) y con el pago de la reparación a favor del agraviado (pretensión civil). Por tanto, el proceso penal no es el escenario para ejercitar el derecho de acción del condenado que pago la reparación civil (ahora acreedor) para pretender repetir contra los demás condenados conforme a las reglas del art. 1983 CC, pues claramente constituye una nueva relación jurídica sustantiva y procesal de carácter obligacional entre los condenados (acreedor-deudor), totalmente ajeno al proceso penal ya concluido (Taboada Pilco, 2018).

En consecuencia, el derecho de repetir ante los demás imputados. no puede ser impuesto en la misma sentencia que emite el juez penal, sino que tal derecho debe hacerse valer en la vía civil como un nuevo proceso, de ahí que habiendo estudiando la colaboración eficaz tal acción no resulta ser muy útil, dado que de todas formas la reparación civil tiene que ser pagada para que después de ello se pueda ejercer el

derecho a repetir frente a los otros obligados, lo cual conlleva a que el colaborador de todas maneras asuma la totalidad de la reparación civil si desea que su beneficio no sea revocado.

La Segunda opción sería que, tomando como relevancia el título de imputación de los condenados (autor, cómplices, instigador, etc.), sea en torno a este criterio que se determine la responsabilidad civil, ya que el mismo legislador brinda un tratamiento punitivo específico, vale decir que, una cosa es responder como autores y otra cosa, muy distinta, es responder como partícipes de un mismo hecho, en si son distintos los niveles de atribución de responsabilidad, por esa razón se diría que se les aplique la exigencia del cobro de la reparación civil, en función al grado de intervención personal de cada uno de los condenados.

Tal expectativa es pronunciada por Alan A. Pasco, Arauco (2010) en Bepress, con el título *La Actuación De Los Cómplices E Instigadores En El Ámbito De La Responsabilidad Civil. Cómo Responden Y Como Deberían Responder. A Propósito De La Pretendida Prevalencia De La Función Reparatoria Sobre La Función Preventiva De La Responsabilidad Civil*, al expresar lo siguiente:

En efecto, la bifurcación que hace la doctrina y el Código Civil entre autores y partícipes, implica reconocer distintos grados de responsabilidad en cada uno de ellos, y esto acarrea a su vez imponerles distintos montos resarcitorios,

Si distinguimos entre autores y partícipes, es porque consideramos que ambos no tienen el mismo grado de responsabilidad, y como no tienen el mismo grado de responsabilidad, corresponde que cada uno de ellos asuma distintos montos resarcitorios (pág. 12).

Si el derecho penal, a través de la historia, ha señalado un criterio diferenciado entre autores y partícipes del delito, porque no hacerlo en cuanto a la teoría de la responsabilidad civil en el proceso penal, pues como se mencionó líneas adelante

la reparación civil aun impuesta en un proceso penal se rige por las reglas del derecho civil, pues su aplicación lo hace en estricta relación con la función resarcitoria de las indemnizaciones, en sus reales alcances gira en torno a señalar que puede haberse probado el daño causado, pero no se ha establecido dicho daño en su monto preciso.

Por consiguiente, el artículo 1983 *“Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales”*. Lo cual constituye el parámetro de referencia fundamental de la posibilidad que surge de atribuir un monto diferenciado, pues será en atención a las características personales y al esfuerzo desplegado por el sujeto obligado que se determine la cuantificación en función a su participación, en atención a ello puede hacerse uso de éste criterio diferenciado pudiendo ser expresado por el juez penal en su sentencia, siendo que esta posición se debería adoptar en cuanto a los procesos por colaboración eficaz ya que es aquí donde se presenta la dificultad para asumir la reparación civil, arribando a que dicho proceso no llegue a cumplir con sus fines.

4.3. Reparación civil y la sentencia de conformidad.

Una muestra clara de este tema es el tratamiento dado en los procesos penales con pluralidad de procesados, entre ellos la colaboración eficaz, en donde uno de los sujetos asume su responsabilidad penal y los demás no, aquí encontramos que este

se somete a todo lo que conlleva un proceso penal, aceptar la pena y la reparación civil, es decir se conforma, tal circunstancia no deslinda que el proceso continúe sobre los demás acusados, sin saber si resultan ser condenados o absueltos, entonces se tiene que en ambas situaciones se asumirán penas distintas dependiendo del grado de intervención, la cual sólo y exclusivamente afecta a la persona contra quien se dictó el fallo correspondiente, pero qué sucede con la reparación civil?, esta será determinada independientemente en ambos procesos o se asumirá en tanto a una sola determinación, ya que como se sabe la reparación civil es única y se rige por la regla de la solidaridad.

En este punto se acude al Acuerdo Plenario N 5-2008/CJ-116, sobre el asunto "Nuevos alcances de conclusión anticipada", que en el considerando 26, ha tocado el tema de la reparación civil y la sentencia de conformidad de aquellos que se acogieron a dicha sentencia, e impacto de la reparación civil con respecto a aquellos que no se sometieron a dicha conformidad. Al respecto la corte suprema en dicho acuerdo señala que:

"Por último, es materia de discusión en el ámbito de la responsabilidad civil la determinación del monto y los obligados a cubrirlo cuando se trata de una pluralidad de partícipes - codelincuencia-, varios de los cuales no se han sometido a la conformidad procesal", sobre el particular, en los marcos de una sentencia conformada, es de tener en consideración dos aspectos sustanciales: el primero referido a los alcances de la sentencia conformada, esta solo comprenderá a los imputados que se sometan a la conformidad, y, el segundo circunscrito al monto de la reparación civil, el cual está en función del daño global irrogado, bajo la regla de la solidaridad entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados (artículo 95 del código penal).

Siendo así, el tribunal fijará el monto de la reparación civil de modo global (la cantidad en cuestión siempre será única, no puede dividirse), de suerte que como esta es solidaria si existieran copartícipes - y no mancomunada -, al emitirse condena contra ellos en el juicio sucesivo, si así fuera el caso, tal suma no variaría y sólo se les comprenderá en su pago. Es posible,

sin embargo, que en el juicio contradictorio la determinación del monto pueda variar en virtud de la prueba actuada. En ese caso, tal variación, más o de menos, no puede afectar al fallo conformado, al haber quedado firme o ganado firmeza. Por consiguiente, la variación sólo puede alcanzar a los acusados comprendidos en la condena objeto del juicio contradictorio (IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES, 2008).

De lo dicho por la corte suprema se tiene que, la determinación del monto puede variar en virtud a la prueba actuada, es decir que la reparación civil puede resultar siendo menor o mayor a la ya irrogado en el proceso conformado (caso concreto de la colaboración eficaz), ante la cual según manifiesta la corte no puede afectar al fallo conformado, en tal sentido el problema que se observa en la presente investigación realizada es que el colaborador tiene la obligación de cancelar toda la reparación civil porque está inmersa como una de las reglas de conducta, esto se infiere ya que los demás coimputados aún no han sido declarados culpables, además que de ello dependerá que el beneficio obtenido no sea revocado, todo lo aludido sucede de forma independiente al resultado que surta sobre los demás imputados, es decir que sean absueltos o condenados,

Es por esta razón es que surge la posibilidad de decir que se pueda imponer un monto específico por reparación civil para aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz, para de esa manera se logre que la figura cumpla con su finalidad y a la vez la víctima se vea resarcida en ese extremo, pues de qué sirve que el colaborador brinde información importante, obtenga el beneficio en cuanto a la pena, si al final se verá perjudicado con el pago de la reparación civil, pues al ser impuesta como una regla de conducta estará condicionado a que se tenga que cancelar por completo, teniendo que asumir el íntegro del pago de la reparación civil quien desee obtener un beneficio.

Por otro lado, la conformidad sobre la pretensión civil está encaminada por los principios dispositivos y de congruencia, para efectos si no se cuestiona la reparación civil no será posible modificarla, puesto que la variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia conformada.

Entonces es claro el escenario que se muestra, si bien la pena es atribuida de manera independiente, no se dice lo mismo de la reparación civil ya que esta es determinada de forma general al daño producido por todos los involucrados, pudiendo ser cancelado por uno o por todos los responsables.

4.4. Condena civil sin condena penal en el nuevo proceso penal.

En el proceso penal, lo que se produce con el ejercicio de la acción civil es una acumulación heterogénea de procesos penal y civil en un procedimiento único, cada uno informado por sus propios principios, con fundamento en la economía procesal, en el que se dictará una única sentencia. Esta contendrá dos pronunciamientos: uno penal y otro civil. Así tenemos lo mencionado por Del Rio Labarthe, Gonzalo (2010)

el nuevo proceso penal permite que se ordene el pago de la reparación civil, incluso en aquellos supuestos en los que no existe una sentencia de condena penal; ello involucra una renuncia al viejo modelo de accesoriedad restringida. Además, ubica la acumulación heterogénea de pretensiones en el contexto que debe ocupar, que es el de la celeridad procesal (pág. 221).

En el mismo sentido, no es necesario que el imputado sea condenado a una pena, puesto que puede darse que no haya responsabilidad penal pero si una responsabilidad civil, por lo que el fundamento de la institución de la

responsabilidad civil derivada del delito se halla en un criterio de economía procesal, es decir evita un posible desgaste de la actividad jurisdiccional ya a la vez protege a la víctima en cuanto a su accionar reparador, de la misma manera jurisdiccionalmente se tiene que según el fundamento jurídico ocho del acuerdo plenario N° 5-2011/CJ-116, que dice:

la naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente civil, y que aun cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que un Juez Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el quantum indemnizatorio – acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, 2011).

El código procesal penal regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, el cual corresponde al ministerio público y especialmente al perjudicado por el delito, dígase el particular o el estado mismo por medio del procurador, al sostener que la naturaleza de la reparación es absolutamente privada de la acción civil acumulada al proceso penal, se aprecia por lo tanto claramente en la regulación de los artículos 13 y 14 de CPP, normativa que reafirma la idea de que la acción civil ejercitada en el proceso penal es derivada y por ello dispositiva.

Por otro lado, el artículo 12.3 de CPP, establece “*La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda*”.

Tal situación faculta al juez a pronunciarse sobre la reparación civil aun cuando se sobresea el caso es decir aun cuando se absuelva de la acusación al imputado, este dispositivo, a criterio de los señores jueces de la Corte suprema constituye la modificación más importante en el ámbito de la reparación civil incorporada al

proceso penal, establecido en el fundamento 7 del Acuerdo Plenario N° 5-2011/ACJ-116:

"esto significa en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado no necesariamente la jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho - siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal" (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, 2011).

En esta misma línea, esta sala penal especial ha establecido que puede no haberse configurado el tipo penal, pero si los daños resarcibles, por tanto, habrá responsabilidad civil, ello es así, debido a que la reparación civil resulta procedente si se cumple con probar la materialización del daño propiamente como tal.

También se puede encontrar establecido en la norma jurídica, así tenemos que la Según el numeral 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal, dispone lo siguiente;

“La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”, dispositivo que debe concordar con el artículo 93 del Código Penal que prescribe: *“la reparación civil comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”*, para este efecto se tiene en cuenta que la pretensión civil dado los casos en los que se presenta la colaboración eficaz, hablamos de crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios entre otros que tienen a más de un sujeto imputado se evidencia que para los casos en que resulta siendo el estado quien ejerza la acción civil lo hará por medio del procurador, quien en su función ejercerá la pretensión civil por los daños causados que produjo el actuar delictivo, tal como también lo establece el artículo 1969 del código civil, por el cual

se tendrá que acreditar en juicio que el accionar del acusado ha infringido dicho artículo.

El artículo 12.3 del Código Procesal Penal establece: *”La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”*, lo cual prevé la reparación civil en la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, procede lo que debe ser determinado por el juez penal cuando la conducta del interviniente en el hecho punible (autor y partícipe) es atípica, se está ante una caída de exculpación, absolución por excusa Absolutoria, prescripción de la acción penal, entre otros.

Teniendo en cuenta que, tratándose de un hechos contra la ministración pública, no sólo se puede afectar el patrimonio del estado, sino también otros bienes jurídicos de relevancia constitucional o legal que trascienden la tutela penal, como es el caso de la administración de justicia, en este caso para determinación de las consecuencias jurídicas civiles, se aplican las reglas de la reparación civil contractual (artículos 1314, al 1332 del código civil) o extracontractual (artículos 1969 al 1988 del código acotado).

CAPÍTULO V

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Análisis de la necesidad de modificar la regla de colaboración eficaz a fin de evitar injustos respecto de la determinación del pago de la reparación civil.

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procederemos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

5.1. Análisis de los resultados:

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

5.1.1. Resultados del análisis estadístico.

Procesos ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque durante los años 2015 - 2018

La información obtenida ha sido proporcionada por la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la misma que ha sido remitida por el servicio de correo electrónico mediante tablas cuya información se ha tratado analíticamente dando como resultado la separación del rubro de delitos contra la administración pública, quedando la primera construcción de la siguiente manera

Tabla 1: Cuadro que compara cuantitativamente los expedientes ingresados por materia a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre los años 2015-2018

AÑO	TODAS LAS MATERIAS	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2015	678	29
2016	990	28
2017	1177	13
2018	1827	413

Como se puede apreciar de la construcción de esta tabla existen dos características saltantes en función a los niveles de incidencia en Delitos Contra la Administración Pública apreciándose con el índice más bajo el que corresponde al año 2017 y con el índice más alto la del año 2018 a comparación con los años anteriores,

Para tener una mejor apreciación de este resultado se ha desarrollado una comparación porcentual la cual se grafica a través de las siguientes ilustraciones

Ilustración 1: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2015

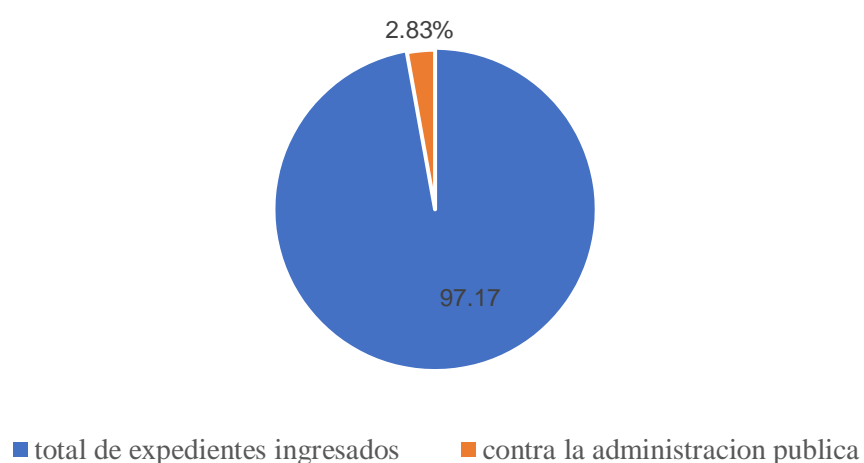
Comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales del Distrito Judicial de Lambayeque durante el año 2015



Como se puede evidenciar los delitos cometidos contra la Administración Pública ingresados en el año 2015 en la ciudad de Chiclayo son el 4,27% del total de los casos presentados

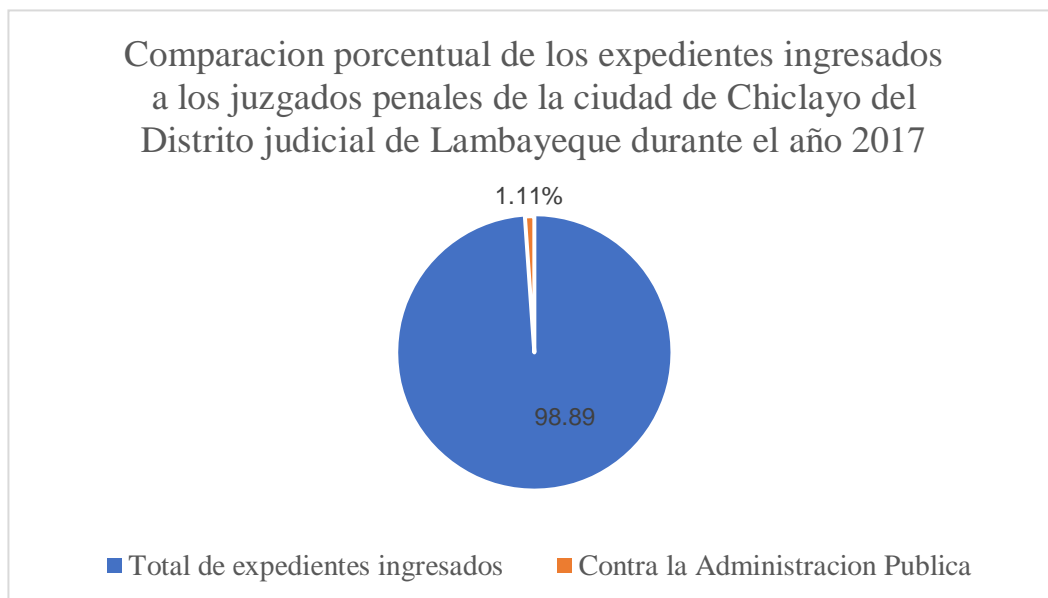
Ilustración 2: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2016

Comparacion porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales del Distrito Judicial de Lambayeque durante el año 2016



El grafico presentado evidencia el nivel de disminución de los delitos contra la administración pública durante el año 2016, llegando a ser solo un 2,83% del total de casos ingresados a los juzgados penales de Chiclayo.

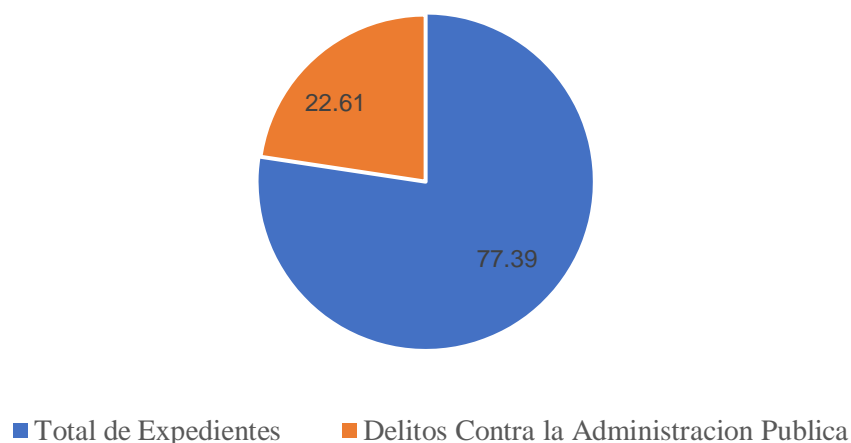
Ilustración 3: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque durante el año 2017



En el grafico se puede observar que el año 2017 presenta una mínima cantidad de procesos por Delitos Contra la Administración Pública, siendo solo el 1.11% del total de procesos ingresados durante el dicho año, lo cual refleja que ha sido un año de mínimas incidencias penales en los referidos delitos.

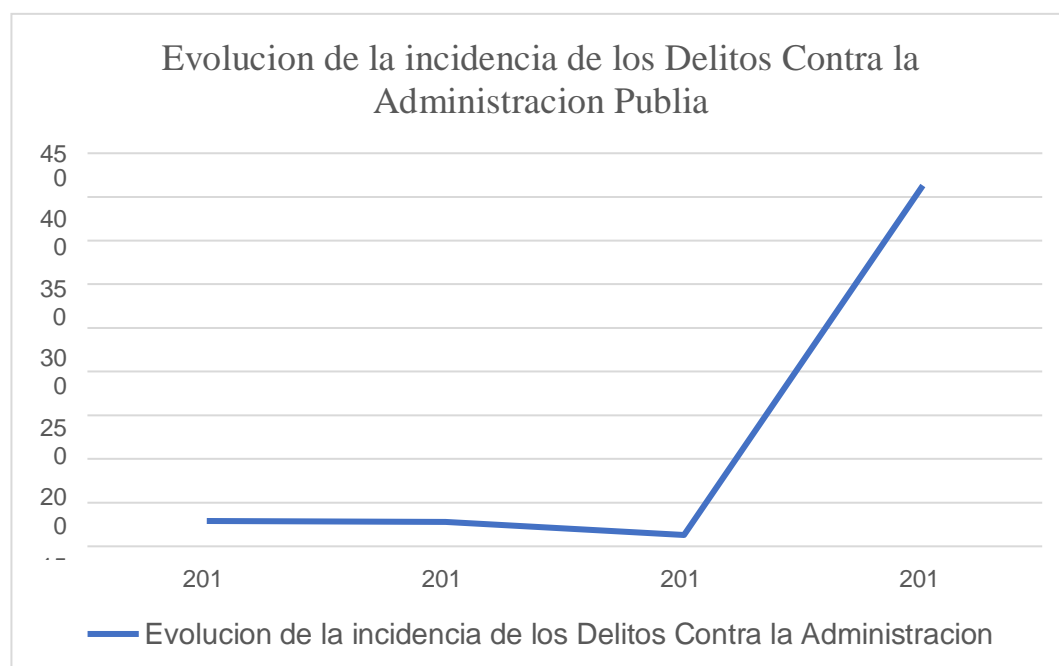
Ilustración 4: Grafico de la comparación porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2018

Comparacion porcentual de los expedientes ingresados a los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo del Distrito judicial de Lambayeque durante el año 2018



El grafico muestra que en el año 2018 hubo un incremento de delitos contra la administración pública llegando a ser el 22.61% del total de procesos ingresados, lo cual a comparación con el grafico anterior del año 2017 este año presenta una mayor cantidad de procesos.

Ilustración 5: Grafico sobre la evolución de la incidencia de los Delitos Contra la Administración Pública



El grafico representa la incidencia de los procesos penales sobre Delitos Contra la Administración Pública ingresados durante los años 2015 a 2018, en el cual como se puede observar entre los años 2015 al 2017 han sido mínimos los casos ingresados, mientras que durante el año 2018 se muestra que hay un considerable incremento de procesos ingresados por esta materia.

Procesos ingresados a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque durante los años 2015 - 2018

La información que se presenta a continuación ha sido remitida mediante carta N° 000165-2019-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE emitido por el Presidente de la Junta de Fiscales del distrito Judicial de Lambayeque, dicha información se ha tratado analíticamente mediante un cuadro separado por fiscalías, quedando la construcción de la siguiente manera

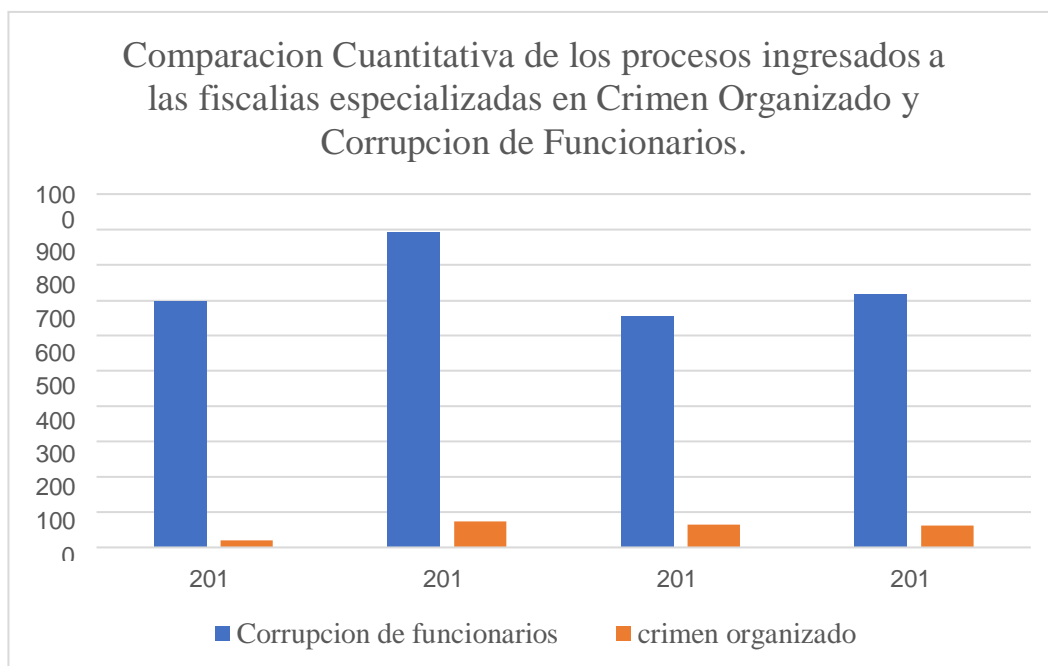
Tabla 2: Cuadro que compara cuantitativamente los procesos ingresados a las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la ciudad de Chiclayo entre los años 2015-2018

AÑO	FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	FISCALÍA ESPECIALIZADA DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2015	20	697
2016	74	892
2017	65	652

2018	62	717
-------------	----	-----

En el cuadro mostrado se observa respecto a los delitos de corrupción de funcionarios una mayor cantidad de procesos ingresados en comparación con los casos de crimen organizado,

Ilustración 6: Grafico que representa la comparación cuantitativa de los procesos ingresados a las fiscalías especializadas en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.



El grafico evidencia la gran diferencia que existe entre los procesos ingresados en las fiscalías de crimen organizado y corrupción de funcionarios, siendo que la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios mantiene durante los cuatro años una gran diferencia, eso es una clara evidencia que la corrupción en la administración pública es la que se manifiesta con frecuencia por lo que resulta siendo el estado el que necesita de la justicia para y poder imponer una correcta pena y reparación del bien jurídico protegido.

5.1.2. Resultados del análisis jurisprudencial.

Como un aporte para la investigación planteada se analizará lo mencionado en la Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03588-2011-PHC/TC ICA, en lo referente a la solidaridad del pago de la reparación civil como requisito previo para la obtención de los beneficios penales y penitenciarios para los Delitos Contra la Administración Pública.

En ese sentido se considera apropiado recoger algunos extractos de la misma, en cuanto a la forma en la que se trata el pago de la reparación civil, ya que se encuentra en relación con el problema planteado.

Así tenemos:

Esta peculiar forma de responsabilidad nace ante la imposibilidad de individualizarse las contribuciones al daño causado, por parte de cada uno de los agentes responsables del hecho punible, y tiene como finalidad principal potenciar la seguridad en el cumplimiento del pago de la reparación civil, evitando que la insolvencia de varios condenados frustre el derecho del agraviado de ser resarcido (Caso Emilio Pedro Cuadros Hernández contra Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica, 2012)

Ciertamente la solidaridad de la reparación civil surge como una manera de dar protección a la víctima que ostenta el derecho de resarcimiento, la cual es correctamente aceptada, pero ante tal situación también se observa que se ocasiona un mal al sujeto que pretende obtener un beneficio (caso de la obtención de beneficios por colaboración eficaz) y reparar su actuar delictivo, ya que para tal hecho se requiere que se cumpla con el integro de la reparación civil, sin saber el agente en qué proporción le corresponde asumir su responsabilidad, ocasionándole una responsabilidad ilimitada, al tener el deber de cumplir con el total de la misma,

caso que también se observa en la sentencia analizada, pues el incumplimiento del total de la reparación civil provocó que se le revocara la semilibertad del sentenciado.

Otro punto en cuestión es lo siguiente:

Por otro lado, al revisar la resolución cuestionada a fojas 17 y la sentencia que lo condena por el delito de peculado doloso y otros (Expediente 2000-402), se trataría de tres condenados, entre ellos el accionante, Roberto Alejandro Giraldo Norbuenba y Felix Bustinza Pancca (fojas 71). Al respecto, en la resolución cuestionada se indica que no se habría cumplido con cancelar el íntegro del monto; en ningún momento se señaló que le correspondería pagar la suma de cinco mil nuevos soles, por lo que el alegato del beneficiado respecto al cumplimiento del pago de una parte de los quince mil nuevos soles, suma considerada en la condena como íntegro de la reparación civil, a prorrata entre los obligados, no puede considerarse el cumplimiento de un pago íntegro (Caso Emilio Pedro Cuadros Hernández contra Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica, 2012).

Si bien la reparación civil es solidaria entre los responsables del daño, en el caso en concreto se evidencia un desconocimiento respecto a la forma en la que se asumirá dicha obligación, puesto que, en autos se observa que son tres los responsables y que uno de ellos cancela una parte de la misma, esta situación se produce ante el desconocimiento del carácter solidario de la reparación civil producto de la ausencia de motivación en este extremo, lo cual ocasionó que el accionante entendiera que le corresponde cancelar cinco mil nuevos soles como la parte de reparación civil respecto a su responsabilidad.

En ese sentido existe la necesidad de individualizar las contribuciones del daño causado, sobre todo en los casos por colaboración eficaz, porque como ya se ha visto está de por medio la obtención de beneficios premiales que otorga dicha figura, ya que adicionalmente como se ha visto el imputado no tiene claro en qué

proporción asumirá la obligación de reparar el daño causado, llegando en estos casos a ser ilimitada su responsabilidad civil

5.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

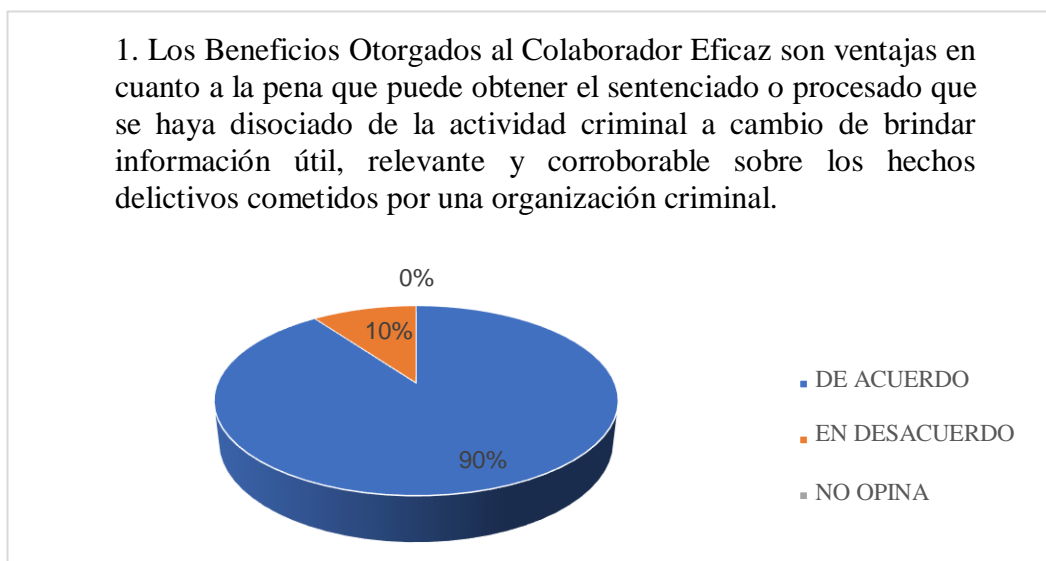
Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

1. Los Beneficios Otorgados al Colaborador Eficaz son ventajas en cuanto a la pena que puede obtener el sentenciado o procesado que se haya dissociado de la actividad criminal a cambio de brindar información útil, relevante y corroborable sobre los hechos delictivos cometidos por una organización criminal.	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	45
b. En Desacuerdo	05

c.	NO Opina	00
TOTAL		50

Descripción: Tabla N° 01, a la pregunta planteada Los beneficios Otorgados al Colaborador Eficaz son ventajas en cuanto a la pena que puede obtener el sentenciado o procesado que se haya disociado de la actividad criminal a cambio de brindar información útil, relevante y corroborable sobre los hechos delictivos cometidos por una organización criminal de un total de 50 muestras realizadas, 45 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 05 de ellos indicaron No estar de acuerdo.

Ilustración 7: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 01 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque



Como se puede observar la diferencia que existe entre los operadores jurídicos que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con la definición jurídica de la figura de colaboración eficaz, es mínima, en ese sentido se concluye que la definición dada es aceptada por la mayoría de los operadores jurídicos consultados.

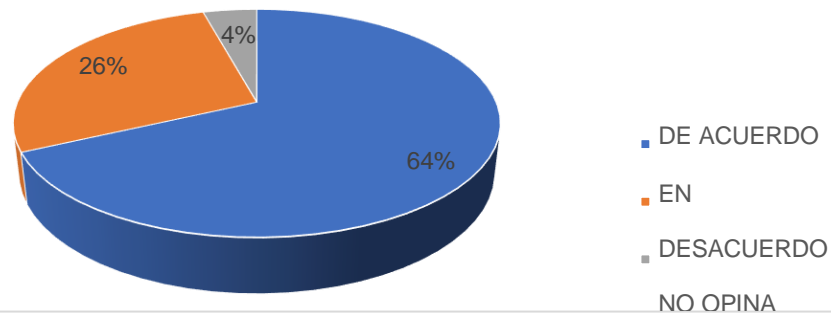
Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

2. La regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz, por no llegar a surtir efectos positivos en cuanto al beneficio obtenido por ser solidario el pago de la reparación civil	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	30
b. En Desacuerdo	18
c. NO Opina	02
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 02, a la pregunta realizada: La regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz, por no llegar a surtir efectos positivos en cuanto al beneficio obtenido por ser solidario el pago de la reparación civil de un total de 50 muestras realizadas, 30 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo en que la regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que asume el colaborador, 18 de ellos indicaron No está de acuerdo y 02 No opina a la pregunta formulada.

Ilustración 8: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 02 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

2. La regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz, por no llegar a surtir efectos positivos en cuanto al beneficio obtenido por ser solidario el pago de la reparación civil.



En el grafico se puede observar que las personas encuestadas que manifiestan estar de acuerdo en que la regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil para el colaborador, es porcentualmente mayor en referencia quienes no están de acuerdo con esta afirmación, llevando a decir que la pregunta planteada justifica la existencia de la necesidad de contemplar límites a la responsabilidad civil en un proceso por colaboración eficaz.

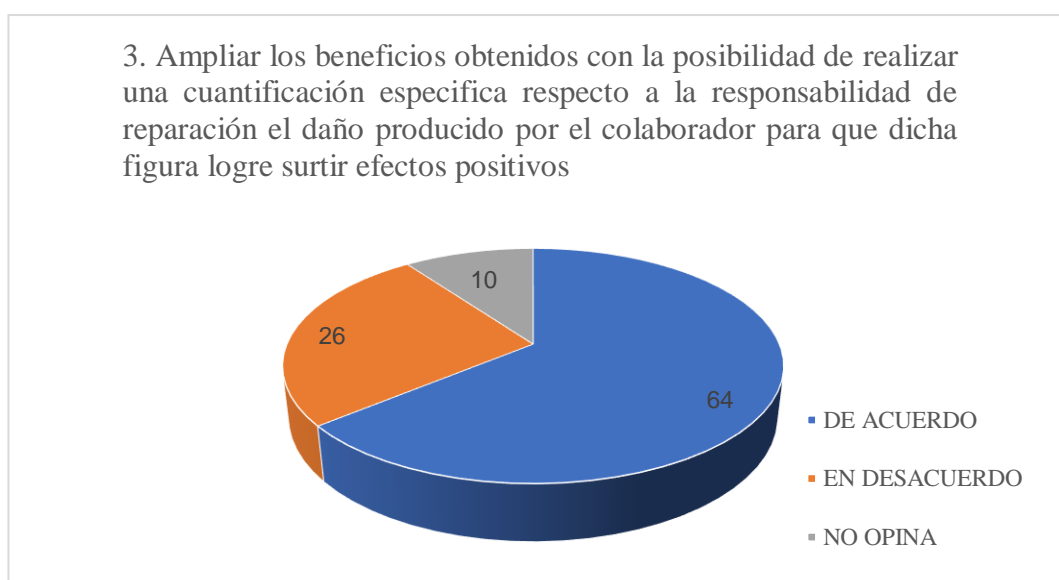
Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

3. Ampliar los beneficios obtenidos con la posibilidad de realizar una cuantificación específica respecto a la responsabilidad de reparación el daño producido por el colaborador para que dicha figura logre surtir efectos positivos

ALTERNATIVA		CANTIDAD
a.	De Acuerdo	32
b.	En Desacuerdo	13
c.	NO Opina	05

Descripción: Tabla N° 03. A la pregunta realizada: Ampliar los beneficios obtenidos con la posibilidad de realizar una cuantificación específica respecto a la responsabilidad de reparación el daño producido por el colaborador para que dicha figura logre surtir efectos positivos, de un total de 50 muestras realizadas, 32 de los encuestados indicaron estar de Acuerdo en ampliar los beneficios, 13 de ellos aseguraron No está de acuerdo. Y 05 no opina.

Ilustración 9: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 03 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.



En el grafico se puede observar que porcentualmente prevalece la opinión de operadores jurídicos encuestados que manifiestan estar de acuerdo en ampliar los beneficios y que solo un 26% no están de acuerdo con esta propuesta, por lo cual sigue prevaleciendo la opinión de la mayoría con un 64%.

Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

4. La Reparación Civil es la obligación que tiene toda persona que ha cometido un acto ilícito para reparar el daño producido en la víctima.

	ALTERNATIVA	CANTIDAD
a.	De Acuerdo	46
b.	En Desacuerdo	02
c.	NO Opina	02
	TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 04, a la pregunta realizada: La Reparación Civil es la obligación que tiene toda persona que ha cometido un acto ilícito para reparar el daño producido en la víctima, de un total de 50 muestras realizadas, 46 de los encuestados indicaron estar de Acuerdo, 02 de ellos aseguraron No está de acuerdo y 02 No Opinaron al respecto.

Ilustración 10: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.



Como se puede observar del grafico el 92% de los encuestados están de acuerdo con la definición de reparación civil, lo cual evidencia que no es errada la noción que se tiene de estos términos.

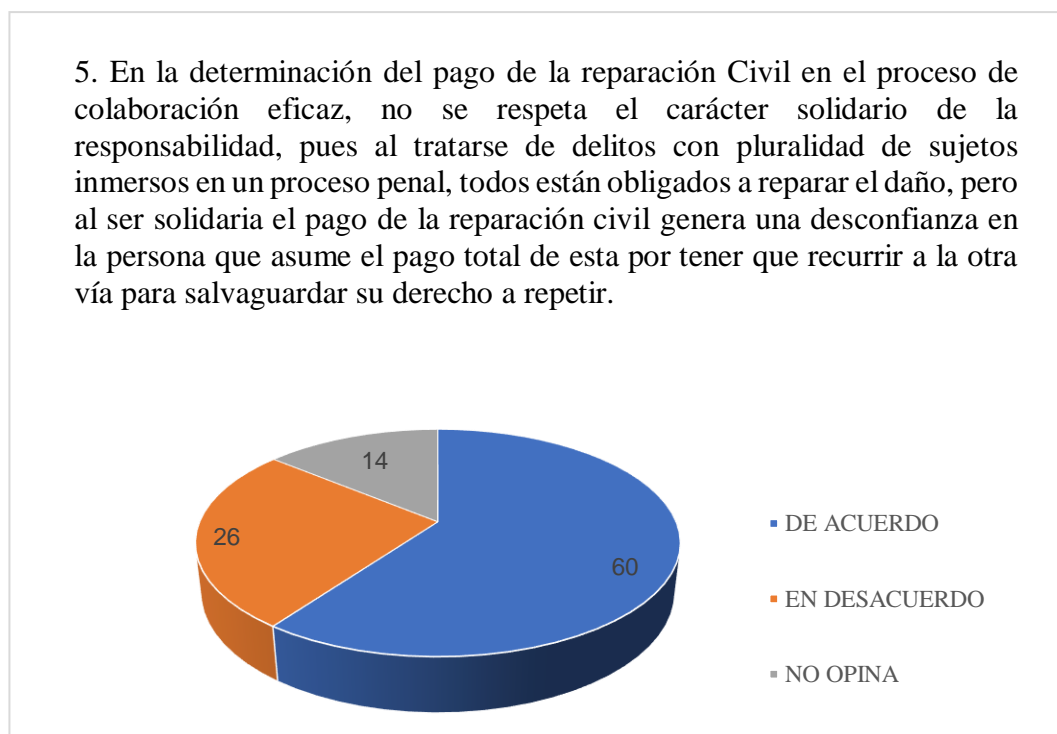
Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque

5. En la determinación del pago de la reparación Civil en el proceso de colaboración eficaz, no se respeta el carácter solidario de la responsabilidad, pues al tratarse de delitos con pluralidad de sujetos inmersos en un proceso penal, todos están obligados a reparar el daño, pero al ser solidaria el pago de la reparación civil genera una desconfianza en la persona que asume el pago total de esta por tener que recurrir a la otra vía para salvaguardar su derecho a repetir.	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
d. De Acuerdo	30
e. En Desacuerdo	13
f. NO Opina	07
TOTAL	50

Descripción: Tabla N° 05, a la pregunta planteada: En la determinación del pago de la reparación Civil en el proceso de colaboración eficaz, no se respeta el carácter solidario de la responsabilidad, pues al tratarse de delitos con pluralidad de sujetos inmersos en un proceso penal, todos están obligados a reparar el daño, pero al ser solidaria el pago de la reparación civil genera una desconfianza en la persona que asume el pago total de esta por tener que recurrir a la otra vía para salvaguardar su

derecho a repetir, de un total de 50 muestras realizadas, 30 de los encuestados indicaron estar de Acuerdo, 13 de ellos aseguraron No está de acuerdo y 07 No Opinaron al respecto.

Ilustración 11: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 05 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.



El grafico representa las cantidades porcentuales de la opinión vertida por los operadores jurídicos respecto a la determinación del pago de la reparación civil, a esta consulta el 60% manifiesta estar de acuerdo y el 26% refiere no estar de acuerdo, lo cual evidencia que aun así existe una mayoría que si concuerda con la conclusión presentada.

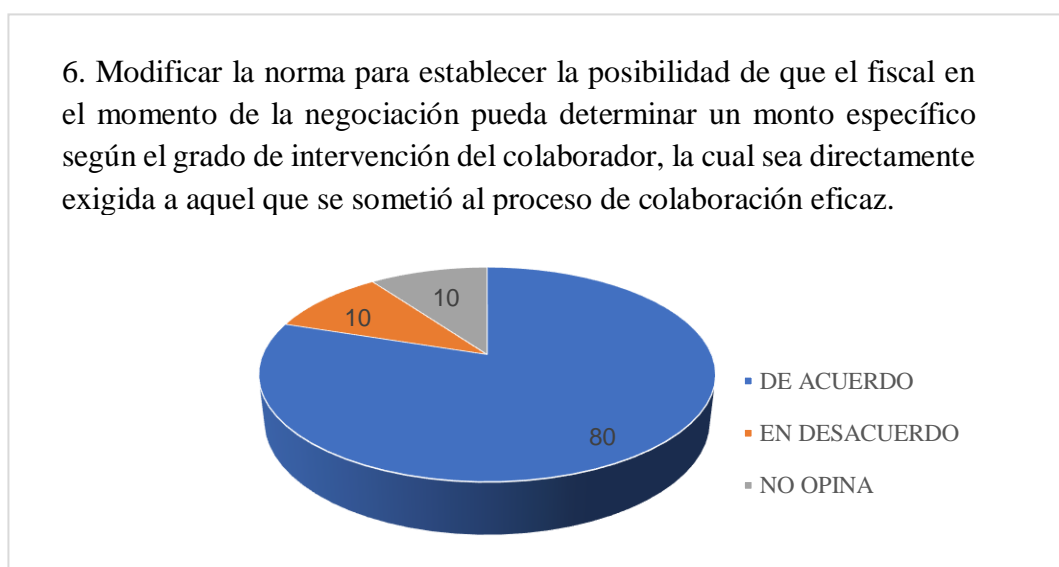
Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.

6. Modificar la norma para establecer la posibilidad de que el fiscal en el momento de la negociación pueda determinar un monto específico según el grado de intervención del colaborador, la cual sea directamente

exigida a aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz.		
ALTERNATIVA		CANTIDAD
g.	De Acuerdo	40
h.	En Desacuerdo	05
i.	NO Opina	05
TOTAL		50

Descripción: Tabla N° 06, a la pregunta realizada, Modificar la norma para establecer la posibilidad de que el fiscal en el momento de la negociación pueda determinar un monto específico según el grado de intervención del colaborador, la cual sea directamente exigida a aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz, de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseveraron estar de Acuerdo, 05 de ellos aseguraron No está de acuerdo y 05 no opina.

Ilustración 12: Grafico porcentual del resultado de la afirmación N° 06 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque.



El grafico que se presenta evidencia la cantidad porcentual de la opinión recogida de los operadores jurídicos en cuanto a la necesidad de modificar la norma para que el fiscal al negociar la colaboración pueda determinar un monto específico por reparación civil para el colaborador, a lo cual un 80% manifestó estar de acuerdo con esta propuesta, un 10% no está de acuerdo y 10% no opina, en conclusión, la propuesta vertida logra una gran aceptación por la comunidad jurídica.

5.1.4. Resultados de entrevista.

Se buscó la opinión de quien está inmerso en estos temas en el día a día, siendo así que se logró conseguir la opinión del Fiscal Anticorrupción el señor José Luis Constantino Espino, a quien a través de un cuestionario se le hizo la consulta sobre la problemática planteada. Contestando válidamente las siguientes preguntas:

¿Le parece adecuado recoger el fundamento del Derecho Premial como base de la colaboración eficaz?

Es adecuado recoger el fundamento del Derecho Premial, por cuanto, el proceso de colaboración eficaz es un beneficio al cual se acoge el imputado en un proceso penal, con la finalidad de obtener reducción de la pena probable a imponer, entonces al ser un beneficio corresponde aplicar su fundamento con el Derecho Premial.

Considera usted que, ¿la regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz?

No contempla, pero queda a criterio del juez de la investigación preparatoria la suspensión de la reparación civil hasta la sentencia final de los demás imputados, es decir se suspende los alcances de la reparación civil

¿Cree usted apropiada una distribución entre el colaborador eficaz y los imputados responsables del hecho punible como fundamento de los beneficios otorgados?

Sí considero adecuado una distribución de la reparación civil, por cuanto todos responden de forma solidaria.

¿Resultaría pertinente Ampliar los beneficios obtenidos con la posibilidad de realizar una cuantificación específica respecto a la reparación del daño producido por el colaborador eficaz?

Si será factible ampliar estos beneficios, en razón que se pueda incluir en los mismos la reparación civil que fue o será cancelada en la emisión de la sentencia condenatoria final.

En la determinación de la reparación civil en el proceso de colaboración eficaz, al estar inmerso el carácter solidario ¿cree usted que esta figura se respeta, teniendo en cuenta que se trata de delitos con pluralidad de sujetos?

En la actualidad existe el problema al respecto ya que la sentencia de colaboración es emitida antes de la sentencia final, y por ende el pago de la reparación civil será antes del fallo final, entonces no habrá proporción respecto a la responsabilidad civil

Al estar la reparación civil incluida como una obligación, ¿condiciona el pago de la reparación civil generando una desconfianza en la persona que asume el pago total de esta?

El colaborador eficaz tiene la obligación de resarcir el daño causado, es decir está obligado a cancelar la reparación civil de acuerdo a los alcances del acuerdo, por lo tanto, quedara en un trato designado en relación a los demás.

¿Qué opinión le merece la propuesta de modificar la norma para establecer la posibilidad de que el fiscal en el momento de la negociación pueda determinar un monto específico según el grado de intervención del colaborador, la cual sea directamente exigida a aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz?

Es interesante dicha propuesta, ya que evita una desigualdad respecto al pago que realiza el colaborador eficaz, es decir deberá ser proporcional.

¿En su experiencia como fiscal anticorrupción puede decir que la regla de solidaridad en el pago de la reparación civil es aplicada en forma directa en los procesos de colaboración eficaz?

Se está aplicando la regla de la solidaridad en el pago de la reparación civil para los colaboradores eficaces

¿Podría usted indicar la cantidad de procesos de colaboración eficaz en los que se haya revocado el beneficio a causa de la ausencia de la totalidad del pago de la reparación civil?

Se sigue la regla del artículo 59 de código penal, es decir aún seguimos en el trámite de ejecución, sin embargo, es factible que ante la renuncia al pago del C.E se revoque la pena

¿Le parece adecuada la idea de dividir los montos de reparación civil en forma individual, al momento de su determinación, para que así el colaborador eficaz pueda cumplirla y evitar la revocación del beneficio?

En marco donde se pueda dividir su participación proporcional, si lo considero factible dividir los montos de reparación civil, como en el caso del delito de peculado doloso, apropiación, en el caso de los cómplices.

De la información obtenida, se puede decir que evidentemente existe la ausencia de una distribución específica de la reparación civil en los procesos por colaboración eficaz, pues aunque el juez en ocasiones considere que la reparación civil quede reservada su ejecución hasta que se emita la sentencia final contra los demás imputados, ello no garantiza que sea dispuesta de igual forma por demás órganos judiciales ya que no se encuentra especificado en la norma, lo cual provoca que haya criterios diferenciados en este aspecto.

CAPÍTULO VI

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir lo planteado.

En ese sentido, en la presente investigación se planteó como objetivo principal “Determinar si los beneficios otorgados al colaborador eficaz generan un efecto sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil del proceso penal”. Para ello se estableció cuatro objetivos específicos, sobre los que se tiene la siguiente discusión:

6.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la figura jurídica de colaboración eficaz y los beneficios que surgen de su aplicación”

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación se tiene

¿CUÁL ES EL SENTIDO JURÍDICO DEL DERECHO PENAL PREMIAL?

Una forma de combatir la criminalidad es mediante la amenaza de la pena, pero al carecer de efectividad se opta por introducir el premio como parte de la política criminal de cada estado, el cual hace frente a las nuevas formas de criminalidad buscando obtener una mayor eficiencia y eficacia en la persecución de determinados delitos y a la vez descongestionar un pesado sistema procesal.

Algunos autores consideran que el Derecho Premial estaría flexibilizando la aplicación de la pena concreta que establece la norma, debido a que se rompe el nexo retributivo que liga la sanción con la pena al imponer una pena diferente a la que legalmente le tocaría afrontar, ya que el estado ideal es aquel que no concede beneficios a los delincuentes, pero frente a la ola de delitos especiales se hace necesaria la figura de la colaboración eficaz

Ante esta situación se considera la colaboración eficaz uno de los procedimientos que más resultados positivos ha generado en cuanto a delitos como el terrorismo, crimen organizado y corrupción por lo cual se consideró necesario incentivar conductas de desistimiento y arrepentimiento del criminal, con la finalidad de desarticular la delincuencia organizada y de brindar justicia a la sociedad,

Producto de la aplicación de esta figura se logró facilitar la labor fiscal, por el cual pese a los esfuerzos de la actividad investigadora del ministerio público en muchas ocasiones los procesos caían al no encontrar sustentos concretos en la persecución de un delito cometido por varios sujetos, a la vez se logró dar justicia a las víctimas al no dejar impune los delitos, siendo este el sentido jurídico que sustenta al Derecho Premial.

¿EL DERECHO PENAL PREMIAL SE JUSTIFICA EN TODA CLASE DE DELITOS?

Si bien la premialidad se manifiesta en diferentes figuras como por ejemplo la colaboración eficaz, la confesión sincera y la terminación anticipada, en cuanto a estas últimas la aplicación de la premialidad es limitada en cuanto a los beneficios que se puede obtener y sobre todo en cuanto al momento en que el sujeto está

facultado acogerse, en comparación con la colaboración eficaz, ésta es más completa y abarca más beneficios por lo cual la hace la figura que engloba de forma más clara y precisa al Derecho Premial.

En ese sentido es necesaria la aclaración de que en delitos simples en los cuales se presenta un solo imputado, no existe la necesidad de aplicar la figura de colaboración eficaz ya que en estos casos se tiene plenamente identificado al sujeto infractor, siendo importante decir que con la introducción de la colaboración eficaz como parte del Derecho Premial es combatir la criminalidad organizada, por ello se tiene que la aplicación del Derecho Premial, se justifica solo en cuanto a los delitos que evidencia una pluralidad de sujetos involucrados.

En tal sentido la colaboración eficaz como parte del derecho premial es aplicable sólo en delitos como; lavado de activos, terrorismo, narcotráfico corrupción de funcionarios y otros delitos vinculados principalmente al crimen organizado.

¿EL INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE EXISTE REGULA TODAS LAS CUESTIONES RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE UN ESTADO FRENTE A OTRO EN CUANTO A COLABORACIÓN EFICAZ?

Con respecto al instrumento internacional existente, la convención de Palermo, recomienda que cada estado parte deberá establecer dispositivos para que los sujetos involucrados en actos delictivos presten información útil y relevante para combatir el crimen, promoviendo que cada país integrante adopte medidas a favor de la colaboración eficaz y que se firmen Acuerdos Internacionales al respecto.

A razón de ello en el caso ODEBRECH, se ha tenido que firmar un Acuerdo Internacional de Colaboración eficaz para así poder tener acceso a la información de quien fuere uno de los integrantes de la más grande organización criminal, ello en cumplimiento a lo mencionado por la Convención de Palermo

Esto ha llevado a que la justicia peruana se vea limitada en cuanto a las medidas que se debería tomar, ya que la normativa internacional vigente no regula de manera específica cada aspecto de la figura de colaboración eficaz de darse su aplicación de manera internacional.

¿ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE NORMA EXPRESA QUE CONTEMPLE LA ATENUACION Y EXENCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL?

Si bien el contemplar en la norma ciertos beneficios en cuanto a la pena que recibe el colaborador eficaz producto de la ayuda o contribución que brinda, refleja, tal como algunos autores manifiestan que el delincuente se somete a la figura con la sola intención de evitar una pena mayor mas no porque realmente este arrepentido, este hecho muestra que el estado al brindar beneficios resulta imponiendo una pena distinta a la que naturalmente le tocaría asumir. También es importante mencionar que el incentivar la delación con beneficios a quien participo en la comisión de un ilícito, resulta siendo de mucha importancia, ya que la información que aporte será utilizada para la incriminación a los demás coimputados responsables, con lo cual ayudara al fiscal a la elaboración de su teoría del caso, permitiendo un avance en cuanto a los casos que en muchas ocasiones no se habían logrado imponer una sanción penal al responsable así como también permitirá que los perjuicios

ocasionados a la víctima sean reparados mediante la reparación civil, estando adicionalmente condicionado a que cumpla con determinadas obligaciones.

Son estas las razones por las que se hace necesaria la existencia de norma expresa que contemple las atenuaciones y exenciones de la responsabilidad penal, produciendo un avance en el sistema procesal y sobre todo libre de impunidad en los delitos de gran complejidad.

¿LA COLABORACIÓN EFICAZ ES UN SISTEMA QUE FOMENTA LA INOPERANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL?

Si bien algunos autores consideran que la colaboración eficaz fomenta la inactividad procesal producto de que es el colaborador quien brinda la información que será usada en contra de los demás responsables, ello evidencia que el encargado de recabar la información necesaria dígase el fiscal no estaría realizando los verdaderos actos de investigación que le competen. En ese sentido se estarían vulnerando los principios procesales de los investigados, ya que la misma ley no exige que la declaración del colaborador eficaz tenga un nivel estándar de veracidad para darle valor en cuanto a ciertas medidas coercitivas que se arriben tomar, en ese sentido dicha información podría resultar ser incluso una mentira corroborable con el solo hecho de obtener un beneficio, ya que la forma en la que es aceptada dicha información, no acarrea mayores actos de investigación.

Por otro lado, aunque no se puede negar que con las pruebas brindadas por el colaborador eficaz se obtiene información de vital importancia que será usada en contra de los demás responsables, es cierto también que la figura faculta a fiscal a promover actos de corroboración en cuanto a la información y pruebas que brinde

el colaborador, lo cual ha llevado a decir que el fiscal actúa conjuntamente con el colaborador recabando la información necesaria, la cual debe ser evaluada estrictamente bajo los criterios de valoración y corroboración de la prueba,

Es así que a partir de ello se lograra obtener los resultados esperados por la sociedad, independientemente de que la información sea recabada por el colaborador, el fiscal también mantiene su importante rol de investigación para que ayude a dar con quienes realmente participaron en el hecho criminal, evitando injustos penales.

¿BAJO QUÉ CRITERIOS SE BRINDAN LOS BENEFICIOS AL COLABORADOR EFICAZ?

Como se ha visto el acuerdo de colaboración eficaz es negociado en primera instancia por el fiscal y el imputado, en este acuerdo se plasma el beneficio que este recibirá por su aporte y las obligaciones a las cuales queda sometido, en estas circunstancias se tendrá en cuenta la calidad de información que se brinda para que el fiscal tenga claro el beneficio que le corresponde, también como se sabe este acuerdo será sometido a la aprobación del juez de la investigación preparatoria, quien evaluara si dicho acuerdo se ha llevado a cabo conforme a las condiciones y los principios básicos que deben seguirse.

En ese sentido, queda clara la idea que los beneficios se otorgan de acuerdo a una correcta y justa valoración de la prueba, pues es el fiscal quien corrobora la información aportada por el sujeto que desea someterse a la figura de colaboración eficaz, luego ese acuerdo será revisado por el juez de la investigación preparatoria quien decidirá si le corresponde dicho beneficio, por lo que a la vez también deberá

verificar si la información aportada por el colaborador ha sido corroborada por el fiscal para que se puede brindar el beneficio determinado

Por lo tanto los beneficios a otorgarse, como consecuencia del acuerdo de colaboración eficaz que se celebre, debe sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene, pues el órgano judicial el encargado de evaluar si lo aportado por el aspirante a colaborador eficaz tiene sustento para la obtención de dicho beneficio, teniendo en consideración el grado de eficacia e importancia de la colaboración, pues de no cumplir con las exigencias se dará por denegada la aprobación de dicho acuerdo.

¿LA FIGURA DE COLABORACIÓN EFICAZ COLISIONA CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PENAL?

Se sabe que la sanción penal debe ser impuesta de acorde al delito, es decir, no debe ser excesiva, midiéndose proporcionalmente con base en la importancia social del hecho, entonces la sanción penal en un proceso por colaboración eficaz ya no es el resultado del delito cometido sino consecuencia de una actuación posterior a esos hechos delictivos, la cual dependerá del resultado de la negociación que se lleve a cabo, porque como se sabe los beneficios se obtendrán de acuerdo a la información que brinde el colaborador, en ese sentido se terminaría transgrediendo el principio de proporcionalidad penal.

El principio de proporcionalidad que reconoce la idea de evitar un uso excesivo de las sanciones que conllevan a una privación o una restricción de la libertad, se restringe su uso a lo indispensable, por lo que la pena no ha de ir más allá de lo que es necesario para cumplir un fin

En ese sentido la introducción de los beneficios que se brindan al colaborador eficaz en cuanto a la reducción de la pena se realiza en concordancia con el principio de proporcionalidad, de manera que se otorgan beneficios según al grado de colaboración que se brinde, permitiendo disminuir la pena concreta en un determinado nivel a las penas previstas para los delitos perseguidos.

TOMA DE POSTURA

Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en función a la colaboración eficaz, se dirá entonces que, la introducción de la figura de colaboración eficaz se sustenta jurídicamente en el Derecho Premial, el cual surge con la finalidad de combatir las nuevas formas de criminalidad, motivo por el cual resulta inevitable la existencia de norma expresa que establezca beneficios como la atenuación y exención de la pena con la que se logra incentivar al sujeto que participe en la comisión de un delito para que colabore con la justicia, con el fin de desarticular una organización criminal y descongestionar un pesado sistema procesal.

Entonces se justifica la aplicación de la colaboración eficaz en delitos de gran complejidad que evidencia una pluralidad de sujetos involucrados como: lavado de activos, terrorismo, narcotráfico corrupción de funcionarios y otros delitos vinculados principalmente al crimen organizado.

En ese sentido los beneficios que se brindan al colaborador se realiza en concordancia con el principio de proporcionalidad y legalidad, de manera que se otorgan beneficios según al grado de colaboración que se brinda, lo cual permite disminuir la pena concreta en un determinado nivel a las penas previstas para los

delitos perseguidos y a la vez permitir que los perjuicios ocasionados a la víctima sean reparados.

Finalmente, así como existe normativa interna vigente al respecto, también es evidente que el instrumento internacional actual no abarca de manera específica cada aspecto de la figura de colaboración eficaz como necesidad ante los actuales hechos que involucran en actos de corrupción a varios países, pues es innegable que la justicia peruana se ve limitada en cuanto a las medidas que ha de tomar.

6.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir la teoría de la responsabilidad penal como base del resarcimiento”.

¿CUANDO EXISTEN VARIOS SUJETOS INVOLUCRADOS LA RESPONSABILIDAD PENAL OPERA IGUAL QUE LA RESPONSABILIDAD CIVIL?

Un sujeto termina siendo responsable de un delito a razón de su intervención, motivo por el cual se le impondrá una determinada sanción penal (pena), es decir responderá como autor, cómplice o instigador de ser el caso, es por ello que la responsabilidad penal es personalísima, porque solo responderá por el delito cometido nunca por el ajeno.

La norma penal no está legitimada para imponer una pena en la que el Estado exija cumplir a uno o a varios de los responsables o que sólo uno cumpla por todos los demás. En ese sentido, el que la responsabilidad penal sea de carácter personalísimo no impide que pueden existir diferentes sujetos involucrados en un mismo delito,

existiendo la necesidad de que cada uno responda de forma individual por su grado de intervención frente a la necesidad de reparar a la sociedad.

De esta manera el que existan varios sujetos involucrados en un mismo hecho delictivo no supone que la responsabilidad penal opere de igual forma que la responsabilidad civil, cuando se dice que es solidaria, en ese sentido el Derecho penal no está legitimado para prever la solidaridad ya que se trata de una sanción como la pena, es decir, de la relación existente entre cada delincuente individualmente responsable y el Estado.

¿UN SUJETO ES PENALMENTE RESPONSABLE SOLO A RAZON DE SU CULPABILIDAD?

En la esfera del Derecho Penal, para el que infringe el orden jurídico con la comisión de un acto socialmente dañino, el estado tendrá la obligación de reprimir determinada conducta con la imposición de una sanción, esto como política preventiva del Estado, por lo cual, desde esta perspectiva, para establecer la culpabilidad de un individuo en el plano jurídico-penal, sólo se puede invocar aquellas concepciones bajo el margen de la acción propia del individuo.

Por otro lado, el órgano judicial tendrá en cuenta que dicha conducta se adecue a las condiciones mínimas que respondan al concepto de imputabilidad, por lo tanto, el sujeto responderá penalmente siempre que no se encuentre dentro de las causales de inimputabilidad que lo eximen de responder penalmente por el delito cometido.

Por lo tanto si bien se decía que hay responsabilidad ante los resultados que generan los actos que se realizan, esto no es suficiente para “culpar” a alguien por la

comisión de un delito con el solo criterio de la amplia discrecionalidad, de allí que sea necesario determinar bajo qué presupuestos y condiciones el agente está en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que le permitan percibir adecuadamente la realidad y ser dotado con capacidad de conocer y pretender realizar el hecho ilícito.

¿QUÉ JUSTIFICA LA REPARACIÓN CIVIL EN UN PROCESO PENAL?

Si por la comisión de todo delito o falta nace una acción penal, también es evidente que cuando el delito ataque o lesione un bien jurídico particular surge el ejercicio de la acción civil, tal pretensión nace por la necesidad que se repare el daño ocasionado a la víctima y a la vez solicitado este en sede penal radica en el principio de economía procesal, por tal motivo en un proceso penal se establece la responsabilidad penal que persigue la imposición de la pena y la responsabilidad civil que persigue únicamente la reparación del daño ocasionado por la conducta lesiva (reparación civil).

En ese sentido lo que justifica la reparación civil en un proceso penal es la necesidad de ver reparado el daño que produjo el actuar delictivo de un determinado sujeto, en garantía de una justicia social, producto de ello se genera una obligación ante la víctima, por la cual, de no darse su cumplimiento, al ser un mandato judicial, estaría adquiriendo un carácter represivo.

¿LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO PENAL SE CONVIERTE EN MEDIO DE CONTROL SOCIAL?

Si bien en la actualidad las sociedades evolucionan produciendo nuevas formas de conductas delictivas, es el estado el encargado a mantener el orden establecido entre estas, pues por medio del derecho se previene, reprime y premia la conducta, entonces la pena al reprimir la conducta dañina se presenta como medio de control social coercitivo, esto como parte de política criminal estatal.

En ese sentido, la responsabilidad civil al cumplir el rol de reparar el daño producido a la víctima pone de manifiesto al igual que la pena, el carácter garantizador del control social, es decir esta destinado a mantener el orden establecido entre los ciudadanos, pues como parte del proceso penal ésta brinda una justicia adicional a la sanción penal, manifestada en la reparación civil, la cual produce una satisfacción en la víctima, por ende, tanto la sanción penal como la reparación civil cumplen un rol importante en la sociedad.

¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPARACIÓN CIVIL EL PROCESO PENAL?

Al respecto existen diversas posiciones, por un lado, se establece que la reparación civil tiene una naturaleza penal debido a que se realiza a través del proceso penal y está ligada a una pretensión punitiva del estado (la pena), en ese sentido si se asume que la reparación civil tiene naturaleza penal, la existencia y dimensión de la misma se determinara en función a la culpa y capacidad económica del agente con lo cual se podría estar desnaturalizando la esencia del resarcimiento.

Por otro lado, se sostiene que la reparación es de carácter civil ya que se ejecuta conforme a las normas específicas del código civil (compensando a la víctima).

Pues ciertamente la reparación civil independientemente del proceso en el que se realice, mantiene su naturaleza civil ya que ésta es establecida conforme a las reglas establecidas en el código civil.

¿LA RESPONSABILIDAD CIVIL MANIFIESTA EL CARÁCTER REPRESIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL?

La responsabilidad civil establecida en un proceso penal es considerada generadora únicamente de una sanción económica, en ese sentido solo la sanción penal ostenta en carácter represivo.

Por otro lado, con la reparación civil que nace de un hecho que produce daño o menos cayo patrimonial emerge el derecho en la víctima de reclamar el resarcimiento del daño causado, por ello el monto impuesto a cancelar por el o los sujetos culpables cumplirá la función de prevención que ostenta el derecho penal, entonces la reparación civil, en comparación con las sanciones de pena privativa ofrece al sujeto infractor mejores oportunidades de resarcir a la víctima; en ese sentido la función resarcitoria de la responsabilidad civil proveniente de que el delito se considera como una categoría propia de las sanciones penales.

¿LA REPARACION CIVIL ES ESTABLECIDA EN PROPORCIÓN O MEDIDA AL DAÑO GENERADO?

Si bien se dice que la reparación civil es impuesta en medida al daño ocasionado, este monto reparador es calculado de forma inespecífica en cuando al perjuicio causado, lo cual puede llevar a decir que su imposición no llegaría a ajustarse a los parámetros justificables del daño ocasionado, ya que las estimaciones pecuniarios que se establecen por concepto de daño en un proceso penal son en

realidad mínimos y no tienen proporción con el hecho que constituye el objeto procesal, existiendo una incongruencia entre los resarcimientos que se otorgan en sede civil y aquellas fijadas en un proceso penal, aun siendo hechos causantes de perjuicios similares.

Resultando evidente que los montos fijados por reparación civil son diferentes para cada caso en concreto, pudiendo incluso resultar un aprovechamiento por parte de la víctima, por tal motivo se puede decir que la reparación civil en muchas ocasiones no se determina de forma correcta para el imputado como para la víctima, pudiendo pensarse que el mandato penal estuviera obligado a actuar con una generosidad inexplicable en un proceso civil.

Sabiendo cuán importante resulta la reparación civil en un proceso de colaboración eficaz, es aquí donde se tiene que analizar si esta es determinada correctamente, para que no haya dificultad al momento de asumir el pago.

¿LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL SE AJUSTA A LOS LÍMITES LEGALES?

En cuanto a la cuantificación de la reparación civil existe una controversia, por una parte, se dice que los órganos jurisdiccionales no están capacitados para realizar una fórmula que arribe a sacar montos exactos por reparación, generando una desconfianza por parte del sujeto que será obligado a cumplir con dicho pago.

Por otro lado, se dice que los jueces en aplicación al principio de proporcionalidad y legalidad fijan una reparación civil valorando en cada caso en concreto los daños ocasionados, por lo que su función se realiza al margen de estos principios.

Lo cierto es que la reparación civil en muchos casos no se ajusta a la realidad, debido a que no siempre se determina conforme a los parámetros de los mencionados principios, pues no es debidamente cuantificada y menos justamente distribuida entre los imputados; al existir la característica solidaria, pues en ocasiones se determina subjetivamente una cuantificación del monto reparador, produciendo en el sujeto una inseguridad jurídica al momento de someterse a la figura de colaboración eficaz, pues en ocasiones carece de motivación, es decir no logran explicar en base a qué resultados justifican el monto de reparación.

¿EL INCUMPLIMIENTO DE LA REPARACION CIVIL PRODUCE UNA SANCIÓN PENAL?

El que la responsabilidad civil ostente el carácter represivo de la pena, no quiere decir que sea porque se lleva a cabo dentro de un proceso penal, sino porque la sanción económica también logra de una u otra manera cumplir la función represiva del mismo control social.

En ese sentido la reparación civil en ciertos casos como en la colaboración eficaz es impuesta como una obligación, la cual debe efectuarse a condición de obtener los beneficios, entonces al no cumplirse con dicha reparación civil ocasionaría que el beneficio de reducción o eximición de la pena sea revertido terminando por imponerse la pena que originalmente le toca asumir, diciéndose entonces que el incumplimiento de la reparación civil si produce una sanción penal, que es la que inicialmente fue impuesta y que le toca asumir.

TOMA DE POSTURA:

Habiendo llegado a comprender la teoría de la responsabilidad penal como base del resarcimiento, resulta innegable la necesidad de que la norma regule de manera precisa ciertos aspectos de la colaboración eficaz en el extremo de la reparación civil como sustento para los problemas suscitados, pues como se ha visto la responsabilidad civil impuesta en un proceso penal es generadora de consecuencias represivas al igual que la pena, por lo que en un proceso penal se impone una sanción penal a cada sujeto involucrado de acuerdo a su grado de intervención, y una sanción civil de acuerdo al daño general producido.

Por tal situación la cuantificación de la reparación civil en un proceso por colaboración eficaz no es atribuida de forma proporcional al grado de intervención de cada sujeto, sino es atribuida de forma genérica, en efecto no individualiza a las personas responsables con el daño que causó su conducta, solo existe una sanción penal a cada involucrado en el hecho delictivo, pero no una reparación civil exigible según el grado de intervención, en el caso concreto de la colaborador eficaz se tendrá que cancelar la reparación civil en su totalidad lo cual genera un perjuicio al momento de obtener un beneficio, pues al no poder cumplir con la totalidad de la reparación civil terminara por desistir de someterse a la colaboración eficaz.

Por lo tanto, al resultar la reparación civil ser de gran importancia al momento de obtener los beneficios, surge la necesidad de mejorar la norma jurídica, con la finalidad de que la reparación civil no resulte siendo un obstáculo para obtención de beneficios que brinda la colaboración eficaz.

6.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la solidaridad en el pago de la reparación civil en el proceso penal.”

¿LA REGLA DE LA SOLIDARIDAD CUMPLE CON EL FIN DE PROTEGER EL DERECHO DE LA VÍCTIMA?

Si bien es cierto que la solidaridad en la reparación civil sirve para garantizar el derecho de la víctima, en el proceso penal la reparación civil, lejos de garantizar a la víctima el resarcimiento del perjuicio causado, llega a generar una complicación, pues al momento de hacer frente la reparación civil, evidencia un proteccionismo hacia la víctima y una ausencia de mención de la manera en la que se asumiría la reparación civil sobre todo en casos de colaboración eficaz, donde la información que se brinde será de suma importancia para dar con criminales que no pueden ser castigados, de este modo resulta de gran importancia cumplir con reparar el daño para la obtención de beneficios premiales.

En tal sentido la solidaridad de la reparación civil puede si brindar protección a la víctima, pero a la vez genera una desconfianza en las personas que asumirán el pago de dicha reparación, ya que no existe un parámetro que deben cumplir para reparar el daño causado según su intervención.

¿LA REPARACION CIVIL ES UN OBSTÁCULO PARA SOMETERSE A LA COLABORACIÓN EFICAZ?

En los últimos años la colaboración eficaz representa una herramienta poderosísima en la lucha contra la corrupción e impunidad, pues ha servido de gran ayuda a la justicia penal y a la vez ha sido generadora de ciertos beneficios en cuanto a la pena de aquel sujeto arrepentido.

Tal herramienta por su particular procedimiento ha generado incertidumbre en el agente colaborador, esto en cuanto al pago de la reparación civil, la cual resulta siendo una de las obligaciones que tiene que cumplir el colaborador para poder obtener el beneficio negociado. es decir, de darse el incumplimiento del total de la reparación civil la sanción penal inicial que fue disminuida o exenta se hará efectiva, puesto que el incumplimiento de la reparación civil no producirá una sanción penal nueva pero sí hará efectiva la pena que inicialmente le toca afrontar.

En tal sentido el colaborador eficaz al momento de cumplir con la reparación civil, se ve condicionado ante el obstáculo del pago íntegro de la misma, pues al ser impuesta solidariamente entre los responsables del hecho punible, acarrea que su responsabilidad no este individualizada y por ende en ocasiones llegue a ser ilimitada e impagable, ante esta situación es que el colaborador renuncia a ayudar con la justicia.

¿SE PUEDE ESTABLECER EL DERECHO A REPETIR EN UN PROCESO PENAL?

Si bien la reparación civil se rige por las reglas del código civil, esto no es fundamento para que el derecho a repetir se tenga que solicitar en el mismo proceso penal, ya que este (la repetición) es un proceso distinto, que surge a raíz del incumplimiento de una obligación.

Por lo tanto, la necesidad de hacer valer el derecho de repetir tendrá que solicitarse en la vía civil respectiva, lo cual genera en el imputado una mayor desconfianza a no ver su derecho de reclamar salvaguardado, pues tendrá que acudir a otra vía judicial para poder solicitar el cumplimiento de la obligación que quedo impaga por

parte de los demás imputados, de lo cual aún existe la duda si estos estarán dispuestos a cumplir con dicha obligación.

¿SE PODRA ESTABLECER UN MONTO REPARATORIO AL COLABORADOR EFICAZ DE ACUERDO A SU GRADO DE INTERVENCIÓN?

Como se ha estudiado los casos objeto de análisis son aquellos en los que se evidencia una pluralidad de sujetos involucrados, teniéndose que a los sujetos implicados se les impondrá una sanción penal de acuerdo a su intervención en el hecho delictivo, además se les impondrá una reparación civil la cual tendrá que ser asumida por todos los involucrados en el hecho delictivo, en ese sentido al existir más de dos sujetos responsables de un hecho punible la reparación civil es solidaria entre estos, pero sucede que en los procesos por colaboración eficaz el cumplimiento de la reparación civil es un requisito indispensable para la obtención de los beneficios premiales, en ese sentido la reparación civil que se imponga tiene que determinarse proporcionalmente en cuanto a la participación del colaborador eficaz.

Cómo bien se puede imponer una pena de acuerdo a la intervención de cada sujeto también resulta viable que se pueda llegar a tomar en cuenta en los casos por colaboración eficaz las contribuciones de este, siendo distribuida (dividida) el pago en cuotas o porcentajes proporcionales, de acuerdo al grado de intervención, implicando que tenga que asumir un determinado monto por reparación civil, el cual le sea directamente exigible en relación a su participación,

¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN UN PROCESO PENAL?

Es de gran importancia lograr que la reparación civil logre su cometido, es decir llegue a reparar el daño causado a la víctima, por ello como se sabe existe norma que establece las reglas de la reparación civil, resultando ser la solidaridad la que genera la controversia al no identificar el monto de reparación civil de acuerdo al aporte de cada uno de los intervinientes, por lo que solo se sabe que es solidaria entre los responsables del hecho delictivo, por ende, la solidaridad del monto fijado se impone sobre un monto propio. Es de entender que el monto es único y total, cuyo íntegro será pagado de manera solidaria entre los responsables, cancelándolo solo uno, dos o todos los imputados,

De esta manera se protege el interés particular de la víctima, facilitando la posibilidad de dirigir la acción contra quien mejor le parezca o considere más fácil, es así que se llega a brindar un proteccionismo a la actividad particular, lo cual puede generar una disconformidad entre los sujetos que están inmersos en el mismo delito ya que no saben en qué proporción responderán por su actuar delictivo, más aun al tratarse de un proceso por colaboración eficaz ya que aquí está de por medio la obtención de un beneficio premial, el cual queda condicionado al cumplimiento del íntegro de la reparación civil.

¿LA REPRACION CIVIL ES DETERMINADA INDEPENDIENTEMENTE A LA CONFORMIDAD PROCESAL?

Como se sabe la reparación civil es determinada de forma determinada al daño ocasionado por lo tanto no puede ser impuesta indistintamente dentro del proceso

que la abarque, al respecto también se puede apreciar que, el que uno o más de los imputados decida conformarse no genera que tenga que emitirse una nueva o distinta reparación civil, ya que esta es calculada de forma general y única, por lo que esta no solo comprenderá a los imputados que se sometan a la conformidad sino también a aquellos que en juicio sucesivo se emita condena, por lo que tal suma no variaría y sólo les comprenderá en su pago.

De ese modo la sentencia que se emita en juicio tendrá por reparación civil la misma que se determinó en la sentencia conformada, siempre que en el juicio contradictorio la determinación del monto se pueda variar solo en virtud de la prueba actuada, este sustento es el que se pone como base para poder imponer una reparación civil específica a aquel que se sometió a la colaboración eficaz.

¿CORRESPONDERÁ IMPONER CONSECUENCIAS JURÍDICO CIVILES SI SE DA LA ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO?

Como se puede apreciar en la información recabada se evidencia que existen fundamentos legales que permite a los órganos jurídicos imponer una reparación civil aun cuando se haya dado la absolución del imputado, esto en aras de justicia hacia la víctima que sufrió un menoscabo patrimonial, pues independientemente de que se haya configurado o no el delito existe una lesión del bien jurídico, al cual por principio de economía procesal se da solución, resultando imponer una reparación civil en el proceso penal iniciado.

Por esta razón independientemente que el sujeto haya sido encontrado culpable o no del delito imputado, este sujeto quedara obligado a reparar el daño que causó su conducta dañosa, ya que resulta ser necesaria porque brinda cierta satisfacción a la

víctima y a la vez porque produce que de una u otra manera la prevención y la represión del delito, satisfaciendo los fines del estado.

TOMA DE POTURA

Habiendo alcanzado comprender la solidaridad en el pago de la reparación civil en el proceso penal, se tiene claro que la regla de la solidaridad cumple con el fin de proteger la víctima, también que la reparación civil impuesta como una obligación genera desconfianza en el sujeto que desea colaborar con la justicia, pues ante el incumplimiento del total de la reparación civil se producirá la sanción penal que corresponda, no llegando a surtir efectos la disminución o exención de la pena que ofrece como beneficio la colaboración eficaz.

Ante esta situación se ve la necesidad de realizar una correcta y justa distribución de la reparación civil, debiendo ser impuesta de manera equitativa entre los responsables del hecho punible, de ahí que se pueda establecer un monto indemnizatorio al colaborador eficaz de acuerdo a su grado de intervención, para que así no resulte siendo un obstáculo para la efectiva aplicación de la colaboración eficaz y a la vez la víctima sea reparado en ese extremo.

Si bien el colaborador tiene libre su derecho a solicitar la repetición, esto no es suficiente, pues tendrá que recurrir a la otra vía en un nuevo proceso civil lo cual le genera cierta improbabilidad de obtener lo cubierto como pago, ya que no se sabe cuántos llegaran a juicio y sobre todo si estos estando condenados a pena efectiva terminen por pagar lo que les corresponde por reparación civil.

En consecuencia, la reparación civil impuesta como obligación ha generado que se no se logren los efectos esperados en un proceso por colaboración eficaz, por tal motivo resulta necesario establecer en esta figura una distribución parcial del monto resarcitorio entre los intervinientes del hecho punible, ya que es en función a una parte determinable que le corresponde hacerse responsable al sujeto que se sometió a la colaboración eficaz.

6.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de modificar la regla de colaboración eficaz a fin de evitar injustos respecto de la determinación del pago de la reparación civil.”

De la información requerida a la corte superior de justicia de Lambayeque, se pudo obtener los expedientes según el estado en cada juzgado penal, de los cuales los delitos que presentan en los cuadros remitidos son solo por: secuestro, trata de personas, extorción, participación de funcionario público en delitos contra los bienes culturales, producción desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas, micro comercialización o micro producción, malversación de fondos, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo,

Por otro lado, de la información requerida al Ministerio Público se obtuvo los cuadros referentes a las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios y crimen organizado, donde se observa cierta falta de información, respecto a cantidad específica de los casos en los que se haya aplicado la colaboración eficaz, por ende, no es factible emitir opinión al respecto.

De la información brindada, se ha obteniendo los siguientes resultados; la primera información desarrollada ha sido la brindada por la oficina de estadística de la Corte

Superior de Justicia de Lambayeque, de la cual se evidencia que existen características resaltantes en función a los niveles de incidencias en Delitos Contra la Administración Pública apreciándose un índice elevado durante el año 2018, luego se analizó la información brindada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de la ciudad de Chiclayo, la cual ha sido analizada comparativamente llegando a decir que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios es la que presenta una mayor cantidad de casos ingresados.

Entonces se tiene que los delitos que presentan un mayor número de incidencias son los Delitos de Corrupción de Funcionarios, en ese sentido, se puede decir que, sobre la colaboración eficaz queda claro que es aplicada en delitos con pluralidad de agentes, por lo que resulta claro que la información brindada arroja que hay una gran cantidad de casos ingresados por estos delitos, motivo por el cual la colaboración eficaz resulta siendo una herramienta muy útil en esta clase de delitos por lo que tendrá que surtir sus efectos.

Después de ello se ha llegado a analizar la opinión de los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo la misma que ha sido recogida a través de una encuesta, la cual ha constituido un factor de gran importancia, logrando obtener respecto a todas las interrogantes planteadas una aceptación mayoritaria, dejando ver que el problema planteado si tiene sustento en la casuística jurídica.

Luego, se analizó la Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03588-2011-PHC/TC ICA, la cual presenta ciertos puntos relacionados con el tema de investigación, concluyendo que dicha sentencia deja clara la idea de la necesidad que existe de individualizar las contribuciones del daño causado, pues ante la falta

de motivación en ese extremo, ocasiona que el sujeto imputado desconozca el carácter solidario de la reparación civil y considere que le corresponde asumir una parte determinada de la misma, ocasionándole un grave perjuicio al momento de obtener algún beneficio.

Finalmente se buscó la forma de acceder a los acuerdos y sentencias por colaboración eficaz, presentando dificultades ya que dicho proceso es de carácter reservado, no pudiendo obtener la información para llegar analizarla, por lo cual se tuvo que recurrir a buscar la opinión de quien está inmerso en estos temas en el día a día, siendo así que se logró conseguir la opinión del señor Fiscal José Luis Constantino Espino de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a quien a través de un cuestionario se le hizo la consulta sobre la problemática planteada.

De la información obtenida, se puede decir que evidentemente existe la ausencia de una distribución específica de la reparación civil en los procesos por colaboración eficaz, pues aunque el juez en ocasiones considere que la reparación civil quede reservada su ejecución hasta que se emita la sentencia final contra los demás imputados, ello no garantiza que sea dispuesta de igual forma por demás órganos judiciales ya que no se encuentra especificado en la norma, lo cual hace que haya criterios diferenciados en este aspecto.

6.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual

será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

6.2.1. Respecto a la Variable independiente: Los beneficios otorgados al colaborador eficaz

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable se ha de comprender que su finalidad es verificar los beneficios otorgados al colaborador eficaz, de lo cual se asume que la introducción de la figura se sustenta jurídicamente en el Derecho Premial, el cual surge con la finalidad de combatir las nuevas formas de criminalidad, motivo por el cual resulta inevitable la existencia de norma expresa que establezca beneficios como la atenuación y exención de la pena con la que se logra incentivar al sujeto que participe en la comisión de un delito para que colabore con la justicia.

En ese sentido los beneficios que se brindan al colaborador se realiza en concordancia con el principio de proporcionalidad y legalidad, de manera que se otorgan beneficios según al grado de colaboración que se brinda, lo cual permite disminuir la pena concreta en un determinado nivel a las penas previstas para los delitos perseguidos

Por otro lado de la información obtenida por las entidades jurídicas se ha llegado a concluir que los delitos que presentan un mayor número de incidencias son los Delitos de Corrupción de Funcionarios, en tal sentido sobre la colaboración eficaz se puede decir que es aplicada en delitos con pluralidad de sujetos por lo que es evidente la necesidad de verificar que la figura surta sus efectos en esta clase de delitos, dejado claro que el problema planteado tiene sustento en la casuística jurídica al tener una aceptación mayoritaria de cada una de las afirmaciones diseñadas.

Del análisis jurisprudencial EXP. N° 03588-2011-PHC/TC ICA, se concluye que dicha sentencia deja la idea de la necesidad que existe de individualizar las contribuciones del daño causado, pues ante la falta de motivación en ese extremo ocasiona que el sujeto imputado desconozca el carácter solidario de la reparación civil y considere que le corresponde asumir una parte determinada de la misma, ocasionándole un grave perjuicio al momento de obtener un beneficio.

Sobre la encuesta planteada del Fiscal Anticorrupción se concluye que existe la necesidad de distribuir la reparación civil en un proceso de colaboración eficaz, pues el hecho de que en ocasiones el órgano judicial decida reservar la ejecución de la reparación civil hasta la emisión del fallo final, ello no garantiza que los demás órganos judiciales resuelvan de la misma manera pues no existe norma expresa que así lo regule, por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

Los beneficios otorgados al colaborador eficaz no se efectúan por estar condicionados al cumplimiento total de la reparación civil.

6.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La teoría de la
responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el
proceso penal.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado, en la validación anterior se tiene que es evidente que existe la necesidad de regular de forma precisa ciertos aspectos fundamentales de la colaboración eficaz en el extremo de la reparación civil, pues como se ha visto la responsabilidad civil impuesta en un proceso penal es generadora de consecuencias represivas al igual que la pena, puesto que la responsabilidad penal es atribuida a de acuerdo al grado de intervención y la responsabilidad civil es impuesta de acuerdo al daño general producido, generando cierta incertidumbre respecto a quienes y que proporción asumirán la reparación civil del daño producido.

Por tal situación la cuantificación de la reparación civil en un proceso por colaboración eficaz no evidencia que sea determinada, no individualiza a las personas responsables con el daño que causó su conducta, a pesar de que ello ocasiona que el sujeto que desea colaborar con la justicia decida no brindar la información que posee, pues al comprender que la reparación civil será una de las obligaciones que ha de asumirse en su totalidad, le produce la inseguridad de lograr obtener el beneficio prometido.

El obstáculo que se presenta es producto del carácter solidario de la reparación civil, que como se sabe por dicha regla los responsables del hecho punibles responden solidariamente ante los daños causados, es decir bien pueden responder todos o solo uno, ello con el fin de proteger a la víctima, pero también es cierto que debido a ello se producen efectos negativos en cuanto a la eficacia de colaboración eficaz, pues al ser impuesta como una de las obligaciones que ha de cumplir el colaborador para poder obtener el beneficio acordado le genera desconfianza porque ante su incumplimiento el beneficio obtenido puede ser revocado efectuándose la sanción penal que inicialmente le corresponde afrontar, no llegando a surtir efectos la disminución o exención de la pena que ofrece como beneficio la colaboración eficaz.

Por tal motivo resulta necesario establecer en esta figura una distribución parcial del monto resarcitorio entre los intervinientes del hecho punible, ya que es en función a una parte determinable que le corresponde hacerse responsable al sujeto que se sometió a la colaboración eficaz, por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La teoría de la responsabilidad solidaria resulta siendo imprecisa al establecer el pago de la reparación civil en el proceso penal, porque no señala una cuantificación autónoma en función al sujeto imputado.

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación

de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

Los beneficios otorgados al colaborador eficaz no se efectúan por estar condicionado al cumplimiento total de la reparación civil; puesto que, la teoría de la responsabilidad solidaria resulta siendo imprecisa al establecer el pago de la reparación civil en el proceso penal, porque no señala una cuantificación autónoma en función al sujeto imputado.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si. los beneficios otorgados al colaborador eficaz, no especifican el nivel de responsabilidad y la cuantía del pago de la reparación; entonces, esto surtirá un efecto negativo sobre la aplicación de la teoría de la responsabilidad solidaria en el pago de la reparación civil en el proceso penal, por lo que debe incorporarse la puntualización en la regla.	Los beneficios otorgados al colaborador eficaz no se efectúan por estar condicionado al cumplimiento total de la reparación civil; puesto que, la teoría de la responsabilidad solidaria resulta siendo imprecisa al establecer el pago de la reparación civil en el proceso penal, porque no señala una cuantificación autónoma en función al sujeto imputado.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento

inicial, dando por sentado que los beneficios que otorga la colaboración eficaz están condicionados al cumplimiento del pago total de la reparación civil, la cual, por ser solidaria entre los responsables del daño producido genera que el sujeto que se somete a dicha figura no tenga claro en qué proporción deberá cumplir su responsabilidad, resultando perjudicado al momento de asumir su obligación, ello en atención a que su responsabilidad no es determinada específicamente respecto del daño que causó su conducta, por ende, se ve la necesidad de realizar una distribución específica de la reparación civil respecto al grado de intervención del colaborador eficaz en el hecho punible.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se ha podido concluir en razón al desarrollo doctrinario de la figura jurídica de colaboración eficaz y los beneficios que surgen de su aplicación, que se sustenta jurídicamente en el Derecho Premial, el cual surge con la finalidad de combatir las nuevas formas de criminalidad, por tal motivo resulta inevitable la existencia de norma expresa que establezca beneficios como la atenuación y exención de la pena.

SEGUNDA

Se ha llegado a concluir en razón a la descripción de la teoría de la responsabilidad penal como base del resarcimiento, que cada sujeto implicado en un hecho punible es responsable penalmente de acuerdo a su grado de intervención y es responsable civilmente de acuerdo al daño general producido, puesto que la responsabilidad civil no individualiza el perjuicio que causó la conducta de cada sujeto responsable

TERCERA

Se ha llegado a concluir en razón al estudio de la solidaridad en el pago de la reparación civil en el proceso penal, que la reparación civil es impuesta solidariamente entre los responsables del daño producido, lo cual provoca que ante su incumplimiento no surta efectos los beneficios que brinda la colaboración eficaz.

CUARTA

Se ha podido concluir en razón al análisis de la necesidad de modificar la regla de colaboración eficaz a fin de evitar injustos respecto de la determinación del pago

de la reparación civil que, la colaboración eficaz es muy útil para el sustento de la investigación en los delitos con pluralidad de agentes, resultando necesario individualizar las contribuciones del daño causado por el delito.

RECOMENDACIONES

PRIMERA

Se recomienda a los órganos judiciales dar un trato especial a la regla de la solidaridad de la reparación civil en el proceso penal, puesto que resulta de suma importancia para una correcta y justa aplicación de la figura de colaboración eficaz ya que al tratarse de un proceso especial la regla también merece un trato especial en este extremo.

SEGUNDA

Se recomienda que mediante acuerdo plenario se establezca un criterio uniforme en cuanto al cumplimiento de la reparación civil en un proceso por colaboración eficaz, quedando suspendida su ejecución hasta la emisión del fallo final en el cual terminaran siendo identificados todos los responsables del delito.

TERCERA

Se recomienda hacer una incorporación en el artículo 479 numeral 2 inciso C del Código Procesal Penal, de la siguiente manera

Artículo 479: La concesión del beneficio premial está condicionado a que el beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro de los diez (10) años de habersele otorgado. Asimismo, conlleva la imposición de una o varias obligaciones, sin perjuicio de disponer que el beneficiado se obligue especialmente a concurrir a toda citación derivada de los hechos materia del Acuerdo de Colaboración aprobado judicialmente.

2. Las obligaciones son las siguientes

(...)

c) Reparar los daños ocasionados por el delito, **imponiéndose un monto específico a aquel que decide someterse a la colaboración eficaz**, salvo imposibilidad económica.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarez Echagüe, J. M. (2014). El Estado de Inocencia y la Garantía de la no Autoincriminación en Materia Tributaria. *Derecho y Sociedad*(43), 281-297. Recuperado el 29 de Agosto de 2019, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/12576/13134>
- Campos Díaz Barriga, M. (2000). CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD . En M. Campos Díaz Barriga, *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente: el caso del agua en México* (págs. 19-28). mexico: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado el 02 de Setiembre de 2019, de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3496-la-responsabilidad-civil-por-danos-al-medio-ambiente-el-caso-del-agua-en-mexico>
- Caso Alberto Espinoza Vásquez contra Manuel Roberto Hernández Quiroz y Rosa Quiroz Zelada, EXP. N.º 02826-2011-PHC/TC CAJAMARCA (Primera Sala del Tribunal Cconstitucional 28 de Setiembre de 2011). Recuperado el 17 de Setiembre de 2019, de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02826-2011-HC.html>
- Caso Emilio Pedro Cuadros Hernández contra Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica, Recurso de Agravio Constitucional N° 03588-2011-PHC/TC ICA (Sala Primera del Tribunal Constitucional 31 de Enero de 2012).
- Castaño Vallejo, R. (2013). El sistema penal acusatorio en Colombia y el modelo de derecho penal premial. Análisis de las sentencias 36.502 de 2011 y

38.285 de 2012 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C-645 de 2012 de la Corte Constitucional. *Revista Nuevo Foro Penal*, 9(80), 165-185. Recuperado el 18 de julio de 2019, de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-ElSistemaPenalAcusatorioEnColombiaYElModeloDeDerec-5235144.pdf

Castillo Alva, J. L., & Asencio Mellado, J. M. (2018). *La Colaboración Eficaz en el Derecho Peruano*. lima: Ideas Solución. Recuperado el 11 de julio de 2019

CICIG-Comision Internacional contra la Impunidad de Guatemala. (20 de Junio de 2009). Obtenido de CICIG- Comision Internacional contra la Impunidad de Guatemala: <https://www.cicig.org/noticias-2009/pentiti-o-colaborador-eficaz/#respond>

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. (6 de Diciembre de 2011). ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116. Lima. Recuperado el 23 de Septiembre de 2019, de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b0f8f0804a1e47aca30eeb91cb0ca5a5/ACUERDO+PLENARIO+N°+5-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0f8f0804a1e47aca30eeb91cb0ca5a5>

Cruz Castro , F. (2016 de Noviembre de 2011). LA VIOLENCIA DEL DERECHO PENAL. REPRESIÓN PUNITIVA, DISCRIMINACIÓN Y LA POSTERGACIÓN DEL ESTADO SOCIAL. *Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales*(3), 688-719. Recuperado el 3 de Septiembre de 2019, de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12435>

De La Jara, E. (Febrero de 2017). *Ideele*. Obtenido de Colaboración eficaz sí, excesos no: <https://revistaideele.com/ideele/content/colaboraci%C3%B3n-eficaz-s%C3%AD-excesos-no>

Del Rio Labarthe, G. (2010). La acción civil en el Nuevo Proceso Penal. *REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO PUCP*(65), 221-233. Recuperado el 4 de Septiembre de 2019

Franco Apaza, P. D. (14 de 85 de 2008). *Derecho & Sociedad, Asociacion Civil*. Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de Derecho & Sociedad, Asociacion Civil: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/08/14/alcances-sobre-la-reparacion-civil-en-nuestro-codigo-penal/>

García Caverro, P. (2012). *"Derecho Penal- Parte General"* (2º ed.). Lima: Jurista Editores E.I.R.L.

García Mercadal, F., & Loygorri, G. (23 de Noviembre de 1985). DERECHO PREMIAL y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA:PROPUESTAS PARA UN DEBATE. *EMBLEMATA*, 203-222. Recuperado el 23 de junio de 2019, de <https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/17/19/11garciamercadal.pdf>

Gaviria Londoño, V. E. (2005). Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal. *Derecho Penal y Criminologia*, 26(78), 25-52. Recuperado el 22 de Agosto de 2019, de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1013>

Gil Gimeno, C. (Julio de 2017). Justicia penal negociada. El valor de la delación. *Otrosi, Revista del Colegio de Abogados de Madrid*.(14), 72. Recuperado

el 14 de Agosto de 2019, de <https://www.otrosi.net/hemeroteca/numero-14-2017-6a-epoca>

Guillermo Bringas, L. (2009). Aspectos fundamentales del resarcimiento economico del daño causado por el delito. *Revista Electrónica de del Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias Penales y Criminología*, 23. Recuperado el 03 de Septiembre de 2019, de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4D85B6E06C0144305257E7C00627CD5/\\$FILE/Ilecip_Rev_004-02.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4D85B6E06C0144305257E7C00627CD5/$FILE/Ilecip_Rev_004-02.pdf)

Hurtado Pozo, J. (1987). *MANUAL DE DERECHO PENAL* (Segunda ed.). Lima: EDDILI. Recuperado el 13 de Agosto de 2019

Hurtado Pozo, J. (2014). *Ministerio Publico y Derecho Penal* (1 ed.). Fondo Editorial Pontificia Univercidad Católica del Perú. Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de <http://perso.unifr.ch/derechopenal/anuario/autores#G>

Instituto de Defensa IDEELE. (2017). *IDEELE*. Obtenido de Esto es la colaboracion eficaz en el Perú: <https://revistaideele.com/ideele/sites/default/files/archivos/colaboracion%20eficaz506.pdf>

IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES. (18 de Julio de 2008). ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116. Lima, Perú. Recuperado el 19 de Septiembre de 2019, de <http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/euj2010/17.pdf>

- Lara Chagoyán, R. (2001). Sobre la Función Promocional del Derecho. *Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*(31), 553-577. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/issue/view/653>
- Lopez Granda, W. F. (marzo de 2018). PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ. *Revista Jurídica del Instituto Peruano de Estudios Forenses*(77), 71-88. Recuperado el 5 de Septiembre de 2019, de <http://www.librejur.info/index.php/revistajuridica/article/view/22>
- Lovón Sánchez, J. A. (2015). *LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES*. Arequipa: ADRUS D&L EDITORES S.A.C.
- Mannozi, G. (2009). COMBATIR A LA CORRUPCIÓN. UN RECORRIDO ENTRE CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PENAL. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*(125), 931-955. Recuperado el 23 de julio de 2019, de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/4127/5338>
- Morales Hervias, R. (2015). ¿QUÉ JUZGADO DEBE SER EL COMPETENTE (EN RAZÓN DE MATERIA) CUANDO SE INVOLUCRA A UN TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE? *Themis 68, Revista de Derecho PUCP*(68), 217-266. Recuperado el 14 de Septiembre de 2019, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/index/search/search>
- Mori León1, J. (22 de Enero de 2014). El derecho de resarcimiento del daño sufrido por las víctimas de delitos y el Código Procesal Penal Peruano. *Revista Peruana de Ciencias Penales*(6), 96-102. Recuperado el 16 de Septiembre

de 2019, de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/514-1076-1-PB%20(1).pdf

Musco, E. (1998). Los colaboradores de la justicia entre el pentitismo¹ y la calumnia: Problemas y perspectivas. *Revista Penal*, 35-47. Recuperado el 25 de Julio de 2019, de <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/13226/Colaboradores.pdf?sequence=4>

Ortiz Pradillo , J. C. (2016). RESENTE Y FUTURO DE LA DELACIÓN EN EL PROCESO PENAL. (pág. 37). Madrid: Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado el 16 de julio de 2019, de <https://docplayer.es/67259720-Presente-y-futuro-de-la-delacion-en-el-proceso-penal-1-juan-carlos-ortiz-pradillo-profesor-de-derecho-procesal-uclm.html>

Pasco Arauco, A. (Enero de 2010). La actuación de los cómplices e instigadores en el ámbito de la responsabilidad civil. Cómo responden y como deberían responder. A propósito de la pretendida prevalencia de la función reparatoria sobre la función preventiva de la responsabilidad civil. *bepress*, 24. Recuperado el Septiembre de 22 de 2019, de https://works.bepress.com/alan_pasco/19/

Peña Cabrera Freyre, A. R. (20 de Mayo de 2014). La Naturalez Juridica «Civil» de la Reparacion Civil en la Via Criminal y su Insostenible Carácter Accesorio en el Proceso Penal. *Blog de Javier Jimenez Vivas "El Ser humano y Sociedad a Través del Derecho"*, 13. Recuperado el 18 de Septiembre de 2019, de <https://javierjimenezperu.wordpress.com/2014/05/20/la-naturaleza->

juridica-civil-de-la-reparacion-civil-en-la-via-criminal-y-su-insostenible-
caracter-accesorio-en-el-proceso-penal-por-alonso-pena-cabrera-freyre/

Pérez López, J. (2009). El derecho a la no autoincriminación y sus expresiones en el derecho procesal penal. *Derecho y Cambio Social*(17). Recuperado el 29 de Agosto de 2019, de <http://www.derechoycambiosocial.com/revista017/autoincriminacion.htm>

Reátegui Sánchez , J. (2016). *RATADO DE DERECHO PENAL - Parte General*. Lima: Ediciones Legales. Recuperado el 22 de Septiembre de 2019

Rodriguez Delgado , J. (1998). La reparación como sanción jurídico-penal. *Ius et Veritas*(17), 28-44. Recuperado el 5 de Septiembre de 2019, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/search/search?simpleQuery_input=La+reparaci%C3%B3n+como+sanci%C3%B3n+jur%C3%ADdico-penal&simpleQuery=La+reparaci%C3%B3n+como+sanci%C3%B3n+jur%C3%ADdico-penal&searchField=query

Rojas López, F. (2012). Alcances y Cuestiones Generales del Procedimiento Especial de Colaboración Eficaz en el Nuevo Código Procesal Penal. *Derecho & Sociedad*(39), 52-60. Recuperado el 31 de mayo de 2019, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/search/search?query_input=Freddy+Rojas+L%C3%B3pez&query=Freddy+Rojas+L%C3%B3pez&authors_input=&authors=&title_input=&title=&abstract_input=&abstract=&galleyFullText_input=&galleyFullText=&suppFiles_in

Roxin, C. (1997). *"Derecho Penal - Parte General"* (2° ed.). (D. M. LUZÓN PEÑA, M. D. GARCÍA CONLLEDO, & J. DE VICENTE REMESAL, Trads.) Madrid: CIVITAS S.A.

Rusconi, M. (Diciembre de 2018). Arrepentidos y justicia penal: ¿nuevas formas de combatir la criminalidad organizada o la Inquisición del nuevo milenio? *Pensar en Derecho*(13), 9-18. Recuperado el 23 de Julio de 2019, de <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/13/arrepentidos-y-justicia-penal.pdf>

San Martín Castro, C. (2015). *DERECHO PROCESAL PENAL lecciones*. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Recuperado el 12 de Agosto de 2019

Sánchez García de Paz, I. (2005). EL COIMPUTADO QUE COLABORA CON LA JUSTICIA PENAL. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*(7), 33. Recuperado el 18 de Julio de 2019, de <http://criminnet.ugr.es/recpc/07/recpc07-05.pdf>

Sanchez Velarde, P. (2004). CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y PROCEDIMIENTO PENAL: LA COLABORACIÓN EFICAZ. En J. Hurtado Pozo, & C. San Martín Castro, *Anuario de Derecho Penal 2004* (Primera ed., págs. 237-257). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 12 de agosto de 2019, de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2004_12.pdf

Sánchez Velarde, P. (Diciembre de 2011). La colaboración eficaz en el nuevo Código Procesal Penal. *Revista Jurídica Del Consejo de Defensa Del*

Estado(1), 306. Recuperado el 12 de agosto de 2019, de <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/Revista-CDJE-2011-Interiores.pdf>

Sandoval Garrido, D. A. (Diciembre de 2013). Reparación integral y responsabilidad civil: El concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. *Revista de Derecho Privado*(25), 237-273. Recuperado el 4 de Septiembre de 2019, de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3602>

Semanario Expresión. (Marzo de 2019). *Semanario Expresión Edición N° 1106*, 1106. Recuperado el 04 de Septiembre de 2019, de CÉSAR SAN MARTÍN SOBRE ACUERDO CON ODEBRECHT: “LA FÓRMULA DE LA REPARACIÓN CIVIL ES SOLO ENTENDIBLE POR ECONOMISTAS”: <http://www.semanarioexpresion.com/Presentacion/noticia2.php?noticia=1596&categoria=Columnas&edicionbuscada=1106>

Soledad Quispe Farfán, F. (2018). La colaboración eficaz en el Perú. *Actualidad Penal*(34), 14. Recuperado el 23 de Julio de 2019, de https://www.researchgate.net/publication/325127323_Colaboracion_eficaz_en_el_Peru

Suarez Hernández, S. (2015). *"Imputabilidad y Responsabilidad Penal de los Adolescentes"- Una aproximación a su tratamiento en Colombia y en el derecho comparado*. Tesis para obtener el título de Abogada, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano , Bogotá. Obtenido de

<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/01/doctrina44795.pdf>

Taboada Córdova, L. (03 de agosto de 2009). *Jurisprudencia de Derecho Civil (perú)*. Recuperado el 31 de Agosto de 2019, de Jurisprudencia de Derecho Civil (perú): <http://jurisprudenciadederechocivilper.blogspot.com/2009/08/elementos-de-la-responsabilidad-civil.html>

Taboada Pilco, G. (19 de Diciembre de 2018). *Legis.pe*. Recuperado el 19 de Septiembre de 2019, de Legis.pe: <https://legis.pe/comentarios-ii-pleno-jurisdiccional-nacional-penal-especializado-delitos-corrupcion-funcionarios-2018/>

Talavera Elguera, P. (2009). *LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal* (Primera ed.). Lima: Academia de la Magistratura – AMAG. Recuperado el 25 de Julio de 2019, de http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/122/la_prueba_nuev_proc_penal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vidal Ramírez, F. (2001). La Responsabilidad Civil. *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*(54), 389-399. Recuperado el 31 de Agosto de 2019, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5084757>

Villavicencio Terreros, F. (2009). *"Derecho Penal - Parte General"* (1° ed.). Lima: Grijley E.I.R.L.

Villegas Paiva, E. (2013). *El agraviado y la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal* (Primera ed.). Lima: Gaceta Jurídica. Recuperado el

12 de Septiembre de 2019, de

https://www.academia.edu/25501007/EL_AGRAVIADO_Y_LA_REPAR

ACI%C3%93N_CIVIL

ANEXOS

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

“LOS BENEFICIOS OTORGADOS AL COLABORADOR EFICAZ Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

Los beneficios otorgados al colaborador eficaz y la teoría de responsabilidad solidaria en la reparación civil en el proceso penal

1. Los Beneficios Otorgados al Colaborador Eficaz son ventajas en cuanto a la pena que puede obtener el sentenciado o procesado que se haya disociado de la actividad criminal a cambio de brindar

información útil, relevante y corroborable sobre los hechos delictivos cometidos por una organización criminal.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

2. La regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz, por no llegar a surtir efectos positivos en cuanto al beneficio obtenido por ser solidario el pago de la reparación civil

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

3. Ampliar los beneficios obtenidos con la posibilidad de realizar una cuantificación específica respecto a la responsabilidad de reparación el daño producido por el colaborador para que dicha figura logre surtir efectos positivos.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

4. La Reparación Civil es la obligación que tiene toda persona que ha cometido un acto ilícito para reparar el daño producido en la víctima,

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina

5. La determinación de la reparación civil en el proceso de colaboración eficaz, no se respeta el carácter solidario de la responsabilidad, pues al tratarse de delitos con pluralidad de sujetos inmersos en un proceso penal, todos están obligados a reparar el daño, pero al ser solidaria el pago de la reparación civil genera una desconfianza en la persona que asume el pago total de esta por tener que recurrir a la otra vía para salvaguardar su derecho a repetir.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

6. Modificar la norma para establecer la posibilidad de que el fiscal en el momento de la negociación pueda determinar un monto específico según el grado de intervención del colaborador, la cual sea directamente exigida a aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

2. Cuestionario de encuesta aplicada al Fiscal de la fiscalía
Especializada en Corrupción de Funcionarios.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

“LOS BENEFICIOS OTORGADOS AL COLABORADOR EFICAZ Y LA
TEORÍA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LA REPARACIÓN CIVIL
EN EL PROCESO PENAL”

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

Señor Fiscal José L. Iván Constantino Espino, es grato dirigirme a usted, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizo.

1. ¿Le parece adecuado recoger el fundamento del Derecho Premial como base de la colaboración eficaz?

Es adecuado recoger el fundamento del Dº Premial, por cuanto, el proceso de colaboración eficaz es un beneficio al cual se acoge el imputado en un proceso penal, con la finalidad de obtener reducción de la pena probable a imponer, entonces al ser un beneficio corresponde aplicarlo fundamentado en el Dº Premial.

2. Considera usted que, ¿la regla de la colaboración eficaz no contempla los límites de la responsabilidad civil que sume el colaborador eficaz?

NO contempla, pero fundare acriterias del juez de investigación preparatoria la suspensión de la reparación civil hasta la sentencia final de los autos imputados, y desde ahí se depende lo alcances de la reparación civil.

3. ¿Cree usted apropiada una distribución entre el colaborador eficaz y los imputados responsables del hecho punible como fundamento de los beneficios otorgados?

Si considero adecuada una distribución de la reparación civil, por cuanto todos responden de forma solidaria

4. ¿Resultaría pertinente Ampliar los beneficios obtenidos con la posibilidad de realizar una cuantificación específica respecto a la reparación del daño producido por el colaborador eficaz?

Si parece factible ampliar estos beneficios, en razón de que se puede incluir en los mismos fue la reparación civil que se vio cancelada en los términos de la sentencia condenatoria final.

5. En la determinación de la reparación civil en el proceso de colaboración eficaz, al estar inmerso el carácter solidario ¿cree usted que esta figura se respeta, teniendo en cuenta que se trata de delitos con pluralidad de sujetos?

En la actualidad existe problema al respecto ya que la sentencia de colaboración eficaz de la sentencia final, y por ende el pago total el Colaborador antes del fallo final, incluso, notario reparación respecto a su responsabilidad civil.

6. Al estar la reparación civil comprendida como una obligación en la norma de colaboración eficaz, ¿condiciona el pago de la reparación civil generando una desconfianza en la persona que asume el pago total de esta?

El Colaborador Eficaz tiene la obligación de pagar el daño causado, por ende esta obligación se cancela la reparación civil de acuerdo a los alcances del acuerdo, y por tanto pueden en un todo denegar en relación al orden

7. ¿Qué opinión le merece la propuesta de modificar la norma para establecer la posibilidad de que el fiscal en el momento de la negociación pueda determinar un monto específico según el grado de intervención del colaborador, la cual sea directamente exigida a aquel que se sometió al proceso de colaboración eficaz?

Es interesante dicha propuesta, ya que evita una desigualdad respecto al pago que realiza el Colaborador Eficaz, ya que debería ser proporcional.

8. ¿En su experiencia como fiscal anticorrupción puede decir que la regla de solidaridad en el pago de la reparación civil es aplicada en forma directa en los procesos de colaboración eficaz?

Se está aplicando la regla de solidaridad en el pago de reparación civil para los Colaboradores Eficaces.


9. ¿Podría usted indicar la cantidad de procesos de colaboración eficaz en los que se haya revocado el beneficio a causa de la ausencia de la totalidad del pago de la reparación civil?


Según la regla de Art. 59 del CPenal, es decir aún según en el trámite de ejecución penitenciaria y factible fue ante la ausencia al pago del CE. se revoca la pena.

10. ¿Le parece adecuada la idea de dividir los montos de reparación civil en forma individual, al momento de su determinación, para que así el colaborador eficaz pueda cumplirla y evitar la revocación del beneficio?

En montos donde se puede dividir su participación proporcional, si lo consideramos factible dividir los montos de Reparación civil. Como el caso del delito de peculato por dolo por apropiación, en el caso de los cómplices.

3. Solicitud enviada a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

 <p>PODER JUDICIAL</p>	<p>SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27120 ARCHIVO - CSJL) TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 0132009-0001 E-MAIL:</p>		<p>N° DE REGISTRO</p>
	<p>TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIÓN 27 SEP. 2019</p>		
<p>I FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN</p> <p><i>DRA. JIZETH MARIA ARTEAGA MORALES</i></p>			
<p>II DATOS DEL SOLICITANTE</p>			
<p>MARCAR CON UN "X"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica</p>		<p>TELÉFONO / E-mail</p> <p><i>996894801 / delia-ardeaga@hotmail.com</i></p>	<p>N° RUC (Sólo para Personas Jurídicas)</p>
<p>APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL</p>			
<p>LE/DNI (Persona Natural)</p> <p><i>47697004</i></p>	<p>AV/CALLE/JIRÓN</p> <p><i>San Pedro</i></p>	<p>N° DPTO</p> <p><i>275</i></p>	<p>DISTRITO</p> <p><i>Jose Leonardo Ortiz Chucayo</i></p>
<p>PROVINCIA</p> <p><i>Lambayeque</i></p>		<p>DEPARTAMENTO</p> <p><i>Lambayeque</i></p>	
<p>III INFORMACIÓN SOLICITADA</p> <p><i>> Cantidad de procesos tramitados en los juzgados Penales de la ciudad de Chucayo por Juzgado y por materia entre los años 2015 - 2018</i> <i>> Cantidad y números de expedientes sentenciados en los juzgados penales de la ciudad de Chucayo por delito de Crimen Organizado y Corrupción de funcionarios entre los años 2015 - 2018</i></p>			
<p>IV DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN</p> <p><i>UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES - CSJL</i></p>			
<p>V FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X")</p> <p><input type="checkbox"/> Copia Simple <input type="checkbox"/> Copia Certificada <input type="checkbox"/> Disquete <input type="checkbox"/> Correo Electrónico</p>			
<p>APELLIDOS Y NOMBRES</p> <p><i>Ramirez Altamirano Delia Aydee</i></p>		<p>FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN</p>	
<p>FIRMA (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)</p> <p><i>[Firma]</i></p>			
<p>LE / DNI</p> <p><i>47697004</i></p>			
<p>FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA</p>			
<p>OBSERVACIONES:</p>			
<p>NOTA:</p> <p>1. La forma de entrega estará sujeta a la capacidad técnica de la dependencia</p> <p>2. En caso de Representante Legal, deberá adjuntar copia simple del Documento que acredita la representación</p>			

 <p>PODER JUDICIAL</p>	<p>SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>		<p>N° DE REGISTRO</p>
	<p>II DATOS DEL SOLICITANTE</p> <p>APELLIDOS Y NOMBRES (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)</p> <p><i>RAMIREZ ALTAMIRANO DELIA AYDEE</i></p>		<p>FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN</p>
<p>PODER JUDICIAL</p> <p>SECRETARÍA DE RECAUDACIÓN</p>			<p>CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL</p>

4. Solicitud enviada al Ministerio Público.



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM)



MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía de la Nación

FORMULARIO

N° DE REGISTRO

I.- FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN

JORGE JUDN ARTESGA VERA

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres / Razón Social <i>Ramirez Altamirano Delia</i>		Documento de Identidad: D.N.I / L.M / Otro <i>47697004</i>	
DOMICILIO			
Av./Calle/Jr./Psj <i>Calle San Pedro</i>	N° / Dpto / Int <i>275</i>	Distrito <i>Jose Leonardo Ortiz</i>	Urbanización
Provincia <i>Chiclayo</i>	Departamento <i>Lambayeque</i>	Correo electrónico <i>delia_rmc@hotmail</i>	Teléfono <i>996814801</i>

III.- INFORMACIÓN SOLICITADA:

> Cantidad y numeros de Carpetas fiscales por procesos de Colaboración
Quoz en fiscalías de la ciudad de Chiclayo entre los años 2015- 2018
> Cantidad y numeros de Carpetas fiscales de la ciudad de
Chiclayo por delitos de Crimen Organizado y Corrupción de
funcionarios entre los años 2015-2018

IV.- DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lambayeque.

V.- FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (marcar con X)

COPIA SIMPLE	DISKETTE	CD	CORREO ELECTRÓNICO	OTRO
--------------	----------	----	--------------------	------

APELLIDOS Y NOMBRES <i>Ramirez Altamirano Delia Ardee</i> FIRMA	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN Reg. N° Hora: <i>11:06 am</i> Firma: <i>f</i>
--	--

OBSERVACIONES.....

5. Resultados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

25/11/2019

Correo: delia ramirez altamirano - Outlook

↩ Responder ▼ 🗑 Eliminar ⛔ No deseado Bloquear ...

Solicitud de acceso a la información pública

L Lizeth Maria Arteaga Muñoz <larteagam@pj.gob.pe> ↩ ⏪ →
Mié 9/10/2019 13:55
Usted ✓

ing penales_1.pdf
63 KB

crimeny corrup_1.pdf
63 KB

2 archivos adjuntos (126 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

Estimada señorita Ramírez Altamirano:

En atención a su solicitud del 27 de septiembre de 2019 se le remite adjunto el reporte de casos penales y por crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de los años 2015 al 2018, m reporte emitido por la oficina de estadística de esta Corte Superior.

Sin otro en particular y esperando haber atendido su solicitud, me despido cordialmente.

Atentamente,

Lizeth Arteaga
Funcionaria responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública
Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Período: Ene - Dic 2015

OO.JJ.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
JUZGADO PENAL COLEGIADO	26	9	20	26	22	28	27	18	31	33	22	23	285
JUZGADO PENAL COLEGIADO TRANSITORIO	25	5	23	26	33	28	27	23	23	37	22	28	300
1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	58	13	33	57	59	53	63	53	51	28	25	42	535
2º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	48	21	35	69	67	41	57	62	53	45	30	36	564
3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	50	6	34	66	63	75	47	51	41	59	16	17	525
4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	57	7	46	61	72	65	46	47	45	35	22	42	545
5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	52	14	29	49	85	52	50	61	48	46	28	25	539
6º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	60	5	39	63	65	69	66	38	44	66	21	13	549
7º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	58	4	32	50	76	69	56	28	62	29	23	46	533
8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	69	7	42	52	54	53	55	48	62	37	19	43	541
1º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	80	4	69	66	36	69	88	82	83	90	32	56	755
2º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	61	3	68	61	52	74	79	97	79	85	39	54	752
3º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	55	5	83	48	53	117	76	80	97	89	51	51	805
4º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	83	3	48	59	58	89	103	72	102	79	31	65	792
5º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	65	1	80	61	62	98	86	91	107	93	41	77	862
6º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	85	1	76	55	54	96	73	77	90	100	38	63	808
7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	67	3	80	106	70	107	96	97	66	76	55	72	895
1º JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO	41	0	33	1301	145	37	64	59	49	45	27	31	1832
2º JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1201	4	1205
2º JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

Elaboración: Of. Estadística- CS/JA

Fuente: SIJ - FEE

Ingresos de Expedientes Principales de los Juzgado Penales de Chidlayo de la CSJLA

Periodo: Ene - Dic 2016

OO.JJ.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1° JUZGADO PENAL COLEGIADO	25	14	37	30	36	24	12	19	26	16	61	2	302
2° JUZGADO PENAL COLEGIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
JUZGADO PENAL COLEGIADO TRANSITORIO	26	2	34	21	31	26	15	9	25	16	0	0	205
1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	38	4	88	76	72	65	73	64	27	22	35	0	564
2º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	41	9	56	65	71	55	42	52	51	49	47	0	538
3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	22	12	24	34	44	57	45	58	161	135	91	16	699
4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	21	7	19	33	40	59	43	62	122	131	122	5	664
5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	18	3	26	41	37	56	43	56	117	137	69	43	646
6º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	25	8	15	38	47	53	30	57	118	158	82	20	651
7º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	39	10	74	66	80	72	49	43	46	64	16	2	561
8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	53	9	59	49	83	60	45	45	41	42	40	0	526
9º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	0	0	0	0	0	0	0	822	10	13	8	5	858
1º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	75	3	88	136	114	25	51	102	93	107	54	2	850
2º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	84	6	125	79	128	23	82	80	132	97	69	0	905
3º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	101	22	78	106	85	71	75	88	112	127	72	1	938
4º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	59	26	117	64	89	26	72	99	122	98	72	1	845
5º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	49	7	63	50	42	55	36	28	65	43	21	2	461
6º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	63	8	51	40	24	51	27	68	43	58	25	4	462
7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	59	5	63	52	22	61	25	44	81	40	17	2	471
8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	0	0	0	0	0	0	0	122	3	4	49	6	184
9º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	0	0	0	0	0	0	0	11	10	27	26	3	77
JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO	2	0	2	3	4	2	0	7	0	261	1	0	282
2º JUZGADO PENAL LIQUIDADOR TRANSITORIO	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19

Elaboración: Of. Estadístico- CSJLA

Fuente: S/IJ - FEE

Periodo: Ene - Dic 2017

OOJJ.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1° JUZGADO PENAL COLEGIADO	14	15	20	15	28	22	33	28	41	26	18	23	283
2° JUZGADO PENAL COLEGIADO	38	16	22	21	28	16	31	26	14	25	16	18	271
1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	18	26	20	7	19	37	11	28	10	11	25	27	239
2º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	32	22	37	36	31	34	18	36	22	42	26	31	367
3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	86	109	108	150	145	122	110	121	103	101	109	114	1378
4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	104	101	117	191	99	140	90	164	116	71	134	105	1432
5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	116	96	175	144	77	125	128	99	165	61	117	86	1389
6º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	112	109	122	136	134	112	100	108	96	60	115	92	1296
7º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	21	25	18	24	28	22	22	26	15	17	26	20	264
8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	69	101	42	23	37	29	20	24	16	21	33	36	451
9º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	31	33	119	55	15	19	23	52	47	30	75	69	568
1º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	94	60	105	74	111	76	94	120	135	98	149	52	1168
2º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	101	101	98	95	113	78	103	154	127	107	139	81	1297
3º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	239	68	57	124	97	80	70	100	152	97	183	65	1332
4º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	82	71	82	78	101	82	91	132	104	74	199	65	1161
5º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	60	34	27	24	18	18	17	21	23	28	15	20	305
6º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	46	26	29	18	9	13	9	11	23	17	20	7	228
7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	52	31	22	17	11	9	14	8	17	15	27	13	236
8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	203	30	36	24	21	19	34	29	24	11	14	7	452
9º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	67	84	57	46	44	47	29	24	21	53	46	32	550

Elaboración : Of. Estadística- CS/JLA

Fuente : SIJ - FEE

Periodo: Ene - Dic 2018

OO.JJ.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1° JUZGADO PENAL COLEGIADO	17	11	16	28	22	19	20	26	20	26	19	27	251
2° JUZGADO PENAL COLEGIADO	23	10	27	21	24	21	21	30	23	23	24	23	270
1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	22	3	22	45	27	49	25	63	52	23	38	39	408
2º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	43	5	24	45	50	45	83	131	32	45	56	33	592
3º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	95	26	77	97	74	44	84	105	86	68	97	59	912
4º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	78	20	95	139	74	44	75	260	59	107	80	35	1066
5º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	87	27	109	110	87	49	75	157	90	94	70	52	1007
6º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	109	28	93	112	80	60	67	188	61	100	79	48	1025
7º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	29	5	27	42	29	25	32	99	24	39	30	25	406
8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	56	7	56	38	25	18	37	144	55	21	27	35	519
9º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	66	18	78	125	82	60	515	132	95	110	73	89	1443
10º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL	0	0	69	30	24	21	19	13	8	23	12	4	223
1º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	96	0	70	68	64	56	56	60	46	49	44	57	666
2º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	125	1	71	58	87	45	67	63	48	69	43	61	738
3º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	114	5	51	61	95	46	51	53	38	69	32	63	678
4º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	89	13	63	51	86	36	47	65	34	70	40	70	664
5º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	17	1	23	24	17	15	14	22	12	14	19	12	190
6º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	19	1	21	16	15	13	10	11	11	20	16	19	172
7º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	27	2	21	21	16	9	11	16	19	17	25	16	200
8º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	24	0	31	12	14	11	11	10	6	7	4	3	133
9º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	45	0	39	46	28	21	25	28	29	29	19	10	319
10º JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	0	0	69	22	20	11	10	36	37	22	8	10	245

Elaboración: Of. Estadístico- CS/JA

Fuente: S/IJ - FEE

Expedientes Principales por delito según estado de los Juzgado Penales de Chiclayo de la CSJLA

Periodo: Año 2015

Estado	Secuestro	Trata de personas	Extorsión.	Participación de funcionario público en delitos contra los bienes culturales	Producción, desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas	Microcomercializa ción o microproducción.	Malversación de fondos.	Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo	TOTAL
APELADO	0	0	3	0	0	0	0	0	3
ARCHIVO	0	0	1	0	0	1	0	0	2
ARCHIVO DEFINITIVO	0	0	112	0	10	191	2	18	333
ARCHIVO PROVISIONAL	17	4	1	0	0	2	0	0	24
CON EJECUCION CONCLUIDA	0	0	0	0	0	7	0	0	7
CON RESOLUCION CONSENTIDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
EJECUCION	0	0	5	1	5	54	3	2	70
CALIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
EN CALIFICACION	1	0	15	0	1	8	0	0	25
EN EJECUCION	0	0	21	0	2	55	0	1	79
EN TRAMITE(Pendiente)	0	0	10	0	1	2	0	0	13
EXHORTO PARA DILIGENCIAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
RESERVA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
PARA SENTENCIAR / PARA RESOLVER	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SENTENCIADO/ RESUELTO	1	0	22	0	1	10	0	0	34
TRAMITE	1	0	34	0	1	42	1	0	79
EXHORTO DILIGENCIADO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
TOTAL	20	4	226	1	21	378	7	21	678

Elaboración: Of. Estadístico- CSJLA

Fuente: SI/

Expedientes Principales por delito según estado de los Juzgado Penales de Chiclayo de la CSJA

Periodo: Año 2016

Estado	Secuestro	Trata de Personas	Extorsión.	Producción, desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas	Microcomercialización o microproducción.	Malversación de fondos.	Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo	TOTAL
ARCHIVO	0	0	1	0	4	0	0	5
ARCHIVO DEFINITIVO	21	1	181	1	180	1	4	389
ARCHIVO PROVISIONAL	0	0	4	0	10	0	0	14
ENCALIFICACION	7	1	25	2	33	0	1	69
CALIFICADO	0	0	2	0	0	0	0	2
EJECUCION	0	0	0	1	62	0	0	63
EN EJECUCION	2	1	6	2	72	0	1	84
EXHORTO DILIGENCIADO	6	1	1	0	6	0	0	14
EXHORTO INGRESADO	1	0	0	0	1	0	1	3
EXHORTO PARA DILIGENCIAR	0	0	2	0	3	0	0	5
EN PLAZO DE IMPUGNACION	0	0	0	1	2	0	0	3
TRAMITE	8	0	88	3	101	4	1	205
EN TRAMITE(Pendiente)	0	0	32	0	7	1	1	41
EJECUCION	0	5	15	0	0	0	0	20
EN RESERVA	0	0	8	0	4	0	0	12
PARA SENTENCIAR / PARA RESOLVER	0	0	1	0	0	0	0	1
RESERVA	0	0	4	0	6	0	0	10
RESUELTO/ATENDIDO	0	0	3	0	2	0	0	5
SENTENCIADO/ RESUELTO	0	0	30	0	4	0	0	34
APELADO	0	0	0	0	2	0	0	2
CON EJECUCION CONCLUIDA	0	0	0	0	4	0	0	4
CON RESOLUCION CONSENTIDA	0	0	0	0	1	0	0	1
JUZGAMIENTO	0	0	0	0	1	0	0	1
INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	45	9	403	10	505	6	12	990

Elaboración: Of. Estadístico- CSJA

Fuente: SI

Expedientes Principales por delito según estado de los Juzgado Penales de Chiclayo de la CSJLA

Periodo: Año 2017

Estado	Secuestro	Trata de Personas	Extorsión.	Producción, desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas	Microcomercializaci ón o microproducción.	Malversación de fondos.	Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo	TOTAL
APELACION	0	0	1	0	0	0	0	1
ARCHIVO	0	0	1	0	3	0	0	4
ARCHIVO DEFINITIVO	7	0	0	14	265	0	8	294
ARCHIVO DEFINITIVO	0	0	132	0	0	0	0	132
ARCHIVO PROVISIONAL	0	0	10	0	4	0	0	14
CALIFICADO	2	0	22	0	1	0	0	25
ENCALIFICACION	0	1	16	0	18	1	0	36
CON EJECUCION CONCLUIDA	0	0	1	0	2	0	0	3
EJECUCION	8	0	29	0	50	0	1	88
ENEJECUCION	2	2	39	2	140	0	1	186
SENTENCIADO/ RESUELTO	0	2	37	0	10	0	1	50
TRAMITE	16	5	128	1	108	0	1	259
EN PLAZO DE IMPUGNACION	0	0	2	0	2	0	0	4
EN RESERVA	0	0	1	0	4	0	0	5
EN TRAMITE(Pendiente)	0	0	42	0	14	0	0	56
RESERVA	0	0	3	0	3	0	0	6
RESUELTO/ATENDIDO	0	0	3	0	0	0	0	3
EXHORTO PARA DILIGENCIAR	0	0	0	0	1	0	0	1
INVESTIGACION	0	0	0	0	1	0	0	1
JUZGAMIENTO	0	0	0	0	8	0	0	8
PARA SENTENCIAR / PARA RESOLVER	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	35	10	467	17	635	1	12	1177

Elaboración: Of. Estadística- CSJLA

Fuente: SIJ

Expedientes Principales por delito según estado de los Juzgado Penales de Chiclayo de la CSJLA

Periodo: Año 2018

Estado	Secuestro	Trata de Personas	Extorsión.	Participación de funcionario público en delitos contra los bienes culturales	Producción, desarrollo y comercialización o tenencia de armas químicas	Microcomercialización o microproducción.	Malversación de fondos.	Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo	TOTAL
APELADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
APELACION	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ARCHIVO DEFINITIVO	12	2	48	0	8	197	8	52	327
ARCHIVO PROVISIONAL	0	0	4	0	0	16	1	28	49
EJECUCION	2	0	0	0	0	0	0	0	2
EN CALIFICACION	5	0	0	0	0	0	0	24	29
EN CALIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	68	68
CALIFICADO	0	0	18	0	0	7	0	1	26
CON RESOLUCION CONSENTIDA	0	0	1	0	0	0	1	0	2
CON EJECUCION CONCLUIDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
EJECUCION	0	0	26	0	0	102	0	0	128
EN CALIFICACION	4	0	37	0	0	44	0	0	85
EN EJECUCION	3	0	6	0	0	142	2	22	175
EN PLAZO DE IMPUGNACION	0	0	0	0	0	4	1	2	7
JUZGAMIENTO	1	0	4	0	0	18	9	19	51
EN RESERVA	0	0	4	0	0	4	0	1	9
RESERVA	3	1	0	0	0	0	0	0	4
EN TRAMITE(Pendiente)	0	0	267	0	1	24	4	28	324
TRAMITE	7	0	0	1	1	278	21	74	382
EN TRAMITE DE EJECUCION	0	0	0	0	0	3	0	0	3
EXHORTO DILIGENCIADO	0	0	1	0	0	1	0	2	4
INVESTIGACION	0	0	2	0	0	17	0	0	19
PARA SENTENCIAR / PARA RESOLVER	0	0	4	0	0	1	0	0	5
RESERVA	0	0	4	0	0	5	0	0	9
SENTENCIADO/ RESUELTO	0	0	63	0	0	10	7	33	113
RESUELTO/ATENDIDO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
TOTAL	37	3	489	1	10	875	56	356	1827

Elaboración: Of. Estadístico- CSJLA

Fuente: SIJ

6. Resultados del Ministerio Público



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL
DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE

Chiclayo, 16 de Octubre del 2019



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAC
VERA Jorge Juan FAU 20131370
hard
Presidente De La Junta De Fiscales
Superiores Del Df La
Motivo: Soy el autor del document
Fecha: 16.10.2019 16:16:34 -05:0

CARTA N° 000165-2019-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE

Señora:

DELIA RAMIREZ ALTAMIRANO.

Dirección: Calle San Pedro N°275 del Distrito de José Leonardo Ortiz.

ASUNTO: SE REMITE RESPUESTA A LO SOLICITADO.

REFERENCIA: SOLICITUD S/N DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo, y en mérito al documento descrito en la referencia, se **EMITE RESPUESTA** a lo solicitado, **SEÑALÁNDOLE** que a través del Oficio N° 300-2019-FSPC-GI-LAMBAYEQUE, de fecha 14 de octubre del año en curso, la Dra. Carmen Graciela Miranda Vidaurre, en su calidad de Fiscal Superior Penal – Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Mixtas de Lambayeque, nos **remite** en folios 01, el **cuadro estadístico** extraído del sistema informático denominado “Sistema de Gestión Fiscal” –SGF- respecto a los casos ingresados en la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2015 al 2018, advirtiendo que no es posible obtener información del Sistema de Gestión Fiscal, el detalle de los casos con proceso de Colaboración Eficaz y respecto del detalle de los números de casos consignados no es posible su identificación, puesto que solo es posible obtener información sobre la cantidad de carga ingresada en cada una de estas dependencias fiscales especializadas; en tal sentido se corre traslado de lo informado por la indicada coordinadora, para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi mayor consideración.

Atentamente,

cc:

JAV/jfg
H.E 8863-2019.
EXP. 9248-2019.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado en el MPFN. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas.
CARTA N° 000165-2019-PJFS-LAMBAYEQUE Página 1 de 1

(511) 625-5555 - 208-5555
Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú
www.fiscalia.gob.pe

**ESTADÍSTICA DE CARGA INGRESADA DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LAMBAYEQUE Y DE LA FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE
LAMBAYEQUE - DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE**

PERIODO: 2015-2018

DEPENDENCIA	AÑO			
	2015	2016	2017	2018
FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAMBAYEQUE	697	892	654	717
FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE LAMBAYEQUE	20	74	65	62
				221

Fuente: Sistema de Gestión Fiscal - SGF

tesis final

por Delia Aydeé Ramírez Altamirano

Fecha de entrega: 26-may-2020 06:57p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1332447259

Nombre del archivo: TESIS_DELIA_RAMIREZ_ALTAMIRANO-convertido_1_1.pdf (5.75M)

Total de palabras: 37611

Total de caracteres: 203855

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE
INTERNET

1%

PUBLICACIONES

16%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	6%
2	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	ezproxybib.pucp.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.unapiquitos.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	pirhua.udep.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	issuu.com Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	1%

9	190.41.60.2 Fuente de Internet	1%
10	ius360.com Fuente de Internet	1%